



Infojus

SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

MINISTERIO DE MARINA

Oficina de Informaciones



MANUAL

DE

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

POR

T. J. LAWRENCE

OBRA ADOPTADA POR EL ALMIRANTAZGO BRITÁNICO PARA
USO DE LOS OFICIALES DE LA REAL ARMADA



1902



Biblioteca de la Corte Suprema	105286	6431
Nº de Orden		Publicación

INFORMACIÓN JURÍDICA



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA



INDICE

PARTE I

INTRODUCCION

CAPITULO I

Definición y naturaleza del Derecho internacional

	Pág
A. Definición del Derecho Internacional.....	11
B. Naturaleza del Derecho Internacional.....	13

CAPITULO II

Historia del Derecho Internacional

A. Períodos.....	15
B. Principios.....	16

CAPITULO III

Sujetos del Derecho Internacional

A. Sujetos.....	19
B. Admisión de nuevos sujetos.....	23

CAPITULO IV

Fuentes y divisiones del Derecho Internacional

A. Fuentes.....	26
B. Divisiones.....	29

Infojus

SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

PARTE II

ESTADO DE PAZ

CAPITULO I

Derechos y obligaciones conexos con la independencia

	Pág
A. Naturaleza del derecho de independencia.....	33
B. Intervención.....	34
C. Consideraciones generales aplicables á la intervención...	36

CAPITULO II

Derechos y obligaciones conexos con la propiedad

A. Derechos de propiedad de los estados.....	37
B. Modos de adquisición de territorio.....	39
C. Diferentes grados de poder sobre el territorio.....	42
D. Cuestiones conexas con las pretensiones de los estados en relación con derechos territoriales sobre aguas....	44

CAPITULO III

Derechos y obligaciones conexos con la jurisdicción

A. Reglas generales sobre jurisdicción.....	47
B. Excepciones.....	51
C. Extradición.....	52

CAPITULO IV

Derechos y obligaciones conexos con la igualdad

A. Doctrina de la igualdad.....	53
B. Reglas de ceremonial y etiqueta.....	54

CAPITULO V

Derechos y obligaciones conexos con la diplomacia

A. Relaciones diplomáticas.....	56
B. Inmunidades diplomáticas.....	58
C. Cónsules.....	59
D. Tratados.....	60

PARTE III

ESTADO DE GUERRA

CAPITULO I

Definición de la guerra y otros puntos preliminares

A. Naturaleza de la guerra.....	65
B. Declaraciones de guerra.....	66
C. Reconocimiento de la beligerancia.....	67
D. Efectos inmediatos del comienzo de la guerra.....	68

CAPITULO II

Adquisición del caracter de enemigo

A. Personas enemigas.....	69
B. Propiedad enemiga	70

CAPITULO III

El derecho de la guerra con respecto á las personas enemigas

A- Súbditos enemigos que se encuentran en un estado al comienzo de la guerra.....	71
B. Enemigos combatientes.....	72
C. Enemigos no combatientes.....	73

CAPITULO IV

El derecho de la guerra con respecto á la propiedad enemiga en tierra

A. Propiedad enemiga que se encuentra en un estado al comienzo de la guerra.....	75
B. Botín.....	76
C. Ocupación beligerante y derechos que confiere sobre la propiedad.....	76

CAPITULO V

El derecho de la guerra con respecto á la propiedad enemiga en el mar

A. Derecho de captura.....	78
B. Derecho de visita.....	80
C. Tribunales de presas.....	80

CAPITULO VI

Agentes, instrumentos y métodos de guerra

Pág.

A. Agentes.....	82
B. Instrumentos y métodos.....	83

CAPITULO VII

Relaciones no-hostiles de los beligerantes y efectos legales de la conclusión de la paz

A. Relaciones no hostiles de los beligerantes.....	84
B. Efectos legales de la conclusión de la paz.....	86

PARTE IV

NEUTRALIDAD

CAPITULO I

Naturaleza y división de la neutralidad

A. Naturaleza de la neutralidad.....	89
B. Divisiones de la neutralidad.....	91

CAPITULO II

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los estados neutrales

A. Obligaciones de un estado beligerante hacia los estados neutrales.....	93
B. Obligaciones de un estado neutral hacia los estados beligerantes.....	94
C. Punto dudoso.....	96
D. Leyes sobre alistamientos para el extranjero.....	97

CAPITULO III

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales

COMERCIO ORDINARIO

A. Principios reguladores de las presas marítimas.....	98
B. Reglas de captura vigentes contra los neutrales.....	99

CAPITULO IV

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales

BLOQUEO

	Pág.
A. Naturaleza del bloqueo.....	101
B. Especies de bloqueo.....	101
C. Violación de bloqueo.....	103
D. Pena para la violación de bloqueo.....	104

CAPITULO V

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales

TRÁFICO DE CONTRABANDO

A. Naturaleza de la ofensa de transportar contrabando.....	104
B. Reglas sobre el caracter de contrabando.....	105
C. Pena para el transporte de contrabando.....	107

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales

SERVICIO NO - NEUTRAL

A. Naturaleza del servicio no-neutral.....	107
B. Reglas sobre el servicio no-neutral.....	108
C. Pena para el servicio no-neutral.....	108

APÉNDICES

1. Documentos que llevan los buques mercantes de bandera nacional.....	113
2. Documentos que llevan los buques mercantes de diversas naciones.....	113
3. Legislación nacional sobre presas.....	118
4. Artículos adicionales de la Convención de Ginebra para mejorar la condición de los enfermos y heridos.....	119

5. Reglamento francés sobre entradas á puerto y estadas en tiempo de guerra.....	125
6. Entrada de los buques neutrales de guerra á los puertos bloqueados.....	128
7. El derecho marítimo en la guerra hispano-norteamericana.....	132





PARTE I

INTRODUCCION



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

PARTE I
INTRODUCCION



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

CAPITULO I

Definición y naturaleza del Derecho Internacional

A—DEFINICIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL.

Se denomina *Derecho Internacional* al conjunto de reglas que determinan la conducta del cuerpo general de los estados civilizados en sus relaciones recíprocas. Existe aún mucha discusión sobre la naturaleza del derecho internacional, sus métodos, sus límites y su relación con la ciencia de la Ética. Todos los esfuerzos para definirlo están subordinados á las vistas que con relación á estas materias tienen los individuos que intentan dar una definición. La que hemos adoptado procede de la consideración de que los estudiantes de derecho internacional deben conocer principalmente las reglas actualmente observadas por los estados en sus relaciones mútuas, y su clasificación y concordancia con referencia á los principios fundamentales en que están basadas dichas reglas. Debemos notar á este respecto que ellas se refieren á

- (1) Reglas que *son* generalmente observadas y nó reglas que, en opinión de quienes las proponen, *deberían* ser generalmente observadas.

Sea moralmente exacta una regla ó sea ella moralmente errónea, forma parte del derecho internacional, si es generalmente aceptada y observada.

- (2) Reglas que son generalmente observadas por los estados *civilizados*, y nó reglas que son generalmente observadas por los estados *cristianos* solamente.

El derecho internacional moderno nació de un grupo de estados cristianos y fué muy influenciado por las reglas de la moral cristiana; pero como ahora es aceptado por varios estados nó cristianos, como el Japón y Turquía, no podemos hablar de él considerándolo peculiar solamente á las naciones cristianas. Es, sin embargo, peculiar á los pueblos civilizados; pero el grado de civilización necesario no puede encerrarse dentro de términos definidos. Aunque las tribus bárbaras no se han sometido de lleno á sus reglas, la conducta de los estados civilizados con respecto á ellas debe regularse por los principios de justicia y de clemencia.

- (3) Reglas que son generalmente observadas por los estados civilizados en su trato con *individuos pertenecientes á otros estados* y así mismo reglas generalmente observadas por los estados civilizados en su trato con *otros estados*.

Cada estado en sus comunicaciones con extranjeros se rige en parte por reglas que libremente puede establecer para sí de acuerdo con su voluntad, y en parte por reglas que son determinadas por el consenso general de las potencias civilizadas. Las primeras no pertenecen al derecho internacional. Las últimas sí. En muchos casos de presas marítimas, por ejemplo, los estados se comunican directamente con personas privadas que pertenecen á naciones extranjeras, de acuerdo con reglas que han recibido el consentimiento expreso ó tácito de todas las potencias civilizadas.

La denominación *derecho internacional* es relativamente moderna. Hasta el siglo pasado esta ciencia se llamaba *derecho de gentes* ó *derecho natural*. Pero el nombre moderno es mejor porque evita el peligro de confundirlo con

el *Jus Gentium* romano, y porque alude de una manera inconfundible á su carácter de sistema de reglas observadas por los estados en sus mútuas relaciones.

B—NATURALEZA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Al discutir la naturaleza del derecho internacional tenemos que considerar

- (1) Si podemos deducirlo del derecho natural, esto es, de ciertos principios de autoridad universal, que pueden ser descubiertos por la razón humana, pero que existen independientemente de los arreglos de los hombres; ó si él se ha generalizado por las prácticas de los estados en su trato mútuo.

Los fundadores del derecho internacional moderno fueron adeptos de la primera teoría por su creencia en un derecho natural aplicable á los estados; pero no lo distinguieron del segundo con claridad, y sus métodos mixtos amenudo han sido seguidos por los escritores sucesivos. Empero, puede sostenerse que

- (a) La teoría del derecho natural es históricamente falsa y filosóficamente insostenible, porque confunde juntamente lo positivo y lo ideal.
- (b) Los que creen en él, están en divergencia con respecto al carácter y á los mandatos del así llamado derecho natural.
- (c) En sus controversias los estados apelan, nó á principios innatos y á derechos absolutos, sinó á reglas que puede probarse han sido observadas con antelación en análogas circunstancias por todas las naciones civilizadas ó por la mayoría de ellas.

Sostenemos, por consiguiente, que las reglas del derecho internacional deben descubrirse estudiando la conducta de los estados en sus mútuas relaciones, y que su fundamento es principalmente histórico é inductivo.

Pero las consideraciones éticas no deben desecharse del todo, porque á veces hay dos ó más corrientes en la práctica, y de esa diversidad surge la duda. En tales casos las opiniones de los juristas deben estar en favor de aquellas reglas que parezcan más justas y humanas y más concordantes con las doctrinas aceptadas. Además, se presentan casos nuevos distintos de los anteriormente decididos. Se requieren entonces nuevas reglas, y en su creación deben tener influencia preponderante los principios morales. El derecho internacional progresa con los adelantos de la opinión; y sobre los que lo estudian recáe la responsabilidad de influenciar los ánimos de los hombres en favor de la rectitud en todas las transacciones entre estados, aunque nunca deben dejarse llevar por el entusiasmo á proclamar como buena una regla, como parte de su sistema, antes de haber ella encontrado general aceptación.

(2) Si el derecho internacional es una ley, propiamente hablando.

Muchas de sus reglas carecen de sanción definida; por consiguiente, la pretensión de que se las considere como leyes es negada por los pensadores ingleses, que aceptan el concepto de San Agustin sobre la ley, y que colocan á las reglas del código internacional entre “las reglas morales positivas que impropriamente son llamadas leyes”. Sin embargo, se notará que:

- (a) Las reglas del apresamiento marítimo tienen sanciones muy definidas y por consiguiente son leyes de acuerdo estrictamente con los cánones agustinianos.
- (b) La definición de ley de San Agustin no es la única posible. Si la seguimos en la consideración de que es impuesta por una fuerza superior, mirando á las leyes como mandatos á cuya obediencia son compelidos los hombres por temor de un mal definido que seguirá á la desobediencia, podemos sostener que muchas de las reglas del derecho internacional no

son leyes en el sentido estricto de la expresión. Por otra parte, si la hacemos depender de una noción de orden, mirando á las leyes como mandatos que regulan nuestra conducta, podremos usar con perfecta propiedad el término derecho internacional.

Podemos resumir nuestras conclusiones con respecto á la naturaleza del derecho internacional diciendo que debe ser considerado principalmente como una colección de reglas positivas actualmente observadas entre los estados civilizados, pero que la cuestión de considerarla ó nó como una ley es un asunto de nomenclatura de escasa importancia, en cuanto tengamos idea justa de su carácter, sus métodos y su inmenso valor como instrumento del progreso humano.

CAPITULO II

Historia del Derecho Internacional

—A. PERIODOS.

Hay algunas tribus tan bárbaras que no tienen reglas para guiar su conducta con sus vecinos; pero el derecho internacional, como nosotros lo entendemos, es un sistema nacido entre las naciones de Europa y que se ha extendido á todas las comunidades civilizadas situadas fuera de las fronteras de la Europa. En su forma moderna no tiene más de trescientos años de edad; pero se encuentran sus gérmenes rudimentarios en la antigüedad remota. Dividiremos la historia del derecho internacional en tres períodos, cada uno de los cuales presencié la aplicación de algún principio definido á las mútuas relaciones de los estados.

- (1) Desde los tiempos primitivos hasta el establecimiento del imperio romano.
- (2) Desde el establecimiento del imperio romano hasta la Reforma.

(3) Desde la Reforma hasta nuestros días.

Cada uno de estos períodos se confunde gradualmente con el que le sigue, y cada uno se señala por la supremacía de un principio fundamental, que fué aceptado durante muchos años sin duda ni vacilaciones, discutido luego en cuanto se hacía menos aplicable á circunstancias diversas y sustituido finalmente por un nuevo principio adaptado al estado cambiado de los asuntos internacionales.

B—PRINCIPIOS.

Vamos ahora á establecer los principios á que nos hemos referido y á demostrar como forma cada uno de ellos la base del derecho internacional en el período en que se aplica.

(1) El principio del primer período fué el de *que los estados como tales no tenían mútuos derechos y obligaciones, pero que las tribus que tenían relaciones de consanguinidad se debían unas á otras ciertos deberes.*

La monarquía era la base de todas las sociedades antiguas y así como establecía la condición del individuo dentro del estado, prescribía y limitaba los deberes del estado hacia otros estados. Nada existía entre los hombres fuera del círculo de la consanguinidad real ó supuesta. Así, encontramos en la historia de la antigua Grecia que

(a) Los bárbaros eran considerados como seres destinados por la naturaleza á la esclavitud y se entendía que con ellos no era posible establecer otras relaciones que las de hostilidad.

(b) Entre los pueblos descendientes de los Helenos, existía un derecho internacional rudimentario que prescribía la sepultura de los muertos en combate, que no fueran molestados los concurrentes á los juegos públicos y otras reglas de carácter análogo.

(c) Surgió un código de leyes marítimas entre los pueblos navegantes de la Grecia, el cual fué más tarde in-

corporado en una gran extensión á la legislación de los emperadores romanos.

Con respecto á Roma no se ha evidenciado satisfactoriamente que la República mirara á las naciones extranjeras como poseedoras de derechos contra ella fuera de los que nacían de pactos especiales, excepto quizás lo que concernía á la santidad de las personas de los embajadores. El régimen de la disciplina en sus ejércitos y el ceremonial para declarar la guerra, prescripto por el *Jus Feciale*, eran debidos al amor al orden de los romanos más que á cualquier idea de deber internacional.

- (2) El principio del segundo período fué el de *que había en alguna parte un superior común cuyas decisiones ataban á los estados.*

Cuando los emperadores romanos gobernaban la mayor parte del mundo civilizado de entonces, nació la idea de soberanía universal y llegó á ser una de las más profundamente arraigadas en la humanidad. A este respecto tenemos que notar que

- (a) Hasta que el imperio romano cayó en la decadencia, se correspondían la idea y el hecho. Las disputas entre los príncipes subordinados y las comunas eran llevadas en apelación al César. Sus órdenes tenían fuerza de ley tanto en los asuntos municipales como en los internacionales.
- (b) El santo ó restaurado imperio romano de Carlomagno y sus sucesores reclamaba la supremacía universal y los hombres hallaron razonable la exigencia. A medida que creció el Papado y el imperio se hizo más y más germánico, reclamaron los Papas el dominio del mundo entero. Pero la aparición de la noción de soberanía territorial, la mutilación gradual del imperio y las corrupciones del Papado, tendieron á debilitar la teoría en virtud de la cual los estados necesitaban tener un superior común.

La creencia en el principio de la supremacía universal fué destrozada por la Reforma. El Papa y el Emperador fueron compelidos á tomar parte en un gran conflicto internacional el cual, de acuerdo con la teoría dominante hasta ese momento, debía ser decidido por la autoridad de uno ú otro de ellos, ó por la de ambos. Al mismo tiempo el descubrimiento de América dió márgen á muchos problemas de cuya solución eran incapaces las reglas existentes. Había gran peligro de una anarquía universal, pero por fortuna nació oportunamente un nuevo sistema de las ruinas del antiguo.

- (3) El principio del tercer período fué el de *que los estados como tales tienen mútuos derechos y obligaciones, los que no necesitan de ningún superior común para tener autoridad.*

La destrucción del antiguo orden internacional y la necesidad de dar solución á las cuestiones que nacieron á raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo, inclinaron á muchos hombres capaces á la tarea de encontrar algún fundamento aceptable por la generalidad para sentar el nuevo orden de cosas. A gran distancia de todos tuvo el mayor éxito Hugo Grocio, quien publicó en 1625 su *De jure belli ac pacis*. Puede ser considerado como el fundador del derecho internacional moderno. Sus raciocinios estaban basados en la proposición de que aunque los estados no tengan un superior común se hallan, sin embargo, ligados unos á otros por muchos deberes, que se hallan, determinados por una ley de la naturaleza y por el consenso común. Al elaborar su sistema adoptó muchas ideas del *jus gentium* romano, sistema conexo, como el suyo, con la naturaleza y el derecho natural. Los estadistas y juristas adoptaron sus principios; y éstos fueron el fundamento del derecho público de la Europa moderna. Debemos notar que

- (a) La teoría del derecho natural está ahora cayendo en descrédito, y el consentimiento expreso ó tácito de

los estados para poner límite á las reglas del derecho internacional, se mira generalmente como el fundamento único para imprimirle autoridad.

- (b) El siglo de Grocio creía implícitamente en el derecho natural, y probablemente hubiera declinado la aceptación de los preceptos humanitarios si no los hubiera considerado como partes de un código cuya fuerza y autoridad era independiente de toda humana institución.

Desde el tiempo de Grocio el derecho internacional ha avanzado siguiendo los lineamientos que él trazara. Algunas de sus reglas nunca fueron aceptadas; otras, estuvieron en vigencia, pero cayeron en desuso por el progreso continuo; muchas eran rudimentarias y se han desarrollado con el aumento de la civilización; mientras han sido elaborados grandes cuerpos de reglas para llenar nuevas necesidades y estar de acuerdo con los cambios de circunstancias. Pero en sus líneas principales todavía persiste el sistema de Grocio; y aunque — como lo veremos en la parte II, Capítulo IV, — uno de sus principios fundamentales dá signos de tender á su desaparición, parece bajo otros respectos que por mucho tiempo en lo futuro tendrá el asentimiento de la humanidad civilizada.

CAPITULO III

Sujetos del Derecho Internacional

A — SUJETOS.

Los sujetos del derecho internacional no se consideran todos bajo el mismo pié con respecto á él. Sus reglas gobiernan á sus mútuas relaciones en mayor ó menor grado, de acuerdo con las circunstancias que se encontrarán en el resto de este capítulo. Pueden ser clasificados como sigue:

- (1) Estados soberanos.

Un estado puede definirse como *una comunidad política, cuyos miembros están ligados entre sí por el vínculo de una común sujeción á alguna autoridad central, cuyos mandatos obedecen generalmente la mayor parte de ellos. Es soberano ó independiente, si su gobierno no presta obediencia habitual á ningún poder de la tierra. Es un sujeto del derecho internacional, si es uno de los estados que aceptan el sistema de las reglas internacionales, ó si ha sido recibido en la familia de las naciones, esto es, en el número de aquellas comunidades políticas que poseén los derechos y están sometidas á las obligaciones conferidas por el derecho internacional á los estados soberanos. La soberanía interna es el poder ejercido por los gobernantes sobre sus propios súbditos. La soberanía externa es el poder de tratar á nombre de un estado con el gobierno de otros estados. Los estados soberanos que son sujetos del derecho internacional pueden dividirse en dos clases:*

- (a) Las Grandes potencias de Europa y los Estados Unidos de Norte América. En muchas materias importantes rápidamente alcanzan una posición de primacia que consideraremos en la Parte II, Cap. I y IV.
- (b) Los demás estados independientes. Poséen todos los derechos comunes acordados por el derecho internacional á los estados soberanos, pero no participan de la autoridad reivindicada por las grandes potencias para inspeccionar y alterar algunas de las disposiciones internacionales existentes.

Todas las comunidades políticas independientes, en las cuales la autoridad suprema habla en nombre de todo el estado en sus relaciones con otros estados, son iguales ante el derecho internacional cualesquiera que sean las peculiaridades de sus constituciones internas. La cuestión de si un estado es internamente un todo orgánico ó una federación, es importante del punto de vista del derecho constitucional pero nada tiene que ver con el derecho internacional, á

ménos que una parte de los poderes externos de la soberanía esté reservada por el pacto federal á cada estado aisladamente considerado dentro de la federación. Puesto que los estados soberanos pertenecen á la familia de las naciones civilizadas, están sometidos al derecho en máximo grado y sus relaciones externas por él se gobiernan enteramente.

(2) Estados semi-soberanos.

Un estado semi-soberano, en el sentido acordado á la expresión por el derecho internacional, *es una comunidad política en la cual una parte de los poderes externos de la soberanía son ejercitados por su propio gobierno, y de otra parte está investido algún otro cuerpo político*. Tales comunidades caén bajo el derecho internacional sólo en relación de aquella parte de sus asuntos externos que pueden manejar por sí mismos. Pueden dividirse en tres clases.

- (a) Comunidades que están bajo protectorado. El protector es el estado poseedor de los poderes de soberanía externa que no puede ejercer el gobierno local de la comunidad en cuestión. Así, Turquía posee derechos de protectorado sobre el Egipto, porque á este último le está prohibido por el firmán de 1879 concluir tratados que contengan arreglos políticos con potencias extranjeras, y está obligado á comunicar á la Puerta, antes de su publicación, todas las convenciones comerciales y postales.
- (b) Miembros de una confederación en la cual cada estado retiene una parte del poder de soberanía externa, mientras el resto es ejercido por una autoridad central de la confederación. Es un buen ejemplo la Confederación Germánica, durante el período de 1815 á 1866.
- (c) Comunidades que están privadas por el derecho público de algunos de los poderes de la soberanía. Pertenecen á esta clase los estados permanentemente neutralizados, como la Bélgica. Su neutra

lidad está garantizada á condición de que nunca hagan la guerra salvo para defenderse á sí mismos de un ataque actual. Sus gobiernos se encuentran así considerablemente restringidos en el manejo de sus negocios externos.

El término semi-soberano no se aplica en los documentos diplomáticos á esos estados confederados ó neutralizados que acabamos de considerar; pero para el objeto de la clasificación es necesario agruparlos bajo una denominación genérica que permita distinguirlos de los estados cuyos gobiernos nacionales pueden ejercitar todos los poderes de la soberanía externa.

(3) Comunidades beligerantes que no son estados.

Estas son comunidades que procuran asegurar su independencia por la guerra, pero que todavía no están reconocidas como estados soberanos. A menudo obtienen lo que se llama el reconocimiento de la beligerancia, cuyo efecto es el de dotarlos con los derechos é imponerles las obligaciones de los estados independientes, hasta donde lo exija la conducción de las hostilidades, pero no más allá. Sus buques de guerra se consideran cruceros legales, y sus soldados se tienen por combatientes legítimos, pero sus gobiernos no pueden negociar tratados formales ni acreditar ministros diplomáticos. En la Parte III, Cap. I, se encontrará una información relativa al reconocimiento de la beligerancia.

(4) Corporaciones.

Estas deben dividirse en dos especies:

- (a) Corporaciones ordinarias. Como dueños de propiedades, pueden caer bajo las leyes de captura.
- (b) Corporaciones privilegiadas. Un cierto número de grandes compañías comerciales han sido autorizadas por los estados bajo cuyas leyes se encuentran incorporadas, á adquirir territorios en países lejanos, ejercer dominio sobre ellos y hacer la paz y la guerra con los príncipes nativos. Tales cuerpos

son sujetos del derecho internacional en una forma extraordinaria y anormal. Con respecto á los naturales de los distritos que les han sido asignados, ejercen muchos de los poderes de soberanía. En relación de sus propios gobiernos, son súbditos. En tiempos recientes, las grandes potencias colonizadoras han acordado cartas á muchas de esas compañías. Por ejemplo, Alemania en 1885 dió concesiones especiales y jurisdicción dentro de los vastos distritos de su esfera de influencia en el Africa Oriental, á la Compañía Alemana del Africa Oriental. La Gran Bretaña obró en la misma forma con respecto á varias compañías británicas, siendo las principales la Compañía de Borneo del Norte, la Compañía Real del Niger, y la Compañía de Sud Africa. Puede tenerse alguna idea de la magnitud é importancia de sus operaciones, sabiendo que la Compañía del Niger, cuya carta data de 1886, ha celebrado con las tribus nativas más de trescientos tratados, discutiéndose ahora (1897) entre Inglaterra y Francia la validéz de algunos de ellos. Los territorios dentro de los cuales se gana poder así, tienden gradualmente á caer bajo el gobierno del Estado que expide la carta.

(5) Individuos.

Pueden, en grado limitado, llegar á ser sujetos del derecho internacional como dueños de propiedad capturada en la guerra, ó á causa de actos ejecutados por ellos como personas privadas y sin autorización y nó como agentes de un estado.

B—ADMISIÓN DE NUEVOS SUJETOS.

La admisión de nuevos sujetos al amparo del derecho internacional se opera de tres maneras:

- (1) Cuando un estado, considerado antes como bárbaro, es recibido en la familia de las naciones por un

acto formal de aquellos estados que ya eran sujetos ó por los más importantes de ellos.

Tal fué el caso de Turquía que en 1856 fué admitida por el Tratado de París á participar de las ventajas del derecho público de la Europa. Ningún estado puede obtener así su admisión si no posee:

- (a) Un cierto grado de civilización. En este punto es imposible sentar ninguna regla definida. Cada caso deberá juzgarse según sus propios méritos por las potencias que tengan que fallar.
- (b) Un territorio determinado. El derecho internacional considera que la soberanía es territorial. Las tribus nómades, por consiguiente, están inhabilitadas para cumplir con las exigencias que se imponen á los sujetos.
- (c) Una cierta extensión é importancia. Una comunidad pequeña y sin importancia, apartada de las corrientes principales de los negocios humanos, sería demasiado insignificante para ser notada.

Las grandes potencias, ó algunas de ellas, toman la prioridad en admitir en la familia de las naciones á los estados que acabamos de describir.

- (2) Cuando un nuevo cuerpo político formado por hombres civilizados en distritos antes libres del controlór de la civilización, es reconocido como estado independiente.

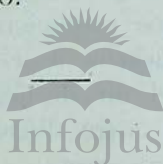
Este fué el caso de la República de Liberia, en su origen fundada por los flántropos norteamericanos como establecimiento para negros emancipados en la costa de la Guinea Superior. La Gran Bretaña reconoció su independencia en 1848 y otros estados siguieron despues su ejemplo. En 1884 y 1885 las principales potencias de Europa y los Estados Unidos de Norte América acordaron un reconocimiento análogo al Estado Libre del Congo, establecido por la Asociación Internacional del Congo, bajo la dirección del Rey de los Belgas.

- (3) Cuando una comunidad política civilizada, que se ha separado ella misma del cuerpo político á que antes pertenecía y adquirido existencia separada, recibe de otros estados el reconocimiento de independencia.

Tal reconocimiento es expreso ó implícito. El primero se dá por estipulaciones especiales de los tratados; el segundo existe cuando se negocian convenciones ú otros actos que sólo pueden ejecutar los estados independientes. Por el reconocimiento de una nueva comunidad, no se inflige ninguna ofensa al estado contra el cual aquella se ha rebelado, si

- (a) Tiene un gobierno organizado, desempeñado de una manera civilizada, y capaz de tratar con otros estados en la forma prescripta por el derecho internacional.
- (b) Posée un territorio determinado.
- (c) Actual ó virtualmente ha terminado á su favor la contestación que sostenía con su madre patria.

El reconocimiento de una provincia ó colonia rebelada mientras dura un conflicto sério, es un acto de intervención no-amistosa, que la madre patria puede traducir, si le place, en una causa de guerra. Una colonia ó provincia que obtiene y conserva una independencia *de facto*, está segura de que tarde ó temprano recibirá de todas las potencias su reconocimiento, dependiendo el plazo de sus simpatías políticas. El reconocimiento por un estado ó por un cuerpo de estados, en ninguna forma obliga á los demás; pero cuando las grandes potencias acuerdan reconocer una comunidad, los estados menores casi invariablemente siguen su ejemplo.



CAPITULO IV

Fuentes y divisiones del Derecho Internacional

A—FUENTES.

Entendemos por fuentes del derecho internacional los lugares en donde primeramente se encuentran sus reglas. Ninguna regla puede tener autoridad de ley si no ha sido generalmente aceptada por los estados civilizados; pero antes del proceso de aceptación, debe haber un proceso de formación. Remontándonos á los comienzos históricos de las reglas, encontramos cuatro fuentes de donde proceden, que son:

(1) Las obras de los grandes publicistas.

Hay un número de escritores de derecho internacional, empezando por Gentil y Grocio y terminando con los escritores de nuestros días, cuyas obras han influenciado é influncian todavía la práctica de los estados, y á cuyas opiniones publicadas se apela en las controversias internacionales. Sus vistas tienen valor proporcional á su saber, capacidad é imparcialidad. Aplican principios admitidos á puntos dudosos, y así aménudo enuncian reglas que más tarde son incorporadas á la práctica de los estados. Por otra parte, sus opiniones pueden ser destruídas por el uso contrario.

(2) Los tratados.

Con respecto á éstos, considerados como fuentes de las reglas internacionales, hay gran diversidad de opinión. Una escuela de escritores continentales pretende que los tratados, ó un cierto número de ellos arbitrariamente elegidos, formen un *corpus* de derecho internacional. Por otra parte, la mayoría de los publicistas ingleses y norteamericanos no están dispuestos á conceder sinó poca fuerza á los tratados. Con el fin de llegar á conclusiones justas es necesario distinguir entre diferentes clases de tratados. Pueden clasificarse como sigue:

- (a) Tratados celebrados por todos ó casi todos los estados civilizados y que abiertamente cambian ó añaden al derecho, ó efectúan cambios en el estado político ó en la distribución de los territorios. Estos son importantes en proporción al número de estados signatarios y al lapso de tiempo en que son observadas sus prescripciones. Si son aceptados por todos los estados civilizados, como la Convención de Ginebra de 1864, se convierten en actos legislativos. En caso de no aceptarse formalmente por todas las potencias, si son incorporadas sus reglas á la práctica universal, como las de la Declaración de París de 1856, se reputan fuentes del derecho internacional. Tales tratados son muy raros. Las actas finales de la conferencia del Africa Occidental de 1885 y la conferencia de Bruselas de 1890 para la supresión del tráfico de esclavos africanos, pueden servir de ejemplos conjuntamente con los antes mencionados.
- (b) Tratados declaratorios del derecho. Estos son sobrado raros; y á veces las reglas que considera declaratorias una de las partes, son consideradas por la otra como nuevas reglas. Este fué el caso de las tres reglas del Tratado de Washington de 1871. Los tratados declaratorios pueden ser fuentes del derecho si su interpretación es generalmente aceptada.
- (c) Tratados firmados por dos ó tres estados solamente, y en los que se estipula una nueva regla ó reglas para las partes contratantes. Estas son pruebas de que el derecho internacional no es sólo lo que es actualmente; pero si la nueva regla funciona bien, y gradualmente se adopta por los demás estados, el tratado en que primeramente apareció se convierte en una fuente del derecho internacional. Este fué el caso del tratado de 1650, entre Holanda

y España, que introdujo entre los estados cristianos la regla según la cual la mercancía enemiga no es apresable á bordo de un buque neutral, salvo si fuera contrabando de guerra.

- (d) Tratados que no contienen reglas de conducta internacional, y sólo deciden sobre el punto en cuestión entre las partes. La mayoría de los tratados pertenece á esta clase; y es obvio que de ninguna manera afectan al derecho internacional.

Los tratados importantes generalmente contienen estipulaciones acerca de una gran diversidad de asuntos. Por consiguiente, cuando hablamos de tratados de tal y tal carácter, debe entenderse que nos referimos á esas partes de los tratados considerados como documentos íntegros.

- (3) Las decisiones de los tribunales de presas, comisiones internacionales y tribunales arbitrales.

Los tribunales de presas se describen en la Parte III, Cap. V. Las decisiones de los jueces de los más importantes países son amenudo las más valiosas fuentes de derecho; pues son el producto de inteligencias ejercitadas en la aplicación de principios reconocidos á nuevas circunstancias. Al fallar, meramente deciden acerca del caso juzgado; pero la razón de las reglas establecidas conduce amenudo á su aceptación general, y así con el tiempo se incorporan al derecho internacional. Por ejemplo, la doctrina de los viajes continuos, que hoy es parte de la ley de captura en la mar, fué primeramente elaborada y aplicada por un gran juez de un tribunal inglés de presas, Lord Stowell, durante la guerra con Francia á fines del siglo décimooctavo. De igual manera los tribunales internacionales, como las conferencias y tribunales de arbitraje, á veces dan reglas que obtienen el asentimiento universal.

- (4) Documentos del estado, distintos de los tratados.

El gobierno de todo estado importante da á luz documentos públicos de dos clases. Envía despachos y memo-

riales á las potencias extranjeras, y da órdenes é instrucciones á sus propios servidores. Todos ellos pueden llegar á ser fuentes del derecho internacional, cuando tratan sobre puntos intrincados de manera tan magistral que sus conclusiones son generalmente adoptadas. Así, el informe británico de 1753 en la controversia del empréstito de Silesia sentó, sin dar lugar á dudas, la doctrina de que un estado no puede ejercer represalias sobre el dinero que le ha sido prestado por personas privadas que pertenecen á otro país; y la ordenanza francesa de marina de 1681 ayudó materialmente á esclarecer las incertidumbres del derecho marítimo.

Debe entenderse con claridad que sólo el consentimiento de los estados puede dar autoridad á una regla, y que la mejor prueba de tal consentimiento es la práctica. Así, pues, la práctica es el filtro á través del cual tiene que pasar cuanto fluye de las fuentes que hemos mencionado, antes de entrar á la corriente principal del derecho internacional.

B—DIVISIONES.

Las divisiones del derecho internacional dadas por muchos autores son inútiles ó no científicas. Por ejemplo, la distinción entre un *derecho necesario*, al que deben obedecer los estados porque está inmutablemente fundado en la naturaleza de la sociedad, y un *derecho voluntario*, al que obedecen porque expresa ó tácitamente han consentido en ello, está basada en la explotada teoría del derecho natural; y nadie ha tratado seriamente y en detalle la ordinaria distinción entre un *derecho consuetudinario*, resultante del uso general, y un *derecho convencional*, fundado por el consentimiento expreso de los estados. Es mejor considerar al derecho internacional como un cuerpo de reglas obedecidas por las naciones que las han aceptado, porque por varias razones gobiernan el asenso general de la humanidad civilizada, y para poder dividirlo en secciones de acuerdo con las diferentes clases de derechos poseidos

por los estados y sus correspondientes obligaciones. Tenemos así,

Derechos	(1) Derechos y obligaciones conexos con la independencia.
y	(2) Derechos y obligaciones conexos con la propiedad.
obligaciones normales	(3) Derechos y obligaciones conexos con la jurisdicción.
de los	(4) Derechos y obligaciones conexos con la igualdad.
estados.	(5) Derechos y obligaciones conexos con la diplomacia.
Derechos	(1) Derechos y obligaciones conexos con la guerra.
y obligaciones	(2) Derechos y obligaciones conexos con la neutralidad.
anormales	
de los estados	

Entendemos por derechos y obligaciones normales de los estados, aquellos que poseén simplemente como sujetos del derecho internacional; y por derechos y obligaciones anormales de los estados, aquellos que poseén cuando han añadido otras capacidades á su capacidad como sujetos del derecho internacional. Lo primero les pertenece en las circunstancias ordinarias de la vida pacífica internacional; lo segundo, como adición ó calificación de lo primero, en las circunstancias extraordinarias de beligerancia ó neutralidad. Establecemos así una división del derecho internacional en derecho de la paz, derecho de la guerra y derecho de la neutralidad, cada uno de las cuales será materia de una de las tres siguientes.



PARTE II

ESTADO DE PAZ



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

CAPITULO I

Derechos y obligaciones conexos con la independencia

A — NATURALEZA DEL DERECHO DE INDEPENDENCIA.

La *independencia* puede ser definida como *el derecho de un estado para manejar todos sus negocios, tanto externos como internos, sin intervención de otros estados, en cuanto se refiera á los derechos correspondientes poseídos por cada miembro soberano de la familia de las naciones*. Es el resultado natural de la soberanía, y es consiguientemente afirmado por el derecho internacional de todos los estados soberanos. Los estados semi-soberanos no son enteramente independientes, pues por las condiciones de su existencia no se les permite entera libertad de acción en el despacho de sus negocios externos. Los estados independientes y plenamente soberanos están sujetos á restricciones impuestas temporariamente por los sucesos ó circunstancias; pero tales restricciones son condiciones necesarias de la vida social y nó incidentes legales de la existencia política de las comunidades á ellas sometidas. Por consiguiente no derogan á su independencia completa. Surgen de

(1) Estipulaciones de los tratados

Estos pueden ser

(a) Libre asentimiento para resolver una dificultad pre-

sente por el sometimiento en lo futuro á alguna restricción de la libertad de acción, como cuando en 1850, por el tratado Clayton-Bulwer, la Gran Bretaña y los Estados Unidos acordaron no efectuar adquisiciones de territorio en la América Central.

- (b) Imposición de una fuerza superior á un estado que no está en condiciones de resistir, como cuando en 1808 Napoleón prohibió á Prusia mantener en actividad un ejército superior á 40.000 hombres.
- (2) Derechos correspondientes de otros estados.

Sobrevendría la anarquía si cada estado dispusiera su política sin consideración á los derechos, intereses y susceptibilidades de sus vecinos. El derecho de independencia de acción poseído por cada estado soberano está por consiguiente limitado por el deber de no amenazar la seguridad ni ultrajar el honor de los demás miembros de la familia de las naciones.

- (3) La autoridad y superintendencia ejercidas por las grandes potencias y los Estados Unidos de Norte América.

En la solución de ciertas grandes cuestiones internacionales como por ejemplo las conexas con el Imperio Turco, las seis grandes potencias de Europa obrando de consuno asumen una primacía que los demás estados reconocen tácitamente al aceptar como hechos consumados los arreglos establecidos por aquellas. Siempre que un estado se conforma así con las decisiones de las grandes potencias, la libertad de acción de éstos en cierta medida es calificada por su superior autoridad. Los Estados Unidos parecen inclinados á reclamar en el continente americano una posición correspondiente á la de las grandes potencias en Europa.

B—INTERVENCIÓN.

A veces un estado ó un grupo de estados se entrometen por la fuerza ó por la amenaza de la fuerza en los negocios internos de otro estado ó en las cuestiones que se suscitan

entre otros estados. Tal entrometimiento se llama intervención y debe ser distinguida de la mediación y del arbitraje. Hay mediación cuando un estado hace sujes-tiones para la solución de una querella á ruego de las partes pero sin ninguna intención de compelerlas á aceptar sus sujes-tiones; y hay arbitraje cuando las mismas partes deciden someter su disputa al juicio de otros en la inteli-gencia de que la decisión del árbitro será aceptada por ambas partes. La esencia de la intervención es un cerce-namiento de la acción independiente del estado ó estados contra quienes se empléa la fuerza ó se amenaza con ella, de manera que se necesitan razones poderosas para justificar dicho acto. Muchas justificaciones han sido alegadas; pero las únicas razones concordantes con los principios en que se funda el derecho internacional, son:

(1) La propia preservación.

Las reglas ordinarias deben ser puestas á un lado cuando están en peligro la vida ó el honor de una nación ó algún interés esencial y relativo á su posición en el mundo. La intervención de Austria en 1813 en la lucha entre Rusia y Prusia por una parte y el Imperio Francés bajo Napoleón por la otra, es un ejemplo.

(2) Los derechos fundados en tratados.

Cuando un estado ha garantizado la integridad terri-torial de otro estado ó la sucesión á su trono ó así mismo cualquier providencia importante que le concierna, adquiere un derecho de intervenir en caso de discutirse los puntos á que ha prestado su garantía cuando éstos son amenazados por una violencia interna ó un ataque externo. La ame-naza de la Gran Bretaña en 1870 de prestar ayuda con las armas á la Bélgica en caso de que el territorio belga fuera violado por Francia ó Prusia, que entonces estaban en guerra, se justificaba por haber firmado los tratados de 1831 y 1839, que garantizan la independencia y la integridad del reino belga.

(3) La prevención de toda intervención ilegal por parte de otra potencia.

Partiendo del principio de que un estado puede legalmente prohibir para otros lo que legalmente puede prohibir para sí mismo, es un acto legal la intervención que se dirige á evitar ó á dar fin á la intervención indisculpable de otro estado. En esta razón fundó Canning en 1826 el envío de tropas británicas á Portugal con objeto de impedir los auxilios suministrados por España á Don Miguel en la guerra civil entre sus partidarios y el partido constitucional del reino portugués.

La segunda y tercera razones enumeradas para justificar la intervención, son técnicamente suficientes, pero nó siempre moralmente convincentes. La primera es irrefragable de todo punto de vista, con tal de que el peligro contra el cual se quiera precaver sea directo é inmediato, y nó condicional y remoto. Otras razones, tales como el pedido de una de las partes, la conservación del equilibrio de las potencias, el sometimiento ó el apoyo de una revolución, han sido alegadas amenudo, pero son inconsistentes á la faz de los principios admitidos. Las intervenciones para hacer cesar procedimientos repugnantes á la humanidad, difícilmente pueden apoyarse en las reglas ordinarias, aunque bajo circunstancias excepcionales pueden justificarse como actos que están fuera y por encima del derecho.

C—CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES Á LA INTERVENCIÓN.

La materia está llena de dificultades. La práctica solamente no es una buena guía por cuanto los estados poderosos demasiado amenudo han estado ansiosos por intervenir cuando han visto que podían obtener ventajas para sí mismos; y han justificado su proceder con razones especiosas y fútiles. Por otra parte, la intervención se funda con frecuencia en varias razones, ó son varios los estados que actúan conjuntamente, pero por diferentes

motivos y con objetivos distintos. Para formar juicio debe recordarse que

- (1) Las intervenciones llevadas á cabo por las grandes potencias, como representantes en cierta manera de la civilización europea, ó por algún estado ó estados que actúan como agentes de aquellas, verosímilmente son más justas y beneficiosas que las intervenciones llevadas á cabo por una potencia obrando por sí misma solamente.
- (2) Las intervenciones por una alianza temporaria de estados no tienen nada de la autoridad que radica en los procedimientos de las grandes potencias y son susceptibles de terminar en un desagrado y aún en la guerra entre los aliados.
- (3) Las intervenciones en los negocios internos de los estados son infracciones mayores de su independencia que la intervención en su actuación externa, y por consiguiente requieren razones más poderosas para su justificación.

La doctrina de la no-intervención absoluta resultó de una reacción excesiva contra la práctica de la intervención indistinta. Realmente se basa en la opinión de que un estado no tiene derechos hacia los demás estados y hacia la gran familia de las naciones, proposición que parece llevar consigo su propia condenación.

CAPITULO II

Derechos y obligaciones conexos con la propiedad

A—DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS ESTADOS.

Los estados en cuanto son corporaciones, son capaces de tener propiedad. Ciertamente nuestro derecho internacional está basado en la idea de que aquellos poseen derechos de propiedad sobre porciones de la superficie terrestre; pues aunque la noción de la soberanía nacional es com-

parativamente moderna, ella domina de una manera tan completa las reglas observadas entre estados civilizados que sería imposible para una tribu nómade el acojerse á ellas. Las posesiones de un estado pueden ser territoriales ó nó territoriales. La propiedad no territorial consta de edificios y bienes muebles cuyos derechos de propiedad conciernen por regla general al gobierno y sus súbditos. El derecho público internacional nada tiene que ver con ellos, excepto en el caso de captura beligerante que, por ser asunto entre estados hostiles, debe dilucidarse por el derecho de la guerra. Las posesiones territoriales de un estado constan de

- (1) La tierra, lagos y ríos situados dentro de aquella porción de la superficie terrestre sobre la cual reclama un título legítimo.
- (2) El mar dentro de un límite de 3 millas desde sus costas, y los estrechos angostos y bahías situadas á lo largo de sus costas.

Debe notarse que:

- (a) El límite de 3 millas en su origen fué fijado porque ese era el alcance de la artillería; entre los juristas hay ahora una tendencia á favor de una mayor extensión de las aguas territoriales correspondiente al mayor alcance de los cañones modernos.
- (b) Cuando un estrecho tiene 6 millas ó menos de ancho, y sus márgenes pertenecen á la misma potencia, aquél es parte de las aguas territoriales de esa potencia; pero si une dos porciones de mar, los buques de otros estados, tienen derécho de pasar por él.
- (c) Se dice á veces que todas las bahías, que tienen más de 10 millas de ancho en su boca contadas en la línea que une los cabezos de la entrada, son en derecho partes de alta mar, y están libres de la autoridad territorial de cualquier potencia Pero

esta regla no es universalmente aceptada y hay muchas excepciones á ella.

- (3) Las islas que orillan su costa. Se reputa que acrecen ó que acompañan á la masa de su territorio.

B—MODOS DE ADQUISICIÓN DE TERRITORIO.

El derecho internacional reconoce como válido el título al territorio que ha sido adquirido por cualquiera de los medios siguientes:

(1) Ocupación.

Esto se aplica solamente al territorio que no pertenece á un estado civilizado. En el pasado nacieron numerosas controversias sobre la manera como puede adquirirse un título válido sobre tal territorio; y en vista de la moderna contienda en Africa, la cuestión ha recobrado su antigua importancia. Varios puntos conexos con ella no están aún dilucidados; pero probablemente lo que sigue puede mirarse como una enumeración de las reglas que tienen á su favor la mejor práctica y la más respetada autoridad. El título á un territorio accesible á la expropiación se gana nó por el descubrimiento sinó por la ocupación. La ocupación puede definirse como una *anexión* acompañada de *establecimiento*. La *anexión* es un acto formal, por el cual el estado anexante notifica su intención de incorporar á sus dominios el territorio anexado. Las formalidades usuales son el acto de izar al pabellón nacional y la lectura de una proclama, que se ejecutan por oficiales especialmente comisionados al efecto. Si autoridades subalternas, obrando por propia iniciativa, anexan territorios previamente desocupados, su acción no tiene validéz internacional á menos de que sea ratificada por el supremo gobierno del estado. La anexión hecha por personas privadas no sólo es nula y sin ningún valor, sinó que á más no puede validarse por una ratificación subsiguiente. El *establecimiento* es la plantificación en un territorio de un apostadero civil ó militar cuya existencia continúa puede ser mantenida con más ó menos estrictez. El abandono completo de un

territorio por un tiempo considerable le hace nuevamente accesible á la ocupación. La anexión y el establecimiento deben existir para causar una ocupación válida; pero es indiferente que uno de esos actos preceda al otro. El título adquirido por la ocupación dá derecho á una mayor extensión de territorio que la que está cubierta por los establecimientos originales; pero muchas discusiones han nacido al pretender fijar la razonable extensión del área á que se aplica esta doctrina. Las reglas siguientes están deducidas de la historia de esas controversias:

- (a) Un acto de anexión y un establecimiento dan título á toda una isla, á menos que ella sea muy grande, y aún á todo un grupo de pequeñas islas.
- (b) La anexión y el establecimiento en una costa de un continente no dan título á todo él ni aún á toda la faja de territorio que cruzándolo se extienda hasta la costa opuesta.
- (c) La ocupación de una gran extensión de costa dá un título hasta las vertientes de los ríos que desembocan en el mar á lo largo de la línea de costa ocupada; pero uno ó dos establecimientos en la embocadura de un gran río no son fundamento suficiente para pretender todo el territorio bañado por ese río y sus afluentes.
- (d) Cuando dos estados ocupan las márgenes opuestas de un río, el límite se traza á lo largo de la mediana del canal navegable.

Difícilmente podría decirse que algunas de estas reglas hayan recibido un asentimiento tan general que deban tenerse por leyes indudables. Además hay lugar en su aplicación á serias diferencias de opinión. Por consiguiente es mejor para los estados ponerse de acuerdo respecto á los límites dentro de los cuales tendrán libertad de ocupar territorios en países recientemente abiertos á la empresa de la humanidad civilizada. Eso se hizo por ejemplo, por la Gran Bretaña y Alemania, en 1890, con respecto al

Africa Oriental y al Sud Oeste de Africa; por la Gran Bretaña y Francia, en 1889 y 1890, con respecto al Africa Occidental; y por la Gran Bretaña y Portugal, en 1891, con respecto á Sud Africa. Como las tribus habitantes de esos territorios son incapaces para entrar en las relaciones que subsisten entre los sujetos del derecho internacional, no se les tiene en cuenta, por lo que concierne al derecho de crear un título válido sobre el territorio. Pero el hecho de que una especie de consentimiento se ha obtenido de ellas en muchas de las ocupaciones recientes, es un reconocimiento del deber de tratar con justicia á las razas nativas. Probablemente los países civilizados que llegan á tales acuerdos con los naturales, no obtienen con ello sinó un fundamento moral para anticiparse á otras potencias civilizadas en la ocupación efectiva.

(2) Cesión.

Esta es la transferencia formal de posesiones territoriales hecha por un estado á otro. Tiene lugar á consecuencia de transacciones de varias clases, tales como la venta, la donación y la permuta.

(3) Conquista.

Esta es la retención del territorio tomado á un enemigo en la guerra, y el ejercicio en él de todos los poderes de la soberanía, con la intención de continuar obrando así permanentemente. Difiere de la cesión por donación forzada, en que no hay una transacción formal internacional que indique la época exacta del comienzo del nuevo título; y de la prescripción, en que es un acto ó una serie de actos definidos, distintos de la nueva posesión y de la cual nace inmediatamente el título.—Cuando una conquista, en el sentido militar, es confirmada por un tratado de paz, el título á la provincia conquistada es el de una cesión y no el de una conquista en el sentido legal.

(4) Prescripción.

Esta ocurre cuando un estado posee durante un largo

espacio de tiempo un territorio respecto al cual no puede exhibir otro título de los reconocidos por el Derecho Internacional.—El principio es admitido con objeto de evitar disputas sobre la propiedad; pero no se han sentado reglas definidas acerca de la duración de la posesión que es necesaria para dar un título válido.

(5) *Accesión.*

Esta ocurre cuando la acción de las aguas produce un aumento de las tierras, ó cuando se forman islas inmediatas al territorio de un estado.

C—*DIFERENTES GRADOS DE PODER SOBRE EL TERRITORIO.*

Los estados han empezado á reservarse para sí mismos territorios sobre los cuales no ejercen en lo presente plenos derechos de soberanía. Esto ha dado origen á problemas recientes con relación á la naturaleza exacta de los poderes poseídos por ellos sobre los distritos en cuestión. Un estado puede ejercer autoridad sobre un territorio como

(1) *Una parte de sus dominios.*

En este caso sus poderes son los de la plena soberanía, tanto interna como externa (V. Parte I, Cap. III).

(2) *Un protectorado.*

El estado protector ejerce sobre el protectorado los poderes de la soberanía externa. Los negocios internos se dejan en mayor ó menor grado al gobierno propio; pero por lo menos, debe ejercitarse sobre él suficiente contralor para que el estado esté en condiciones de llenar sus obligaciones hacia otros estados en lo que se relaciona con el protectorado. La potencia protectora tiene derecho á exigir de las otras potencias que se abstengan de actos tendientes á adquirir el territorio protegido, y de cualesquier relaciones políticas directas con sus habitantes. Por otra parte, está obligado á impedir que aquellos á quienes protege cometan actos de hostilidad contra las potencias vecinas. Otras cuestiones son más inciertas. Los límites exactos de los derechos y deberes de un estado protector

hacia las naciones extranjeras y sus súbditos no están aún establecidos.

(3) Una esfera de influencia.

Esta frase se aplica á los distritos que en su mayor parte no están ocupados por la potencia á la cual se asignan, y que se hallan enteramente libres de la ocupación de otras potencias. Sobre el territorio incluído en la esfera de influencia de un estado no es preciso ejercitar ningún contralor directo en sus asuntos externos ó internos; pero hay derecho á exigir que otros estados no adquieran dominios ó establezcan protectorados allí, por cuanto puede hacer eso mismo el estado reclamante, si lo desea. — La validez de tal reclamo depende enteramente de la conformidad de los demás estados. El derecho internacional dá derecho á todo estado civilizado para adquirir los territorios no apropiados por ocupación, y para establecer protectorados en ellos; pero no puede salirse de estas reglas en cuanto toca á ciertos distritos que se reputan libres, y si lo hace, queda sometido en este y otros puntos á los tratados que haya estipulado. Los últimos diez años han presenciado muchas convenciones de esta especie dirigidas á evitar disputas en lo presente y posibles guerras en lo futuro. Sólo ligan á las partes contratantes y á aquellos otros estados que puedan reconocer los arreglos estipulados. Se encontrarán buenos ejemplos en las convenciones de la Gran Bretaña, en 1890, con Francia y Alemania, y en 1891, con Italia y Portugal, para la delimitación de sus respectivas esferas de influencia en grandes porciones de Africa.

Las esferas de influencia tienden á convertirse en protectorados y éstos tienden á desarrollarse en colonias sometidas al dominio pleno de la madre patria. El plan adoptado por la Gran Bretaña y varios otros estados de permitir á compañías privilegiadas que asuman por primera vez los poderes y responsabilidades que el Gobierno vacila en tomar sobre sus propios hombros, no

libera al estado de las cargas y obligaciones internacionales, y á veces da origen á disputas semejantes á la controversia de la Gran Bretaña y Francia, en 1897, sobre la división del territorio reclamado por la Real Compañía del Niger. Por el acta general de la Conferencia del Africa Occidental, de fecha 26 de Febrero de 1885, cada una de las potencias signatarias se obligó á notificar á las otras la erección de todo nuevo protectorado en la costa de Africa y la adquisición en aquella parte de nuevos territorios por medio de la ocupación. Las potencias representadas en la Conferencia tomaron á su cargo la obligación posterior de establecer autoridades suficientes en los territorios africanos que ellas ocupaban. Muchas disputas se evitarían, si la aplicación de estas dos reglas pudiera generalizarse.

D—CUESTIONES CONexas CON LAS PRETENSIONES DE LOS ESTADOS EN RELACIÓN CON DERECHOS TERRITORIALES SOBRE AGUAS.

Las pretensiones de los estados por derechos territoriales sobre aguas han determinado la aparición de cuestiones, algunas de las cuales tienen sólo un interés histórico, mientras que otras son hoy de la mayor importancia.—Las consideraremos en el orden siguiente:

(1) Pretensiones de soberanía sobre los mares abiertos y los estrechos naturales que los unen.

En la Edad Media muchos estados marítimos pretendieron la soberanía territorial sobre grandes extensiones de alta mar; pero al nacimiento del Derecho Internacional moderno, esas pretensiones fueron disputadas. Gradualmente se han extinguido y el principio de que los mares abiertos no son susceptibles de apropiación por ninguna potencia es hoy universalmente reconocido. El último resto de las viejas doctrinas se desvaneció en 1893 al decidir el tribunal arbitral reunido en París en contra de la pretensión norte-americana de ejercer autoridad sobre el

Mar de Behring, con objeto de abolir las pesquerías de focas. Subsiste aun la cuestión de los derechos territoriales sobre estrechos angostos que unen á dos mares abiertos; pero están limitados por el derecho de pasaje inocente, y la potencia territorial no puede exigir tributos por interés pecuniario.

(2) Naturaleza y extensión del derecho de pasaje inocente.

Este puede ser definido como el derecho de libre pasaje por las aguas territoriales de los estados amigos, cuando forman un canal de comunicación entre dos porciones de mar abierto. Lo poseén los buques de todos los estados que están en paz con la potencia territorial, á condición de que durante el pasaje no se cometan actos de hostilidad. Se aplica esto tanto á los buques de guerra como á los barcos mercantes. Las reglas que prohíben á los primeros, con ciertas excepciones, el paso en uno y otro sentido por los Dardanelos y el Bósforo, descansan en pactos especiales negociados en 1856 y 1871, y que no forman parte del derecho común de las naciones.

(3) Posición en el Derecho Internacional de los canales interoceánicos.

La construcción del canal de Suez dió margen á esta cuestión. El derecho internacional no proveía reglas para el uso de una obra sin precedentes como esa. Fué necesario, por consiguiente, establecer su Status por medio de tratados. Después de negociaciones que duraron muchos años, se firmó una convención en 1888 por los representantes de seis grandes potencias y los de Turquía, España y Holanda. Por este instrumento el canal fué neutralizado; es decir, fué abierto tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz á todos los buques, mercantes ó de guerra, beligerantes ó neutrales; pero no deben cometerse actos de hostilidad en el canal, ó en sus puertos de acceso, ó en el mar hasta una distancia de tres millas de esos puertos, ni puede bloquearse el canal. Estas reglas hasta ahora

no han presentado dificultades, pero debe notarse que aún no han estado sometidas á la prueba de una gran guerra marítima. Debemos esperar que reglas semejantes se aplicarán por tratados á otros grandes canales interoceánicos á medida que se termine su construcción.

(4) Uso de las pesquerías de mar.

Cuando existe una pesquería en las aguas territoriales de un estado, su uso exclusivo pertenece á los súbditos de ese estado; pero fuera de las aguas territoriales tienen libertad los súbditos de todos los estados para pescar donde les plazca. Estas reglas sencillas son, sin embargo, modificadas amenudo por convenciones que dan á los súbditos de una potencia el derecho de pescar en algunas porciones especificadas de las aguas ribereñas de otra. — A veces nacen grandes disputas acerca de la interpretación que debe darse á esas concesiones, siendo un buen ejemplo la controversia sostenida durante varias generaciones entre la Gran Bretaña y Francia con respecto á la naturaleza y extensión exactas de los derechos acordados á los pescadores franceses á lo largo de una parte de la costa de Terranova por el tratado de Utrecht de 1713 y por los pactos subsiguientes.

(5) Navegación de los grandes ríos. •

Esta cuestión se vuelve importante del punto de vista internacional, cuando un gran río navegable corre á través del territorio de dos ó más potencias. Los estados á quienes pertenecen las aguas superiores á veces pretenden un derecho de libre navegación hasta el mar; pero parece lo más acertado decir, estrictamente hablando, que el derecho internacional no confiere tal derecho. Hasta el siglo presente, sin embargo, ha sido acordado por tratados especiales en casi todos los casos dilucidados entre potencias civilizadas; y una denegación de ese derecho sería ciertamente una violación chocante de la comitas.

CAPITULO III

Derechos y obligaciones conexos con la jurisdicción

A—REGLAS GENERALES SOBRE JURISDICCIÓN.

La jurisdicción es principalmente territorial. Hablando en general, un estado ejerce jurisdicción sobre todas las personas y cosas situadas dentro de su territorio. Tiene también una jurisdicción no-territorial que ejerce principal, aunque no exclusivamente, sobre sus propios súbditos en virtud del vínculo de fidelidad que existe entre éstos y aquél. Con respecto á la jurisdicción territorial, podemos establecer que cada estado tiene jurisdicción sobre

- (1) Todas las personas que están dentro de su territorio, con ciertas excepciones.

Por lo que respecta á la jurisdicción, las personas que están dentro del territorio de un estado pueden dividirse en las siguientes clases:

- (a) Súbditos nativos. Cada estado define por sus leyes propias, qué circunstancias de nacimiento convierten en súbdito á un individuo dado. La Gran Bretaña mira como súbditos á los niños nacidos dentro de los dominios británicos, cualesquiera que sean sus padres, y á los hijos de padres británicos, donde quiera que nazcan, y aún á aquellos cuyo padre ó abuelo paterno son británicos. Las dificultades internacionales surgen sólo cuando dos ó más estados reclaman al mismo individuo.
- (b) Súbditos naturalizados. Estas son personas cuyo lazo de ciudadanía entre ellos y el estado ha sido creado artificialmente. La ley de cada estado prescribe las condiciones y formalidades necesarias para la admisión de extranjeros como ciudadanos; la Gran Bretaña acepta á los extranjeros que han

residido durante cinco años en el Reino Unido, ó que han estado durante cinco años al servicio de la corona, á condición de que presten el juramento de fidelidad y continúen residiendo ó sirviendo como antes. En los casos en que un país no reconozca el cambio de nacionalidad verificado por sus súbditos, pueden nacer complicaciones entre él y los estados que hayan naturalizado á alguno de aquellos.

- (c) Domiciliados. Estas son personas de nacionalidad extranjera que residen permanentemente dentro de un país. Bajo muchos conceptos están sometidos á su jurisdicción, pero no puede exigir de ellos servicios puramente políticos.
- (d) Transeuntes. Están bajo su jurisdicción criminal y por muchos conceptos también bajo su jurisdicción civil; pero ni su estatuto personal ni sus derechos políticos son afectados por la ley del estado en que se encuentran transitoriamente.
- (2) Todas las cosas que están dentro de su territorio, con ciertas excepciones.

Por lo que respecta á la jurisdicción, las cosas que están dentro del territorio de un estado, pueden dividirse en las siguientes clases:

- (a) Propiedad real. Esta está enteramente bajo el contralor del estado en que se encuentra situada.
- (b) Propiedad personal. En los casos en que el propietario está domiciliado en el estado en donde se halla situada la propiedad, se aplica la ley local; pero si la propiedad está en un estado y el propietario se halla domiciliado en otro, prevalece como regla la *lex domicilii*.
- (c) Sus propios buques, públicos y privados, en sus aguas. La autoridad sobre ellos es completa y se extiende á todos los actos ejecutados á su bordo.
- (d) Los barcos mercantes extranjeros en sus puertos y

aguas territoriales. Están sometidos á la jurisdicción local, si se ejerce sobre ellos. Si no, están bajo la jurisdicción del estado á que pertenecen. Muchas potencias, incluída la Gran Bretaña, ejercen plenamente su autoridad sobre los barcos mercantes extranjeros en sus aguas territoriales. Pero Francia rehusa tomar conocimiento de los actos ejecutados á su bordo, á menos de que se perturbe la tranquilidad del puerto, ó de que se trate de personas ajenas á su tripulación; y la práctica francesa ha sido seguida por varios estados en épocas recientes.

Con respecto á la jurisdicción no-territorial, podemos establecer que cada estado tiene jurisdicción sobre

(1) Todos sus buques en alta mar.

No puede haber jurisdicción territorial en mares abiertos. Cada estado, por consiguiente, ejerce jurisdicción sobre todas las personas y cosas que están á bordo de sus buques cuando navegan en alta mar. Para dar fundamento á esta regla, se inventó la doctrina de que un buque es una porción flotante del territorio del estado á que pertenece; pero es obvio que se trata de una ficción y de una ficción tosca, pues si se la aplicara estrictamente, privaría á los beligerantes de su derecho indudable de visitar á los barcos mercantes neutrales.

(2) Todos sus súbditos ausentes de su territorio y los buques bajo su jurisdicción.

En virtud del vínculo personal de fidelidad, los estados indudablemente poseén derechos jurisdiccionales sobre sus súbditos cuando están en territorio extranjero, ó á bordo de buques de un estado extranjero, ó en países que no pertenecen á ninguna potencia civilizada. Pero como regla general no intentan ejercitar esos derechos, desde que en la mayoría de los casos es suficiente la jurisdicción territorial. Sin embargo, castigan las ofensas políticas cometidas contra ellos por sus súbditos en el extranjero y también

los crímenes graves de carácter no-político. A veces, ejercen un contralor sobre actos ejecutados por sus súbditos en países bárbaros que no están bajo el dominio ó protectorado de una potencia civilizada. Pero, excepto en este último caso, no pueden intentar nada contra un ofensor á menos que penetre al territorio ó á los buques sometidos á su jurisdicción.

(3) Todos los piratas capturados por los buques.

Hay tres signos distintivos para conocer qué actos son piráticos. Deben ser actos de violencia; deben ser ejecutados fuera de la jurisdicción territorial de todo estado civilizado, es decir, casi siempre en alta mar; y deben ser cometidos por personas destituidas de autorización de cualquier comunidad política reconocida. La piratería es un crimen contra todo el cuerpo de los estados civilizados, y por consiguiente, justiciable por los tribunales de cualquier estado cuyos cruceros lleguen á capturar á los delincuentes. Sin embargo, debe notarse que esto se aplica exclusivamente á la piratería *jure gentium*. En los delitos calificados de piratería por la ley de un estado, sólo deben entender sus tribunales. El tráfico de esclavos no es la piratería *jure gentium*. Por consiguiente se requieren tratados con estipulaciones especiales que autoricen la captura de los buques que se dedican á ese tráfico por los cruceros de un estado que no sea aquel al cual pertenecen los buques capturados. La Gran Bretaña tomó la iniciativa en la negociación de tales convenios y á sus esfuerzos se debe principalmente el resultado de que todas las potencias marítimas se hayan adherido por fin al acta final de la conferencia de Bruselas de 1890 la cual, entre otros medios para la supresión en tierra y en el mar del tráfico de esclavos africanos, estableció una modificación del derecho de visita aplicable á los buques de un desplazamiento menor de 500 toneladas que fueren encontrados dentro de una zona marítima que se extiende en la parte occidental del Océano Indico.

A veces los estados pretenden ejercer jurisdicción sobre los extranjeros que han cometido crímenes contra ellos mismos ó sus súbditos, dentro de un territorio extranjero; pero es muy dudoso que tal jurisdicción sea reconocida por el derecho internacional. Todos los estados beligerantes tienen una jurisdicción limitada sobre los neutrales á objeto de restringir y castigar las violaciones de los derechos de los beligerantes.

B—EXCEPCIONES.

Hay excepciones á la regla de que la jurisdicción de un estado se extiende á todas las personas y cosas que están dentro de su territorio. Estas excepciones se refieren á:

(1) Los soberanos extranjeros y sus séquitos.

Cuando el jefe de un estado extranjero visita un país en su carácter oficial, él y su séquito están enteramente exentos de la jurisdicción local; pero, por otra parte, no pueden ejercer ninguna jurisdicción sobre su comitiva, á no ser la de enviarlos á su país para ser sometidos á juicio en casos urgentes.

(2) Los agentes diplomáticos de los estados extranjeros.

Para muchos fines están libres de la jurisdicción local cuando residen en un país como representantes acreditados por su propia nación. Serán tomadas en cuenta sus inmunidades cuando tratemos de las legaciones y negociaciones (parte II, capítulo V).

(3) Las fuerzas públicas armadas de los estados extranjeros.

Cuando dos estados están en paz, las fuerzas del uno en territorio del otro están exentas en mayor ó menor grado de la jurisdicción local. Tenemos que tratar separadamente á las fuerzas de tierra y á las de mar.

(a) Las fuerzas de tierra no pueden pasar por el territorio de un estado amigo sin permiso expreso. En ausencia de convenio especial sobre el punto de la

jurisdicción que ha de ejercerse sobre ellas, no pueden ser sometidas á la ley local, pero sus propios oficiales son responsables de su buena conducta.

(b) Las fuerzas de mar no requieren permiso especial para entrar á las aguas territoriales de un estado amigo; pero pueden ser excluidas de los puertos y radas de cualquier potencia que les dé noticia formal de su intención de no permitirles la entrada. En muchos conceptos cuando están dentro de las aguas territoriales extranjeras se hallan exentas de la jurisdicción local. Sin embargo, en cuanto sea posible, deben respetar la ley local; pero las autoridades locales no pueden allanar el buque ni extraer de él á la persona que ha hallado refugio bajo su pabellón. No pueden más que excluir al buque, excepto en los casos en que un crucero beligerante viola la neutralidad de las aguas amigas, pudiéndose entonces usar de la fuerza para prevenir ó castigar el ultraje. Muchos estados dan instrucciones á sus jefes navales para que reciban á bordo delinquentes políticos y esclavos fugitivos que busquen refugio contra un peligro inminente, pero no á otras personas.

(4) Los súbditos de los estados de Occidente que residen en los países de Oriente.

Por tratados especiales han obtenido exención de la jurisdicción local y están en cambio sujetos á la jurisdicción de las cortes consulares ó de tribunales mixtos. El sistema reposa enteramente sobre convenciones y varía considerablemente en las diferentes comarcas orientales.

C—EXTRADICIÓN.

La extradición es la entrega por un estado á otro de un individuo que se encuentra dentro del territorio del primero y está acusado de haber cometido un crimen dentro del territorio del último. Las mejores autoridades sostienen que en ausencia de tratados especiales tal entrega

no puede ser demandada como un derecho aunque puede ser acordada por cortesía. Muchos estados civilizados están hoy ligados entre sí por tratados de extradición que general aunque no invariablemente contienen en alguna forma las siguientes estipulaciones:

- (1) Nadie será entregado antes de obtener *prima facie* una prueba de su delito.
- (2) No serán entregados los delincuentes políticos.
- (3) No se efectuará ninguna entrega antes de darse seguridades adecuadas de que el acusado no será juzgado sinó por el crimen que motiva su entrega.

Todo tratado contiene una lista de los crímenes que darán lugar á extradición. La dificultad principal estriba en la distinción clara entre los delitos políticos y los comunes. Las cortes británicas han declarado que la conexión de un acto con un movimiento político del cual forma parte dá á aquél un caracter político.

CAPITULO IV

Derechos y obligaciones conexos con la igualdad

A—DOCTRINA DE LA IGUALDAD.

La doctrina de la igualdad de los estados significa que todos aquellos que son plenamente independientes tienen iguales derechos ante el derecho internacional aunque no todos sean iguales en poder ó en influencia. Los grandes publicistas que fundaron el derecho internacional moderno hicieron de la igualdad uno de los principios fundamentales de su sistema; pero es discutible si puede aún aplicarse esa doctrina sin establecer distinciones. Durante el siglo pasado en muchas materias de interés europeo las grandes potencias han ejercido una primacía inconsistente con la igualdad. Por ejemplo:

- (1) Han establecido y neutralizado el Reino de Bélgica,

- (2) Han efectuado arreglos periódicos en la cuestión de Oriente.
- (3) Han admitido como sujetos del derecho internacional á ciertos estados antes reputados bárbaros, como Turquía.
- (4) Han incluido una nueva potencia, Italia, en el rango de las grandes potencias.

Estos procedimientos, que sólo son ejemplos tomados de entre muchos de naturaleza semejante, han cambiado la posición legal de otras potencias sin su expreso consentimiento; y el hecho de que esta alteración del estado de cosas haya sido tácitamente aceptado por los estados menores parece demostrar que éstos consideran á las grandes potencias investidas de una especie de autoridad superintendente. Es análoga al contralor político en un estado y es consistente con la igualdad en materias tales como los derechos jurisdiccionales y de dominio. Se encuentra aun en una condición muy rudimentaria pero suficientemente marcada como para que pueda decirse que modifica la doctrina generalmente admitida de la perfecta igualdad. Algo parecido á la primacía acordada en Europa á las grandes potencias es pretendida en América por los Estados Unidos en virtud de lo que se denomina la doctrina de Monroe. Esta expresión en su origen se refería á la policía de los Estados Unidos en los negocios externos y constituía una protesta contra toda tentativa de extender los sistemas de gobierno de Europa en el continente Americano. Pero los sucesores del Presidente Monroe la han desarrollado convirtiéndola en autoridad superintendente especialmente sobre disputas territoriales entre estados americanos y europeos

B—REGLAS DE CEREMONIAL Y ETIQUETA.

Los tratadistas generalmente al ocuparse de los derechos de igualdad han discutido lo concerniente á ceremonial y etiqueta por ser los signos visibles de la igualdad

ó bien del rango y de la consideración. Y en aquellos casos en que es imposible dar á todos el mismo tratamiento como, por ejemplo, al ordenar las festividades públicas ó la firma de los documentos internacionales, se han establecido reglas conciliatorias de la igualdad teórica de los estados con algún orden reconocido de precedencia. Las consideraremos brevemente bajo los siguientes acápite:

(1) Reglas de precedencia para soberanos y sus representantes.

Los soberanos que son testas coronadas tienen precedencia sobre los que no lo son; pero las repúblicas poderosas, como Francia y los Estados Unidos, tienen su rango entre los grandes estados monárquicos. El *alternat* y otros expedientes se usan para determinar el orden de las firmas en un documento internacional importante. El rango de los agentes diplomáticos regulares de los estados está fijado por el consenso general. Las reglas relativas á ese punto las daremos cuando tratemos de las legaciones y negociaciones. (Parte II, Capítulo V).

(2) Títulos y su reconocimiento por otros estados.

Cada estado confiere á su gobernante los títulos que quiera; pero los demás estados no están sujetos á reconocer un nuevo título y pueden imponer condiciones como precio del reconocimiento.

(3) Ceremonial marítimo.

Estos son saludos á la bandera nacional cambiados entre buques ó entre buques y fuertes. Se consideró en un tiempo que envolvían importantes cuestiones internacionales, pero ahora se les mira simplemente como asuntos de cortesía. Hay muchas reglas que les conciernen. Por ejemplo, los buques de guerra que entran á un puerto extranjero saludan primeramente á menos que lleven á bordo al soberano ó á su representante. Cuando los buques públicos de diferentes nacionalidades se encuentran

en el mar, saluda primero el buque cuyo comandante es inferior en rango.

Todo este ceremonial ha perdido la importancia que tuvo en otras épocas. Muchas disputas relacionadas con él se han arreglado amistosamente; y difícilmente será perturbada seriamente por ese motivo la paz y el bienestar de las naciones en lo futuro, como á veces ha sucedido en el pasado

CAPITULO V

Derechos y obligaciones conexas con la diplomacia

A—RELACIONES DIPLOMÁTICAS.

Los estados actualmente conducen sus relaciones diplomáticas ordinarias por medio de agentes que residen permanentemente en las cortes respectivas. La práctica de mantener tales agentes es comparativamente moderna. Fué iniciada por Luis XI de Francia; pero su adopción general data solamente de la paz de Westfalia, en 1648. Con respecto á los agentes diplomáticos tenemos que considerar:

(1) Las clases en que están divididos y su rango relativo.

Estas cuestiones dieron origen á un inmenso número de disputas hasta que fueron finalmente establecidas por el congreso de Aix-la-chapelle en 1818. Se convino entonces que los agentes diplomáticos se dividirían en cuatro clases:

- (a) Embajadores y legados papales ó nuncios.
- (b) Enviados y ministros plenipotenciarios acreditados ante los soberanos.
- (c) Ministros residentes acreditados ante los soberanos.
- (d) Encargados de negocios acreditados ante los ministros de relaciones exteriores.

Estas clases toman su rango en el orden en que las hemos mencionado, y los miembros de cada clase toman precedencia entre sí de acuerdo con la antigüedad de su residencia en la Corte en que están acreditados. Sólo algunos de los más poderosos estados envían embajadores. Los estados semi-soberanos no poseen derechos plenos de legación y negociación.

(2) La obligación de recibirlos.

Un estado que rehusara mantener relaciones diplomáticas con los demás estados, se colocaría *ipso facto* fuera del derecho internacional. Pero por razones especiales las relaciones entre dos estados pueden hallarse temporalmente interrumpidas. Sin embargo, tal proceder es signo de una grave diferencia entre las dos potencias y amenudo es seguido por la guerra. Por otra parte, la negativa de recibir una persona particular como representante diplomático de otro estado no es justo motivo de ofensa si el individuo en cuestión es

- (a) Personalmente peligroso para el soberano ante el cual es acreditado.
- (b) Uno de los súbditos del estado á que se le envía.
- (c) Abierta y confesadamente hostil al estado á que se le envía ó á su forma de gobierno.

Por razones de esa índole, un estado puede pedir el relevo de un representante diplomático residente en su Corte; y en casos extremos podría justificarse su despedida ó aun su expulsión fuera del país.

(3) Las formalidades conexas con su recepción y retiro.

Un ministro diplomático junto con su nombramiento recibe de su gobierno:

- (a) Una carta credencial especificando los objetos de su misión y requiriendo que se preste entero crédito á lo que diga á nombre de su soberano.
- (b) Plenos poderes autorizándole para obrar. En caso de una legación permanente en una Corte extranjera, los diplomáticos por regla general llevan carta

credencial pero no plenos poderes, á menos que deban negociar un tratado especial. En caso de una conferencia, los plenipotenciarios llevan generalmente plenos poderes pero no carta credencial.

- (c) Instrucciones por las que deben guiarse en las negociaciones que emprendan.
- (d) Un pasaporte autorizándoles para viajar hasta su destino.

A su llegada presenta su carta credencial en una audiencia del soberano, á menos que sea encargado de negocios en cuyo caso sólo obtiene audiencia del ministro de relaciones exteriores. Análoga ceremonia tiene lugar al retirarse después de terminar su misión.

B—INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS.

Mientras residen en las cortes extranjeras los ministros diplomáticos están exentos en grado elevado del sometimiento á la ley local. Sus personas son inviolables, á menos que estén conspirando contra la seguridad del estado en que se hallan acreditados, en cuyo caso pueden ser arrestados y expulsados del país. Están libres de los procesos incoados contra sus personas, á menos que voluntariamente consientan en desprenderse de sus privilegios y estar en juicio. Sus esposas, familia y servidumbre, gozan de las mismas inmunidades en una extensión muy considerable aunque mal definida. Su propiedad tiene muchas inmunidades, especialmente su casa habitación ó residencia oficial. Esta por muchos conceptos está bajo la jurisdicción del estado que representa la embajada, y excepto en casos extremos no puede ser allanada por las autoridades locales. Para considerarlas en detalle, las inmunidades diplomáticas deben clasificarse como sigue:



- | | | | |
|-----------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexas | { | (1) | Inmunidades del ministro y de aquellas personas de su séquito que tienen carácter diplomático. |
| con la | | (2) | Inmunidades de su esposa é hijos, de las personas de su séquito que no tienen carácter diplomático y de su servidumbre. |
| persona | { | (1) | Inmunidades de la casa-habitación y de otras propiedades que pertenezcan á la embajada. |
| Conexas | | (2) | Inmunidades de la propiedad privada del ministro situada en el país en que está acreditado. |
| con la | | (3) | Inmunidades de la mercancía recibida del exterior para uso de la embajada. |
| propiedad | | | |

C—CÓNSULES.

Los cónsules no son agentes diplomáticos sinó comerciales. Residen en el extranjero con el objeto de proteger los intereses individuales de los comerciantes, viajeros y marineros pertenecientes al estado que los empléa. Están bajo la ley y la jurisdicción locales y sus residencias, por regla general, no son independientes de la autoridad de los funcionarios locales. Pero sus documentos oficiales no están sujetos á registro, ellos mismos no pueden ser compelidos á servir en el ejército ó milicia y los soldados no pueden ser alojados en sus consulados. En los países de Oriente, sin embargo, tratados especiales han asignado una posición privilegiada á los cónsules de las potencias de Occidente. Ellos ejercen jurisdicción sobre sus conciudadanos, sus personas son inviolables, sus residencias pueden ser usadas como asilo en caso de guerra ó de tumulto y de hecho poseen más inmunidades diplomáticas que las ordinarias.

D—TRATADOS.

El poder de hacer tratados reside en cada estado en aquellas autoridades á quienes ha sido conferido por la constitución del estado. Mientras haya un poder cuyas declaraciones basten para ligar á todo el cuerpo político, los estados extranjeros no tienen derecho de inquirir nada más. Pero otras materias importantes conexas con los tratados son del dominio de las reglas internacionales. Las consideraremos en el orden siguiente:

(1) La naturaleza y necesidad de la ratificación.

La ratificación es una ceremonia formal por la cual, algún tiempo después de haberse firmado un tratado, se cambian solemnes confirmaciones entre las partes contratantes. Ningún tratado es obligatorio sin ratificación, á menos que por un convenio especial se disponga lo contrario. Al discutir la cuestión de si un estado está obligado á la ratificación, deben considerarse dos casos:

- (a) Cuando el poder de ratificación y el de hacer el tratado residen en dos autoridades diferentes. En este caso no hay obligación de ratificar, porque los demás estados saben desde el principio que tienen que asegurarse el consentimiento de ambas autoridades.
- (b) Cuando el poder de ratificación y el de hacer el tratado residen en la misma autoridad. Aquí hay más motivo de duda. Algunos entienden que salvo que hayan cambiado materialmente las circunstancias entre la negociación y la ratificación no puede rehusarse esta última. Pero la práctica moderna parece admitir la teoría de que si después de la firma de un tratado cambia de parecer un estado por alguna razón y nó por mero capricho, puede negarse á completar el pacto por la ratificación.

(2) Las reglas de interpretación que deben aplicarse á los tratados.

Los antiguos tratadistas hicieron buen gasto de ingenuidad en este punto; pero desde que no hay tribunal internacional que dé reglas de interpretación, los desacuerdos sobre los tratados deben arreglarse por medio de nuevas negociaciones entre los estados contratantes y amenudo se deciden de acuerdo con las conveniencias del momento más que de acuerdo con las conveniencias de la gramática ó de la lógica. Todo lo que podemos aventurarnos á establecer es que las palabras comunes deben tomarse en su sentido ordinario, los vocablos técnicos en su acepción técnica y que las expresiones y frases dudosas deben interpretarse por el contexto, de modo que el tratado resulte homogéneo y nó contradictorio.

(3) El tiempo por el cual son obligatorios los tratados.

A los ojos del derecho internacional, la obligación de los tratados es perpétua, á menos que ellos sean destruídos por la guerra, ó que en sus estipulaciones se haya limitado el tiempo de vigencia ó que dispongan el cumplimiento de actos que se ejecutan de una vez por todas como, por ejemplo, el pago de una indemnización. Pero es obvio que con el cambio de circunstancias pueden hacerse vetustas las cláusulas de un convenio. Es una cuestión de moralidad y nó de derecho la de saber cuando un tratado está anticuado ó bajo qué circunstancias puede ser infringido ó ignorado. Las guerras y otras eventualidades están modificando constantemente los pactos internacionales. Cada cambio debe ser juzgado según sus propios méritos, teniendo en cuenta por una parte que la buena fé es deber que incumbe tanto á los estados como á los individuos, y por otra que ninguna época puede ser tan sabia y buena como para que sus tratados lleguen á ser reglas para todo el tiempo subsiguiente.





SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

PARTE III

Estado de Guerra



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

ESTADO DE GRATIA



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

CAPÍTULO I

Definición de la guerra y otros puntos preliminares

A—NATURALEZA DE LA GUERRA.

La guerra puede definirse como *una contienda por medio de la fuerza pública entre estados ó entre estados y comunidades que en relación con la contienda tengan derechos de estados*. Esta definición excluye las guerras privadas, que desde hace tiempo han desaparecido de Europa, y hace también á un lado la idea de Grocio de que la guerra es un castigo. El derecho internacional moderno no tiene porqué decidir sobre la justicia ó injusticia de la guerra en general ó de una guerra en particular. Abandona tales cuestiones á la moralidad internacional y se ocupa solamente de la creación de la relación de beligerancia y de los efectos legales producidos por ella. Estos son los mismos en todas las guerras, ya sean moralmente justas ó moralmente injustas. La guerra se distingue de los demás modos coercitivos de obtener satisfacción en que estos últimos pueden coexistir con el mantenimiento de relaciones pacíficas entre los estados que son partes. Estos métodos pueden clasificarse bajo los siguientes acápites:

(1) Represalias.

El término es usado ámpliamente. Amenudo simplemente significa la aplicación de la *lex talionis* en las operaciones de guerra. En la acepción presente significa la captura ó destrucción por un estado de la propiedad perteneciente á otro estado ó á sus súbditos cuando se encuentra en el territorio ó aguas territoriales del último estado ó en alta mar. El ejemplo más reciente se encuentra en las operaciones de Francia contra China en 1884 cuando una escuadra francesa bombardeó el arsenal de Foo-Chow.

(2) Embargo.

Aquí tenemos de nuevo un término ambiguo. Aplicado á un acto de fuerza que no alcanza á ser la guerra misma, significa la captura de todos los buques de la nación ofensora que se encuentren en los puertos del estado agraviado como, por ejemplo, el apresamiento en 1839 por la Gran Bretaña de todos los buques napolitanos que estaban en aguas de Malta.

(3) Bloqueo pacífico.

Los bloqueos pacíficos difieren de los bloqueos establecidos en las operaciones de guerra en que los buques de terceras potencias no pueden ser apresados por los bloqueadores, mientras que en los bloqueos que forman parte de las operaciones de guerra pueden ser capturados y confiscados los buques neutrales que intentan entrar ó salir de un puerto bloqueado. La potencia que efectúa un bloqueo pacífico no tiene derecho de interceptar más comercio que el suyo y el del ofensor. En 1866, las grandes potencias á excepción de Francia, bloquearon pacíficamente una parte de la costa de Grecia y no detuvieron sinó á los buques de pabellón griego. Pero en 1897, los almirantes encargados del bloqueo pacífico de Creta por las grandes potencias pretendieron prohibir el acceso á la isla á todos los buques. No sobrevino oportunidad para que un tribunal se pronunciara acerca de la validéz de esta pretensión.

Todos los medios coercitivos para obtener satisfacción que tienen cabida entre la paz y la guerra, son anormales y propensos á degenerar en abusos. Pero el derecho internacional lo permite é indudablemente son útiles á veces como medio de ejercer presión sobre gobiernos débiles con menos sufrimientos de los que produciría la guerra. Un estado poderoso sometido á tal tratamiento indudablemente se desquitaría con rápidas hostilidades.

B—DECLARACIONES DE GUERRA.

Los tratadistas están divididos en cuanto á la necesi-

dad de hacer declaraciones formales de guerra. Una revista de la práctica de los estados da los resultados siguientes:

- (1) En la edad media se enviaban heraldos para notificar formalmente las hostilidades al enemigo. Esta práctica cayó en desuso en los tiempos modernos, habiéndose empleado por última vez en 1657.
- (2) Nació después la práctica de enviar al enemigo una declaración de guerra; pero nunca se convirtió en una costumbre obligatoria. El siglo pasado ha presenciado sobre sesenta guerras ó actos de represalias empezados por estados europeos sin formal notificación á la potencia atacada, en tanto que sólo han habido once declaraciones formales de guerra entre estados civilizados desde 1700 hasta la fecha.
- (3) Desde mediados del siglo XVIII se ha acostumbrado que la nación que comience la guerra publique un manifiesto dentro de su propio territorio y que envíe copias de aquél á los neutrales; pero muchas guerras han empezado sin la aparición de tal documento.

Por consiguiente, es evidente que no es necesario una declaración ú otra notificación. Los efectos legales de la guerra datan del primer acto de hostilidad.

C—RECONOCIMIENTO DE LA BELIGERANCIA.

Todo estado reconocido obtiene los derechos de beligerante si está empeñado en una guerra; pero cuando una comunidad que no es un estado ante el derecho internacional entra en hostilidades, sólo tiene los derechos y obligaciones de un estado con respecto á sus operaciones navales y militares, si las demás potencias le acuerdan lo que se denomina reconocimiento de la beligerancia. Sin embargo, no deben hacer esto á menos que sus intereses sean afectados por la lucha y que dicha comunidad éste reconocida y además:

- (1) Poséa un territorio determinado.
- (2) Esté regido por un gobierno organizado.
- (3) Haga la guerra en una forma civilizada.

El reconocimiento de la beligerancia bajo cualesquiera otras circunstancias es un acto de enemistad hacia la madre patria. Si la lucha es marítima y de larga duración, el reconocimiento es casi forzoso para las potencias marítimas; pero la guerra por tierra amenudo puede no ser tenida en cuenta. La madre patria acuerda el reconocimiento de hecho, aunque no en el nombre, cada vez que por motivos de humanidad trata á los rebeldes, no como traidores sinó como enemigos. La controversia con respecto al reconocimiento en 1861 de la beligerancia de los Estados Confederados por la Gran Bretaña, ilustra toda esta cuestión.

D—EFECTOS INMEDIATOS DEL COMIENZO DE LA GUERRA.

En el momento en que comienza la guerra se verifican *ipso facto* ciertos cambios en el estado de cosas preexistente. Estos son:

- (1) Las fuerzas públicas armadas de los beligerantes se colocan en una condición de hostilidad activa.
- (2) Las personas privadas están obligadas á interrumpir sus relaciones pacíficas con el enemigo.

Esta regla en sí misma es contraria á la doctrina, que en otros puntos también es contradicha por los hechos, de que la guerra es una relación entre los estados solamente y nó entre los individuos como tales.

- (3) Algunos tratados con el enemigo, tales como las convenciones de límites, no son afectados; otros, como los tratados de alianza, son abrogados; los tratados de extradición son suspendidos; y aquellos tratados como, por ejemplo, los que alteran las reglas ordinarias del apresamiento marítimo, entran en actividad.

La cuestión del efecto de la guerra sobre los tratados es

muy complicada. Se originan numerosos casos, especialmente en relación con los grandes instrumentos internacionales firmados por muchas potencias, á los cuales es imposible de antemano asignarles reglas de aplicación universal. Es también difícil decidir cuando un tratado es meramente suspendido por la guerra y cuando es abrogado enteramente.

CAPITULO II

Adquisición del carácter del enemigo

A—PERSONAS ENEMIGAS.

El carácter de enemigo es más ó menos marcado según las circunstancias. Algunos individuos son enemigos en la plena acepción del término. Pueden ser capturados ó muertos y las armas que llevan pueden ser tomadas como botín de guerra. Otros son enemigos sólo en cuanto están sujetos á la pérdida de una pequeña porción de su propiedad. Trataremos de disponer en escala descendente las varias clases de personas enemigas, empezando por aquellas que son enemigos en sentido estricto y terminando por aquellas otras que lo son en grado mínimo.

(1) Personas que están al servicio militar ó naval del estado enemigo.

Pueden ser muertas ó heridas en combate y en caso de ser capturadas pueden ser detenidas como prisioneros.

(2) Tripulantes que naveguen en los buques mercantes del estado enemigo.

Estos pueden combatir para defender su buque del apresamiento, pero nó de otra manera. Si se les toma, son considerados prisioneros de guerra.

(3) Personas domiciliadas en un país enemigo.

Cualquiera que sea su nacionalidad, la propiedad ligada á su domicilio, está sujeta á las severidades de

la guerra; y si permanecen en un distrito invadido puede obligárseles á prestar ciertos servicios á los invasores. (Parte III, Capítulos III y IV).

(4) Súbditos neutrales que tienen casa de comercio en el país enemigo.

La propiedad ligada con su casa de comercio es buena presa si es capturada en el mar.

(5) Personas que viven en lugares ocupados militarmente por el enemigo.

La propiedad que proceda de los lugares en cuestión puede ser capturada en alta mar.

Vemos así que la ciudadanía y el domicilio son los dos grandes indicadores del carácter de enemigo. Hablando en general, el domicilio de un hombre es su residencia permanente, su hogar. Para objetos de captura beligerante el domicilio se determina por la antigüedad de la residencia y por la intención de la permanencia.

B—PROPIEDAD ENEMIGA.

El carácter de enemigo pertenece á la propiedad, lo mismo que á las personas, en mayor ó menor grado, según las circunstancias. Adoptado nuevamente el plan de una escala descendente, podemos decir que el derecho internacional mira como propiedad enemiga á

(1) La propiedad que pertenece al estado enemigo.

Esta puede ser tomada en cualquier lugar en que sea legal efectuar hostilidades. Sin embargo, hay ciertas excepciones, que se encontrarán en los Capítulos IV y V de la presente parte.

(2) La propiedad perteneciente á súbditos del estado enemigo.

Esta es confiscable si se la encuentra en el mar á menos que esté ligada con un domicilio neutral adquirido por su propietario. Por regla general, en tierra está exenta del apresamiento. Pero hay muchas excepciones y las principales se encontrarán en el Capítulo IV de esta parte.

- (3) Los bienes del estado poseídos por neutrales en territorios beligerantes ó en lugares militarmente ocupados por el enemigo.

Estos conservan el carácter de enemigo en cuanto continúan siendo propiedad del dueño del suelo.

- (4) La propiedad de los neutrales incorporada al comercio del enemigo ó á su contralor.

Por ejemplo, el buque de un súbdito neutral tripulado por un capitán y marinería enemigos y habitualmente dedicado al comercio del enemigo con licencia de su gobierno, se tendría por propiedad enemiga.

Vemos así que la nacionalidad y el domicilio del dueño de la propiedad, el carácter del lugar de donde procede y la naturaleza del contralor ejercido sobre ella tienen que tomarse en cuenta para determinar cuando posee el carácter de enemigo. A veces es difícil decir cuando un lugar dado está bajo la soberanía neutral ó bajo la beligerante. En tales casos el carácter de la propiedad que se encuentra dentro de aquél, ó que de allí proceda, deberá determinarse por el uso de dicho lugar y por el carácter y acciones de la potencia que en él ejerce permanente contralor militar. Debe notarse cuidadosamente que la propiedad enemiga no puede ser capturada meramente porque es tal propiedad enemiga; como lo haremos ver en los dos Capítulos siguientes, deben considerarse el lugar, el uso y las circunstancias.

CAPITULO III

El derecho de la guerra con respecto á las personas enemigas

A—SUBDITOS ENEMIGOS QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO AL COMIENZO DE GUERRA.

El tratamiento de tales personas ha variado muchí-

simo en las diferentes épocas. La práctica á su respecto puede resumirse como sigue:

- (1) En la edad media existía derecho para arrestarlos, pero rara vez se ponía en vigor, y generalmente se les acordaba un plazo para salir del territorio.
- (2) En el siglo XVIII varios tratados les acordaban un tiempo considerable para ausentarse; y en época reciente se han celebrado algunos tratados de esa naturaleza.
- (3) Desde mediados del siglo XVIII ha sido costumbre general permitirles la permanencia; y durante el siglo pasado se han estipulado tratados con ese objeto. Naturalmente están siempre sujetos á la condición de no prestar auxilios á los enemigos del estado en que residen.

Podemos concluir afirmando que el derecho de arresto ha sido derogado por la costumbre y que, aunque continúe en vigor el derecho de expulsión, su ejercicio es mirado desfavorablemente á menos que una grave emergencia haga necesaria esa expulsión, sea para la seguridad del estado ó para la conservación de la vida de los expulsados.

B—ENEMIGOS COMBATIENTES.

La división de una población enemiga en combatientes y no combatientes es uno de los más conspicuos triunfos de la humanidad. Antiguamente se tenía la idea de que la guerra libraba al enemigo y á su propiedad á una violencia ilimitada. Hoy se piensa que debe limitarse el rigor á cuanto baste para destruir su poder de resistencia. Este principio á la vez limita á quienes debe aplicarse la violencia y define la medida y extensión de la violencia aplicada. Así, con respecto á los combatientes.

- (1) Se dá cuartel excepto en casos muy extremos.

Hasta la conclusión de la guerra de Treinta Años, en 1648, se estipulaba formalmente esa condición por tratados.

- (2) Los prisioneros son socorridos, y canjeados si es posible.

Antiguamente eran muertos ó reducidos á la esclavitud. En la Edad Media nació la costumbre del rescate; y en los tiempos modernos ella ha sido sustituida por el canje y la libertad bajo palabra. Las siguientes clases de personas, á la par de los combatientes, pueden ser hechos prisioneros de guerra;

- (a) Los marineros mercantes puesto que pueden ser reclutados para la escuadra de combate.
 - (b) Las personas que pueden ser de beneficio directo para el enemigo si se encuentran presentes en una acción como, por ejemplo, los telegrafistas, aeronautas y policía militar.
 - (c) Los miembros de la familia real del enemigo y sus ministros de estado y altos funcionarios.
- (3) Los heridos y enfermos deben ser prolijamente cuidados.

Las previsiones especiales para ello empezaron en 1190, á la fundación de la Orden de caballeros Teutónicos, pero los resultados fueron escasos hasta hace muy poco tiempo. La convención de Ginebra de 1864, que neutralizó á todas las personas y cosas conexas con el cuidado de los enfermos y heridos, fué un gran paso adelante.

- (3) La práctica de rehusar cuartel á los defensores de una fortaleza tomada por asalto, es hoy anticuada.

Costó mucho para que cayera en desuso; pero las guerras recientes entre potencias civilizadas permiten esperar que no revivirá.

- (3) Ciertos medios de destrucción están prohibidos.

Son considerados como alevosos ó como innecesariamente crueles. En el Capítulo VI de esta parte se encontrará una enumeración de ellos.

C—ENEMIGOS NO COMBATIENTES.

Antiguamente era costumbre infligir toda suerte de

indignidades, desde el saqueo hasta la muerte, á los habitantes inermes de un país enemigo. Gradual y lentamente aparecieron prácticas más humanas como las que mencionamos á continuación.

- (1) Los no combatientes están exentos de toda injuria personal, excepto en cuanto puedan ocurrir incidentalmente en el curso de operaciones de guerra con tal de que se sometan á las exacciones del enemigo y observen los reglamentos dictados por él.

Cuando residen en un territorio que está bajo la ocupación del enemigo, están sujetos á ser llamados para efectuar servicios que claramente no sean de carácter militar, y están sometidos al pago de contribuciones y á las requisiciones. Pero, bajo pena de muerte, no deben prestar auxilios ó suministrar informes á su propio partido. Aún cuando no ha obtenido todavía fuerza obligatoria, está surgiendo la costumbre de permitir á las mujeres y niños que salgan de las plazas que deben ser bombardeadas.

- (2) Debe protegerse á los habitantes de las ciudades capturadas.

No deben ser abandonados á la violencia de la soldadesca victoriosa.

- (3) Los que atienden á los enfermos y heridos deben ser especialmente protegidos de acuerdo con la convención de Ginebra.

Esto se les acuerda á condición de que no tomen parte en actos de hostilidad y de que lleven un brazal blanco con cruz roja.

Las resoluciones de la conferencia de Bruselas de 1874 son muy valiosas, pues comprenden las mejores prácticas de las grandes naciones militares con respecto á las personas enemigas, tanto combatientes como nó combatientes; pero no han sido formalmente adoptadas por los esta-

dos como obligatorios para los beligerantes. Desgraciadamente, en las luchas con las tribus bárbaras amenudo se han usado prácticas mucho más crueles que las de uso en las guerras civilizadas. Hay grave peligro de que tal inhumanidad afecte sériamente el carácter de las fuerzas que se emplean y el de las naciones que la toleran.

CAPITULO IV

El derecho de la guerra con respecto á la propiedad enemiga en tierra

A—PROPIEDAD ENEMIGA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO AL COMIENZO DE LA GUERRA.

Esta puede dividirse en propiedad del estado enemigo y en propiedad de las personas privadas. En los casos raros en que alguna de la primera clase se encuentra en el territorio de un enemigo al comienzo de una guerra, ella será confiscada, á menos de que consista en libros ú obras de arte. Consideraremos á la propiedad privada bajo los siguientes acápite:

(1) Propiedad real.

La práctica más antigua fué la de confiscarla. Después se acostumbró la apropiación de los frutos solamente. En los tiempos modernos ella es respetada.

(2) Propiedad personal ordinaria.

Esta era confiscada hasta época reciente, pero en las últimas guerras ha sido respetada. Muchos estados han celebrado tratados prohibiendo su confiscación. Las deudas debidas por súbditos de un beligerante á súbditos del otro se consideran bajo un mismo pié que las otras formas de propiedad personal. La tentativa de la Gran Bretaña contra Dinamarca en 1807 tendiente á imponer la doctrina de que no eran confiscables encontró poco favor. Pero en las guerras recientes no han sido confis-

casas. No pueden ser exigidas durante la guerra; pero el derecho para demandar su pago revive tan pronto como se concluye la paz. En el hecho, todas las clases ordinarias de propiedad personal están tan protegidas contra la confiscación por la práctica moderna, que es dudoso que el derecho de confiscación pueda revivir en el derecho internacional.

(3) Deudas debidas por un estado beligerante á los súbditos del enemigo.

Se acepta que la buena fé nacional está ligada á ellas de una manera tan sagrada que no pueden ser confiscadas en tiempo de guerra. Esto quedó plenamente establecido en la controversia del empréstito de Silesia de 1752—56.

B—BOTÍN.

Los bienes muebles tomados al enemigo como despojos en el curso de operaciones de guerra, en tierra, se llaman botín. El derecho internacional adjudica los despojos de guerra al estado captor; pero las leyes de todos los estados civilizados establecen que el total ó una parte de a mercancía capturada debe entregarse á los captores. Generalmente, el botín se vende y se divide el producto entre todos los que realizaron la captura, de acuerdo con una partición dispuesta por las autoridades del estado captor. Si es recapturado antes de que haya permanecido durante veinte y cuatro horas en posesión de los captores, ó antes de que lo hayan conducido dentro de sus líneas, se revierte á los propietarios originales y no pertenece á los represadores.

C—OCUPACIÓN BELIGERANTE Y DERECHOS QUE CONFIERE SOBRE LA PROPIEDAD.

Hasta los tiempos relativamente modernos, no se hacía distinción entre la ocupación y la conquista completa, y los hábitos de la guerra con respecto á la apropiación y destrucción de la propiedad por un invasor fueron se-

verísimos. Pero desde fines del siglo XVII y principios del XVIII data el comienzo de un progreso decidido. En los tiempos modernos, los derechos de un invasor ocupante han sido rigurosamente distinguidos de los plenos derechos de soberanía adquiridos por conquista. Pero apesar de que esos derechos son grandes, un invasor puede considerar como ocupado un distrito que sea de corta extensión. La conferencia de Bruselas de 1874 intentó reducir á límites razonables las pretensiones de un ejército invasor por medio de la explicación de la naturaleza de la ocupación en los siguientes términos:

Se considera ocupado un territorio cuando está colocado bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación sólo se extiende á aquellos territorios en donde está establecida y puede ser ejercida esa autoridad.

Así, de acuerdo con la más autorizada opinión moderna, para que un invasor pueda legalmente ejercer los derechos de ocupación beligerante en un distrito, debe tenerlo bajo su firme posesión. No basta que hayan penetrado á él sus descubiertas y avanzadas. La ocupación tiene importantísimas consecuencias legales con la propiedad. Las trataremos bajo estos títulos:

(1) Propiedad del estado.

Con ciertas excepciones, tales como documentos legales, bibliotecas, archivos y obras de arte, las cosas muebles pertenecientes al estado invadido, pueden ser apropiadas y enagenadas. Pero los inmuebles no pueden ser enagenados aunque, por regla general, pueden ser usados y pueden apropiarse sus rentas y frutos.

(2) Propiedad privada.

- (a) Los inmuebles pueden ser usados ó destruídos sólo en cuanto lo exijan las necesidades de la guerra y sus frutos no pueden ser confiscados.
- (b) Los muebles no pueden ser tomados, á menos que sean de uso inmediato en la guerra; pero está

permitida su confiscación como castigo por actos ilegales ejecutados por los propietarios.

- (c) Pueden hacerse requisiciones é imponerse contribuciones y multas por las autoridades del ejército ocupante. Las *requisiciones* son pedidos de artículos necesitados para el uso y consumo diario de los invasores; las *contribuciones* son sumas de dinero exigidas fuera de los impuestos ordinarios; y las *multas* son sumas de dinero extraídas de los distritos como castigo por ofensas cometidas en ellos contra los invasores. A veces se efectúa el pago de lo que se toma por vía de requisición, pero eso no es obligatorio.

Con respecto á todas estas materias la conferencia de Bruselas de 1874 adoptó reglas importantes, muchas de las cuales probablemente se observarán en caso de guerra entre potencias civilizadas.

CAPITULO V

Del derecho de la guerra con respecto á la propiedad enemiga en el mar

A—DERECHO DE CAPTURA.

En el mar, tanto la propiedad privada como la pública que pertenece al enemigo están sujetas á captura. Los buques de un beligerante pueden ser atacados y apresados en sus propios puertos y aguas, en los puertos y aguas de la potencia atacante y en alta mar; pero nó en aguas y puertos neutrales. Consideraremos los diversos casos en el siguiente orden:

- (1) Buques públicos del enemigo.

Estos pueden ser capturados á menos que

- (a) Estén empeñados exclusivamente en trabajos de exploración ó descubrimientos, y provistos de pases

que les protejan del apresamiento hostil, á condición de que no tomen parte en las operaciones beligerantes.

- (b) Buques de parlamento, que pueden ser públicos ó privados, y se emplean exclusivamente en servicios conexos con el canje de prisioneros.

Probablemente estarán también exentos los buques hospitales, destinados á ese servicio antes del comienzo de la guerra y que se empleen exclusivamente para la asistencia de los enfermos y heridos, pero en el derecho internacional no hay regla obligatoria con respecto á ellos.

- (2) Buques privados del enemigo.

Estos pueden ser capturados con excepción de

- (a) Los que se encuentren en los puertos del adversario al rompimiento de las hostilidades. Al principio de las guerras recientes se ha acostumbrado asignar un tiempo razonable para la partida de los buques mercantes del enemigo y es difícil que en adelante se niegue tal permiso.
- (b) Las lanchas pescadoras empleadas en las pesquerías costaneras. Pero la inmunidad no se extiende á las embarcaciones destinadas á pescar en alta mar y deben ser separadas de las embarcaciones de la costa si se utilizan para operaciones hostiles.

Es probable que se otorgue una exención á los buques empleados exclusivamente en trabajos de descubrimientos ó humanitarios; pero no existe una costumbre general que permita establecer tal regla.

- (3) Mercancías del enemigo encontradas á bordo de buques enemigos.

Estas pueden ser apresadas con la posible excepción de las obras literarias y de arte y de los artículos sanitarios. El artículo segundo de la declaración de París de 1856 prohíbe la captura de mercancía enemiga bajo pabellón neutral, á menos de que sea contrabando de guerra (Parte IV, capítulo V).

El derecho internacional reconoce el rescate de buques y mercancías capturadas por el enemigo, pero la Gran Bretaña y muchos otros estados prohíben tal acto á sus súbditos. La propiedad capturada por el enemigo en el mar y después represada se restituye á sus propietarios originales bajo las condiciones establecidas por la ley de cada estado para sus propias fuerzas navales. La Gran Bretaña efectúa la restitución si la represa tiene lugar durante la misma guerra, mediante el pago á los represadores de un salvamento que varía de un octavo á un cuarto del valor de la propiedad represada.

B—DERECHO DE VISITA.

Es el derecho de detener, visitar y registrar buques en alta mar con objeto de descubrir si ellos ó las mercancías que llevan están sujetas á apresamiento. Es un auxiliar del derecho de captura que sería inútil sin aquél. Debe notarse que

- (1) El derecho de visita, es un derecho estrictamente beligerante y, exceptuando á los piratas, no existe en tiempo de paz á menos que haya sido estipulado expresamente por tratado para algún objeto especial.
- (2) La presencia con los buques mercantes neutrales de un buque público de su propio estado como escolta y protección, no los exceptúa de la visita beligerante en ausencia de estipulaciones especiales (parte IV, capítulo III). Si los buques mercantes neutrales aceptan la protección de un buque de guerra beligerante, quedan *ipso facto* sujetos á captura por el otro beligerante.

Muchos estados civilizados se han concedido unos á otros un derecho limitado de visita en tiempo de paz con objeto de abolir el tráfico de los esclavos africanos (parte II, capítulo III).

C—TRIBUNALES DE PRESAS.

Para la protección de los neutrales y la justa decisión de la pretensión de los apresadores, todos los estados civilizados establecen en sus territorios tribunales de presas encargados de decidir las cuestiones sobre derechos de propiedad en los apresamientos realizados por sus cruceros. A este respecto podemos establecer que

- (1) Aunque son tribunales comunes, aplican el derecho internacional.
- (2) Su jurisdicción se extiende no sólo á las capturas realizadas por cruceros de su propio país en caso de guerra, sinó también en tiempo de paz á ciertos apresamientos excepcionales verificados por buques beligerantes que han violado su neutralidad.
- (3) Pueden tener su asiento en el territorio del captor ó en uno ocupado por él ó en el territorio de un aliado del captor en la guerra, pero no en territorio neutral.
- (4) Su procedimiento más se acerca al de una averiguación hecha por el gobierno que á un juicio ordinario entre litigantes.
- (5) El estado es responsable por sus actos; y si han dictado sentencias injustas, aquél está obligado á dar satisfacción á las partes agraviadas, especialmente cuando son súbditos neutrales.

Cuando se efectúa un apresamiento en el mar, es un deber del crucero captor el envío del buque apresado con su tripulación, sus documentos y todo lo que se encuentre á su bordo, al tribunal de presas más próximo del país del enemigo para su adjudicación. Pero si es imposible ó excesivamente peligrosa para el buque la navegación hasta el puerto donde tiene su asiento el tribunal de presas, deberá ser destruido en el mar, si es enemigo, ó abandonado, si es neutral.

CAPITULO VI

Agentes, instrumentos y métodos de guerra

A — AGENTES.

Los soldados y marineros del ejército y armada regulares de los beligerantes, incluyendo la milicia y las reservas plenamente organizadas, son sin duda agentes legales de la guerra. Pero se han levantado dudas y disputas acerca del empleo de ciertas clases de personas. Con esto se ligan algunos de los puntos más difíciles y controvertidos del derecho internacional moderno. Los consideraremos en este orden:

(1) Guerrillas.

Se considera generalmente que son combatientes legales si tienen como distintivos una divisa reconocible á distancia, llevan armas abiertamente, observan las reglas ordinarias de la guerra y obran bajo las órdenes de una persona responsable de sus subordinados.

(2) Levas en masa.

Cuando los habitantes de distritos no ocupados por un enemigo, en cumplimiento de órdenes de su gobierno, se levantan, arman y organizan bajo su autoridad, no puede haber duda de que son combatientes legales. Más dificultad hay con respecto á los levantamientos espontáneos á la aproximación de un invasor; pero la mejor opinión es la de que son combatientes legales si las poblaciones armadas respetan las leyes de la guerra. Sin embargo, una insurrección contra el invasor de los habitantes de distritos ocupados no sería mirado por este ciertamente como un acto legal de guerra.

(3) Tropas salvajes.

La práctica de emplearlas como aliadas y auxiliares es reprobable, pero no puede llamarse ilegal. Si están regularmente organizadas é instruídas y comandadas por oficiales civilizados, pueden ser usadas indudablemente; y

es costumbre en las guerras con tribus bárbaras la de aceptar la ayuda de otros bárbaros organizados y comandados según sus propios hábitos.

(4) Espías.

Pueden ser empleados por los jefes, pero en caso de ser tomados por el adversario se les aplica la pena de muerte.

Con respecto á la mayoría de estos agentes, se encontrarán valiosos informes en las resoluciones de la conferencia de Bruselas de 1874.

B—INSTRUMENTOS Y MÉTODOS.

Trataremos de estos ahora, haciendo presente que todos los instrumentos y métodos de destrucción son permitidos si no están expresamente prohibidos por el derecho internacional. Por eso no será necesario ocuparnos más que de los casos dudosos.

(1) Corsarios.

Estos son buques de propiedad privada tripulados por civiles pero autorizados por el estado bajo ciertas condiciones para ejercer depredaciones en el comercio del enemigo. Están prohibidos por la declaración de París de 1856 que está firmada por casi todos los estados civilizados y que se observa aún por aquellos que no la han firmado.

(2) Escuadra voluntaria.

Su legalidad depende de la estrictéz del contralor ejercido sobre los buques y tripulaciones por las autoridades del estado que los emplea.

(3) Asesinato.

La alevosía es la característica que distingue el asesinato de la matanza permitida en operaciones de guerra. Está prohibido un ataque á traición, pero es legal matar en una emboscada.

(4) Veneno.

Es ilegal el envenenamiento de los alimentos y del agua que ha de usar el enemigo, así como el empleo de armas envenenadas.



(5) **Proyectiles.**

Están prohibidos los que producen sufrimientos innecesarios. Es ilegal el empleo de balas explosivas que pesen menos de 14 onzas y el cargar los cañones con fragmentos de hierro, de vidrio y otras clases de materias destrozadas.

(6) **Devastación.**

Es legal la devastación de un territorio cuando puede justificarse el acto como una necesidad inmediata de la ejecución de operaciones militares. En otra forma es considerada como bárbara é ilegal. Pero la devastación de su propio país por una población que por ese medio intenta detener el avance de un invasor, es un acto de sacrificio heroico que en ningún modo prohíben las leyes de la guerra.

(7) **Estratagemas.**

No están permitidas aquéllas que violan la inteligencia general entre los beligerantes. Todos los demás engaños son legales.

CAPITULO VII

Relaciones no hostiles de los beligerantes y efectos legales de la conclusión de la paz

A—RELACIONES NO HOSTILES DE LOS BELIGERANTES.

Durante la guerra se mantienen entre los beligerantes ciertas relaciones más ó menos amistosas. Estas son:

(1) **Banderas de parlamento.**

Estas son banderas blancas que se usan como señal cuando un beligerante quiere enviar un mensaje al otro durante la acción. No se debe hacer fuego sobre los parlamentarios ni se les puede injuriar ni hacerlos prisioneros; pero un beligerante puede rehusarse á recibirlos ó recibirlos sólo bajo condiciones.

(2) Pasaportes y salvo-conductos.

Estos son permisos para transitar que se dan por un gobierno beligerante á los súbditos del enemigo. Los pasaportes se refieren á las personas, los salvo-conductos á las personas y á las cosas.

(3) Licencias para comerciar.

Estas son *generales* cuando un estado otorga permiso á todos sus súbditos ó á todos los del enemigo para comerciar en artículos ó plazas determinadas; son *especiales* cuando el permiso es otorgado por el estado ó por uno de los jefes á individuos determinados para comerciar en la forma especificada en la licencia. Los neutrales pueden recibir licencias para dedicarse á un comercio que les esté prohibido por las leyes ordinarias de la guerra.

(4) Carteles.

Estos son convenios entre los beligerantes sobre el modo de efectuar ciertas relaciones en tiempo de guerra. El término se aplica especialmente á las estipulaciones relativas al canje de prisioneros.

(5) Capitulaciones.

Estos son convenios para la rendición bajo condiciones de una plaza fortificada ó de una fuerza naval ó militar. Todo jefe puede hacerlos con respecto á las plazas ó fuerzas de su mando; pero si se excede de sus facultades será menester la ratificación de su comandante en jefe para que la convención sea válida; y si se estipulan condiciones políticas por autoridades navales ó militares, la capitulación no valdrá antes de ser ratificada por el gobierno.

(6) Treguas y armisticios.

Estas son suspensiones temporarias de hostilidades en todo ó parte del teatro de la guerra. Todo jefe puede pactarlas para remediar las necesidades temporarias de sus propias fuerzas; pero un armisticio general que abarque á todo el teatro de la guerra, sólo puede ser hecho por el supremo poder del estado. Un armisticio de esa

naturaleza se concluye generalmente como primera etapa de las negociaciones de paz.

Hay otros *commercia belli*, pero no son bastante importantes para que nos ocupemos de ellos.

B—EFECTOS LEGALES DE LA CONCLUSIÓN DE LA PAZ.

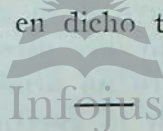
La guerra entre estados civilizados se termina casi invariablemente por un tratado de paz. Debe notarse que

(1) Tan pronto como se concluye la paz, cesan todos los derechos incidentes del estado de guerra, á menos de que por el tratado mismo se fije una fecha futura para la terminación de las hostilidades. No solamente no se librarán más combates, sinó que no podrán hacerse más requisiciones ni exigirse más contribuciones ni continuar haciendo prisioneros de guerra.

(2) A la conclusión de la paz reviven todos los derechos privados suspendidos durante la guerra. Renacen los contratos no invalidados ó cuyo cumplimiento no se haya hecho imposible por la guerra y se hacen exigibles las deudas privadas.

(3) Entre los estados que fueron beligerantes, rige el principio del *uti possidetis* para todo aquello que no haya sido materia de estipulación expresa en el tratado de paz. Pero casi siempre los tratados provéen á todas las materias importantes.

La conquista completa tiene todos los efectos legales de la cesión por tratados. Pero la transferencia de territorio por mera conquista es muy rara en los tiempos modernos. Casi siempre se establece por tratado, lo que legalmente tiene la gran ventaja de fijar la fecha exacta del comienzo de la nueva soberanía y del nuevo orden de cosas que se basa en dicho tratado.



PARTE IV
NEUTRALIDAD



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

CAPITULO I

Naturaleza y divisiones de la neutralidad

A—NATURALEZA DE LA NEUTRALIDAD.

La neutralidad puede definirse diciendo que es *la condición de aquellos estados que en tiempo de guerra no toman parte en la contienda y continúan sus relaciones pacíficas con los beligerantes*. Por consiguiente, en cuanto á ellos toca es una continuación del estado de paz previamente existente; pero, sin embargo, el derecho internacional les impone ciertos derechos y obligaciones que no existen en época de paz universal y estos son los que se establecen y definen en el derecho de la neutralidad. Nos ocuparemos de ellos en los siguientes párrafos:

(1) Las clases en que ha sido dividida.

Los tratadistas enumeran éstas:

- (a) Neutralidad perfecta, que es simplemente la neutralidad de tipo ordinario que envuelve una imparcialidad completa y la igualdad en el trato con las partes empeñadas en guerra.
- (b) Neutralidad imperfecta ó calificada, que es la neutralidad modificada por estipulaciones de los tratados y que constituye la teoría según la cual un estado que antes de la guerra ha convenido en enviar un contingente al ejército ó armada de uno de los beligerantes ó en acordarle privilegios especiales y

exclusivos en materias conexas con la guerra, puede ejecutar esos actos sin perder por ello su carácter neutral.

La tendencia práctica durante el siglo pasado ha sido la de insistir sobre la neutralidad perfecta en todos los casos; y como la neutralidad imperfecta es contraria al principio de imparcialidad que es la raíz de las ideas modernas en este asunto, debe estimársela como ilegal, puesto que ya no se apoya en la costumbre.

(2) Diferencia entre la neutralidad y la neutralización.

En la neutralidad ordinaria están envueltos los dos elementos siguientes: abstracción de tomar parte en una guerra existente y libertad para empeñarse ó no en ella. En la neutralización se conserva el primer elemento; pero en sustitución del segundo, el derecho internacional impone la obligación de no combatir excepto en la estricta defensa propia, ó de abstenerse de usar para propósitos de guerra ciertos lugares ó cosas á los cuales por una convención se les ha dado un carácter neutral. Esta condición de neutralidad forzosa ha sido impuesta á

- (a) Los estados, tales como Bélgica y Suiza, cuya independencia y neutralidad perpétuas han garantizado las grandes potencias de Europa.
- (b) Las provincias, tales como Saboya y las islas jónicas de Corfu y Paxo, que han sido neutralizadas por las grandes potencias, pero cuya posición, como parte de estados que tienen libertad de hacer la guerra cuando lo determinen, es ciertamente anómala.
- (c) Las vías de agua internacionales, tales como el Canal de Suez y el Estrecho de Magallanes, que han sido neutralizados por la convención de Octubre de 1888 y el tratado de límites Argentino-Chileno de 1881.
- (d) Las personas y cosas conexas con el cuidado de los enfermos y heridos en la guerra. Ellas han sido neutralizadas por la convención de Ginebra de 1874.

Como la neutralización altera los derechos y las obligaciones de todos los estados afectados por ella, es necesario para darle validéz su expreso consentimiento ó el acuerdo de las grandes potencias que en cierta manera actúan como sus representantes. El vocablo es amenudo impropiamente usado para ocultar el empeño de disminuir ó mitigar la guerra entre los estados. Por consiguiente, debemos recordar que no habrá neutralización verdadera sin la imposición completa y permanente del caracter neutral por el consenso general.

B—DIVISIONES DE LA NEUTRALIDAD.

Ni los griegos ni los romanos tuvieron denominación exactamente correspondiente á nuestros términos *neutral* y *neutralidad*. Estos términos no se hicieron de uso general hasta mediados del siglo XVIII, lo que es prueba segura de que en ningún gran cuerpo de leyes se hizo mención de lo que significan esos términos. En la Edad Media era frecuente que los estados que ostensiblemente no eran parte en una guerra, cometieran actos flagrantes de hostilidad y que los beligerantes violaran los territorios neutrales con limitada ceremonia. Tan rudimentario era el derecho en este punto, que la obra de Grocio sólo contiene un capítulo sobre neutralidad. Pero á partir de su época rápidamente aparecieron algunas reglas relativas á eso, que ahora forman una de las mayores y más importantes partes del derecho internacional. La neutralidad es susceptible de dos divisiones.

- (1) Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los estados neutrales.

Con respecto á esto podemos señalar las siguientes etapas:

- (a) Tan pronto como se reconoció que los estados beligerantes y neutrales tienen derechos mútuos, se opinó que el neutral debía medir su derecho con respecto al beligerante por su apreciación de la justicia de la

querella y que el beligerante debía permitir al neutral que se abstuviera de la guerra y no debía violar su soberanía bajo pretextos triviales. Tal fué el parecer de Grocio y puede afirmarse que esta fué la doctrina aceptada en el siglo XVII.

- (b) Después se consideró que un neutral cometía falta al prestar auxilio á un beligerante, salvo el caso de que á ello fuera obligado por tratado estipulado antes de la guerra; y lo mismo se opinó del beligerante que sin grave necesidad violaba la soberanía neutral. Esta doctrina imperó en el siglo XVIII.
- (c) Finalmente llegamos á la idea de que un neutral debe abstenerse de prestar ayuda á un beligerante en todas las circunstancias y que así mismo debe impedir á sus súbditos la ejecución de actos que puedan servir de ayuda á uno de los beligerantes en detrimento del otro; mientras que los beligerantes por su parte deben respetar escrupulosamente la soberanía neutral. Esta es la doctrina del siglo XIX.

Esta parte del derecho de la neutralidad es debida principalmente al desarrollo de los principios filosóficos de que el neutral está obligado á demostrar perfecta imparcialidad y el beligerante á respetar la soberanía neutral. El proceso de desenvolvimiento aún continúa; y aunque en el tiempo presente están bastante bien definidos los derechos de los estados neutrales, hay grandes dudas en cuanto á la medida plena de sus obligaciones, cuyo ensanche ha sido la tendencia dominante de la época moderna.

- (2) Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales.

Desde la infancia del derecho marítimo los beligerantes tuvieron derecho de restringir en cierto grado el tráfico de los comerciantes neutrales. Si un individuo neutral se empeña en un tráfico prohibido, el estado beligerante no se queja al estado neutral sino que castiga directamente al individuo

neutral sometiéndole á sus propios tribunales de presas. El estado neutral no aparece en esto para nada, á menos de que el castigo no sea admitido por el derecho internacional, en cuyo caso exige reparación para su súbdito injuriado. Trataremos esta parte bajo los siguientes encabezamientos:

- (a) Comercio ordinario.
- (b) Bloqueo.
- (c) Tráfico de contrabando.
- (d) Servicio no neutral.

Todo el derecho á este respecto nace del conflicto de los dos principios de que los neutrales tienen derecho para continuar sus ocupaciones pacíficas sin ser perturbados por los beligerantes y de que los beligerantes tienen derecho de continuar sus operaciones de guerra sin ser perturbados por los neutrales. Está formado por reglas que establecen cual de ellos prevalece en casos dados. En estas materias la tendencia de los tiempos modernos es la de aumentar los derechos de los neutrales.

CAPITULO II

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los estados neutrales

A—OBLIGACIONES DE UN ESTADO BELIGERANTE HACIA LOS ESTADOS NEUTRALES.

El derecho internacional define con notable claridad las obligaciones de un estado beligerante en sus relaciones con estados neutrales. Las principales son:

- (1) No empeñar hostilidades dentro de un territorio neutral.
- (2) No efectuar en un territorio neutral la preparación directa de actos de hostilidad, tales como organizar expediciones armadas, reclutar gente ú obtener

- provisiones de armas ó de artículos de guerra; y no usar el territorio neutral como base de operaciones.
- (3) Obedecer todos los reglamentos razonables é imparciales de los neutrales en materias tales como el desarme é internación de tropas que crucen las fronteras neutrales, la admisión de sus cruceros y presas en los puertos neutrales, el plazo para permanecer en ellos y la cantidad de provisiones inocentes que ellos puedan adquirir.
- (4) Dar reparación á todo estado cuya neutralidad haya sido violada.

Los beligerantes no tienen derecho para tomar, bajo el título de angarias ó prestación, á los buques mercantes neutrales que se encuentren en las aguas jurisdiccionales de aquellos, para emplearlos como transportes ó en cualquier otra forma en las operaciones de guerra. Tal proceder es un ultrage por el cual deben darse explicaciones y satisfacciones.

B—OBLIGACIONES DE UN ESTADO NEUTRAL HACIA LOS ESTADOS BELIGERANTES.

La parte del derecho internacional que se ocupa de las obligaciones de los estados neutrales en sus relaciones con los estados beligerantes no está aún bien establecida. Algunas de sus reglas son claras y definidas. Con respecto á otras hay mucha duda, porque la opinión ha cambiado grandemente en los tiempos modernos y hasta ahora no ha aparecido un uso fijo. Podemos decir que un estado neutral está sometido á

- (1) No dar ayuda armada á ninguno de los beligerantes. Ahora no se permite ni aún una ayuda limitada que se dé de acuerdo con un tratado estipulado antes de la guerra.
- (2) No permitir el paso de tropas beligerantes á través de su territorio ni la leva de soldados en él para servicio beligerante.

Hubo antes alguna duda á este respecto; pero en los

tiempos modernos tanto la práctica como la opinión están en favor de la prohibición.

(3) No vender ó dar buques armados ó instrumentos de guerra á un beligerante.

Sin embargo, es dudoso cuando está obligado un gobierno neutral á interrumpir su venta pública ordinaria de artículos anticuados meramente porque los agentes beligerantes pueden comprarlos.

(4) No prestar dinero á un beligerante.

No necesita, empero, impedir á sus súbditos que lo hagan, ni prohibirles que trafiquen con un beligerante en armas y municiones de guerra.

(5) Desarmar é internar á todas las tropas beligerantes que penetren en su territorio y poner en libertad á todos los prisioneros de guerra que en él se encuentren.

Hacen excepción á esta regla las tripulaciones de los buques de guerra beligerantes en puertos neutrales y los prisioneros que pueda haber á bordo de tales buques. No pueden inmiscuirse en esto los neutrales; pero, si los prisioneros escapan á tierra, las autoridades locales ni deben entregarlos ni permitir á la fuerza beligerante que los vuelva á capturar.

(6) No permitir á los beligerantes ó á sus propios súbditos que dentro de su territorio organicen expediciones de guerra ó aumenten la fuerza armada de cualquier buque ó expedición beligerante.

Pero puede permitirse á los cruceros beligerantes, bajo condiciones razonables impuestas por el neutral, que tomen carbón y provisiones y sufran refacciones, en puertos neutrales.

(7) No permitir á sus súbditos que acepten de un beligerante cartas de marca ó que dentro de su territorio se enrolen al servicio beligerante ó que abandonen el territorio en número considerable con objeto de enrolarse.

- (8) Dar reparación á todo beligerante que pueda haber sido seria y específicamente injuriado por falta de cumplimiento por su parte á sus deberes neutrales.

El estado neutral está obligado á ejercitar todos los cuidados y diligencias razonables para cumplir los deberes que le están impuestos. Pero si fallan las precauciones adecuadas no puede hacérsele responsable.

En todos los casos de quebrantamiento de la neutralidad, tanto en las circunstancias de una captura como en el armamento del buque apresador, el neutral debe restituir las presas tomadas cuando son encontradas dentro de su jurisdicción y han sido apresadas en el viaje conexo con aquel en que se verificó la violación de la neutralidad. Sin embargo, hay alguna duda en cuanto al límite del derecho del neutral para juzgar tales casos.

C. PUNTO DUDOSO.

En estos momentos hay mucha incertidumbre con respecto á las obligaciones de los estados neutrales en el caso de buques construídos y provistos dentro de su territorio para el servicio de un beligerante. Hasta mediados del siglo XIX, la idea inglesa parece haber sido la de que el gobierno neutral no estaba obligado á interrumpir tal proceder, salvo que el buque estuviera listo para comenzar las hostilidades en el momento en que abandonara las aguas neutrales. Pero los acontecimientos conexos con el escape del *Alabama* y sus cruceros gemelos durante la gran guerra civil norteamericana, demostraron lo insostenible de esa opinión. Hasta ahora no ha sido adoptada ninguna regla satisfactoria. Exigen atención dos puntos de vista.

- (1) El principio norteamericano, de que debe prevalecer la intención—siendo inocente el *animus vendendi*, culpable el *animus belligerendi*.

Esta regla ha conducido en la práctica á discusiones interminables. Hay gran dificultad para distinguir entre lo que ella permite y lo que prohíbe.

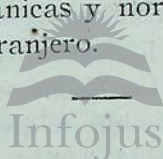
- (2) La opinión de Hall de que debe atenderse al carácter del buque—debiendo ser detenidos “los buques construídos exclusivamente para la guerra”, mientras que debe permitirse la partida sin ser molestados á “los buques construídos para fines comerciales”.

Esta regla tiene la ventaja de la claridad; pero indudablemente permitiría la partida de muchos buques que pudieran ser convertidos en formidables máquinas de guerra.

Las tres reglas del tratado de Washington de 1871, debido á su inútil fraseología, han levantado más dificultades que las que han resuelto; y el laudo de los árbitros de Ginebra no hizo más que someter la disputa al tribunal. La extensión inmensa y sin precedentes asignada por aquel á los deberes neutrales no puede incorporarse todavía al derecho internacional.

D—LEYES SOBRE ALISTAMIENTOS PARA EL EXTRANJERO.

Estos son estatutos comunes hechos por los estados para la protección de su neutralidad. Si alguna de sus disposiciones va más allá de las exigencias del derecho internacional, los beligerantes no pueden pedir que tales disposiciones se cumplan á su favor. Por otra parte, si los gobiernos neutrales no están armados por sus propias leyes con poder suficiente para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones neutrales, la alegación de tal falta de poder no es una respuesta válida á la demanda del beligerante. La medida de los derechos obligaciones de un neutral es el derecho internacional y nó el derecho común. Esta aseveración está abundantemente demostrada por la historia de las leyes británicas y norteamericanas sobre alistamientos para el extranjero.



CAPITULO III

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales — Comercio ordinario

A—PRINCIPIOS REGULADORES DE LAS PRESAS MARITIMAS.

En tierra las mercancías neutrales en territorio beligerante están sujetas á las reglas ordinarias de la guerra. En el mar los intereses de los beligerantes y neutrales están tan ligados en las cuestiones de comercio que es difícil separarlos y atacar á un enemigo sin injuriar á un amigo. Dos principios han encontrado aceptación como tentativas para llegar á un compromiso practicable. Estos son :

- (1) Que la sujeción á captura de la mercancía debe determinarse por el carácter del propietario.
- (2) Que la sujeción á captura de la mercancía debe determinarse por el carácter del vehículo que la transporta.

El primero conduce á la regla práctica según la cual *la mercancía enemiga puede ser apresada aún en buques neutrales y la mercancía neutral está libre de confiscación aún en el buque enemigo*. Esta regla apareció en el *Consulado del Mar* y llegó á formar parte del derecho común de las naciones. Se guió por ella Inglaterra hasta 1856 en todos los casos excepto en aquellos en que estaba sometida á otras reglas por tratados. El segundo principio dió nacimiento á las dobles reglas, *buque libre, mercancía libre y buque enemigo, mercancía enemiga*. Los holandeses fueron los grandes campeones de estas reglas durante el período en que la Holanda fué la principal potencia transportadora; pero para gozar de sus beneficios tuvo que incluirlos en sus tratados.

La combinación de los dos principios ha producido dos reglas más que son los polos opuestos de la severidad con los neutrales, debido á que se han reunido las partes de severidad y lenidad de los resultados de esos

principios. La primera fué la regla francesa, *mercancías neutrales en buques enemigos y mercancías enemigas en buques neutrales, están sujetas á captura*. De 1681 á 1744 se reunió esta con la regla más severa aún, *buques neutrales cargados con mercancía enemiga están sujetos á captura*. La segunda es la regla de la declaración de París de 1856, *mercancía enemiga en buque neutral y mercancía neutral en buque enemigo no están sujetas á captura*. Esta última es la vieja regla, *buque libre, mercancía libre*, sin el corolario *buque enemigo, mercancía enemiga*. Se hicieron tentativas para incluirla en el derecho internacional por Prusia en la controversia del empréstito, de Silesia y por las neutralidades armadas de 1780 y 1800; pero triunfó la oposición de la Gran Bretaña que no admitió la regla hasta después de la guerra de Crimea. Desde entonces la regla ha sido aceptada por casi todas las potencias civilizadas y parece que debe ser incorporada al derecho internacional desde que en la declaración de París se establece en el artículo segundo que *el pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, con excepción del contrabando de guerra* y en el artículo tercero que *la mercancía neutral, con excepción del contrabando de guerra, no está sujeta á captura bajo el pabellón enemigo*.

B—REGLAS DE CAPTURA VIGENTES CONTRA LOS NEUTRALES.

Las reglas de apresamiento que afectan actualmente al tráfico ordinario de los neutrales, es decir, al tráfico que no tiene conexión con el bloqueo, el contrabando, ó el servicio no neutral, puede considerarse que se refieren á

- (1) Buques y mercancías sin protección especial del soberano neutral.

A ese respecto podemos establecer que

- (a) Aunque el antiguo derecho común de las naciones permitía el apresamiento de la mercancía enemiga en buques neutrales, la declaración de París ha desterrado de la guerra civilizada esa costumbre.

(b) Aunque un comerciante neutral tiene derecho de embarcar sus mercancías á bordo de un buque mercante nó armado, que pertenezca á un beligerante, es dudoso que pueda hacerlo á bordo de un buque mercante armado de un beligerante sin hacerlas susceptibles de ser apresadas, y mucho menos á bordo de un buque beligerante de guerra.

(c) La resistencia á la visita beligerante por parte de un buque neutral hace confiscable tanto al buque como á la carga.

(2) Buques y mercancías protegidas principalmente por un convoy.

Desde mediados del siglo XVII progresivamente pretendieron los estados neutrales que sus buques mercantes estuvieran exentos de la visita beligerante, si navegaban protegidos por un convoy ó escoltados por sus buques de guerra. La segunda neutralidad armada afirmó que esa exención era una regla de derecho internacional. Los estados y escritores continentales generalmente adoptan ese parecer. Pero Inglaterra se ha opuesto siempre y la han apoyado los grandes juristas de los Estados Unidos. Parece evidente que

(a) El derecho de visita no puede ser destruido por la aceptación de un convoy.

(b) La resistencia por parte de los buques convoyantes somete á apresamiento y condena á todos los buques convoyados.

Las autoridades británicas sostienen que se requiere un tratado especial para obtener la exención de la visita de los buques neutrales convoyados por los cruceros de su propio país. Los buques neutrales bajo convoy beligerante indudablemente son buena presa.

CAPITULO IV.

Derechos y obligaciones entr los estados beligerantes y los individuos neutrales. Bloqueo.

A. NATURALEZA DEL BLOQUEO

El derecho marítimo dá á los beligerantes el derecho de prohibir la entrada ó salida de los puertos de su enemigo por el estacionamiento de una escuadra de buques en posición tal que puedan interceptar á los buques que intentan arribar á esos puertos ó zarpar de ellos. Esto se denomina el establecimiento del bloqueo y como interrumpe el tráfico neutral, constituye una parte importante del derecho de la neutralidad. Los beligerantes han procurado á veces obtener todas las ventajas de un bloqueo por la mera publicación de una proclama que declarara que la costa del enemigo ó una parte de ella ó solo ciertos puertos estaban bloqueados, y también apoyando tal proclama con una fuerza insuficiente. Pero tales tentativas son ilegales. Toda duda á este respecto, si alguna existía, fué destruida por el artículo cuarto de la declaración de París, que prohíbe los que se llamaban bloqueos en el papel, en estos términos: *los bloqueos para que sean obligatorios deben ser efectivos, vale decir, mantenidos por una fuerza suficiente para evitar realmente el acceso á la costa del enemigo.*

Algunos de los estadistas responsables de esa declaración han explicado esto diciendo que significa que la fuerza debe ser suficiente para hacer difícil y peligrosa la entrada ó la salida.

B. ESPECIES DE BLOQUEO.

Los bloqueos pueden ser clasificados en dos especies. Pueden distinguirse por las diferencias en los objetivos que se propone su establecimiento ó por las diferencias en la naturaleza de los medios adoptados para hacerlos conocer. Las consideraremos separadamente.

(1). Clasificación por la diferencia de objetivo.

Esta se subdivide en

- (a). Bloqueos militares ó estratégicos, establecidos con el fin de ultimar la rendición de una plaza bloqueada.
- (b). Bloqueos comerciales, que tienen simplemente por objeto el debilitamiento de los recursos del enemigo por la interrupción de su tráfico externo. Tales bloqueos han sido denunciados como interferencias incompatibles con el comercio neutral; pero no puede haber duda sobre su legalidad por la mucha utilidad que pueden prestar, excepto en los casos raros en que los estados sometidos á esa medida solo tienen pequeñas fronteras ó no tienen ninguna á través de la cual puedan transportarse mercancías con facilidad y seguridad.

(2). Clasificación por diferencia de notificación.

Esta se subdivide en

- (a). Bloqueos *de facto* solamente—es decir, bloqueos cuya existencia no ha sido notificada diplomáticamente á los gobiernos neutrales. A menos que se hayan hecho notorios por una continuada duración, los capitanes de buques neutrales que se aproximen á los puertos bloqueados tienen derecho á ser prevenidos en el lugar mismo.
- (b). Bloqueos *de facto* acompañados de notificación, es decir, bloqueos cuya existencia ha sido notificada diplomáticamente por el estado beligerante á los gobiernos neutrales. En tales casos las autoridades británicas sostienen que la notificación á los gobiernos neutrales equivale á la notificación á los capitanes de buques neutrales y que estos últimos no tienen derecho á ser prevenidos á menos que puedan probar su ignorancia actual y sin culpa del bloqueo.

En la ley inglesa de presas se establecen grandes diferen-

cias en los casos de violación de bloqueo según que haya ó nó habido notificación diplomática. Si la hubo, el acto de zarpar con destino á un puerto bloqueado constituye la ofensa y el buque puede ser apresado desde el momento en que abandona las aguas neutrales; por tanto, si no hubo notificación la ofensa no se comete hasta que se pretenda la entrada después de la prevención debida. Por otra parte un bloqueo notificado no se reputa terminado por la ausencia temporaria de los buques bloqueadores para dar caza á un enemigo ó huir de un mal tiempo, aunque se considera terminado si los bloqueadores son destruidos ó ahuyentados, pero un bloqueo sin notificación cesa en derecho tan pronto como cesa de hecho. Sin embargo, debe recordarse que la notoriedad tiene el mismo efecto que la notificación. Un grupo de estados sigue la práctica británica; pero Francia está á la cabeza de otro grupo que mira á la notificación como un simple acto de cortesía diplomática desprovisto de consecuencias legales y dá aviso siempre á los capitanes de buques neutrales á la primera aproximación del buque. Ambos grupos concuerdan en permitir á los buques de guerra neutrales, á los paquetes neutrales, y á los buques mercantes neutrales con avería, la entrada y salida de los puertos bloqueados, con tal de que no conduzcan mercancías ó informaciones prohibidas.

C. VIOLACIÓN DE BLOQUEO.

Para que se verifique la violación de un bloqueo son necesarias tres cosas:

- (1). La existencia de un bloqueo efectivo:
- (2). El conocimiento de su existencia por parte del capitán que se supone ha efectuado la violación.

De acuerdo con la práctica británica este conocimiento puede ser directo ó presunto; de acuerdo con la práctica francesa debe ser directo.

- (3). Algún acto de violación.

Esto tiene lugar cuando un buque intenta la entrada ó cuando un buque, según la regla británica, zarpa con destino

á un puerto cuyo bloqueo se ha notificado ó es notorio. También tiene lugar cuando se intenta la salida con un cargamento recibido después del comienzo del bloqueo ó después de la expiración de los días de gracia concedidos por los bloqueadores.

La doctrina del viage continuo se aplica á los casos de violación ó tentativa de violación de bloqueo. Según ella, cuando un viage tiene un destino prohibido la interposición de una ó más escalas inocentes entre el puerto de partida y el de llegada no libera al buque de la captura hasta que arriba al puerto prohibido. Su navegación se considera como un largo viaje tachado desde el principio por la ilegalidad del destino final. La ofensa comienza desde el momento en que el buque abandona las aguas neutrales con la intención de violar el bloqueo y no termina hasta que no regresa otra vez á las aguas neutrales. Pero si en cualquier momento durante el viaje cesa de existir el bloqueo desde ese momento cesa para el buque la sujeción á captura como violador de bloqueos.

D. PENA PARA LA VIOLACIÓN DE BLOQUEO.

Generalmente hablando la pena por violación de bloqueo es la confiscación del buque y del cargamento; pero solo el buque es condenado si perteneciendo él y la carga á diferentes personas ignorara el propietario del cargamento que el puerto de destino estaba bloqueado.

CAPITULO V

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales. — Tráfico de contrabando

A. NATURALEZA DE LA OFENSA DE TRANSPORTAR CONTRABANDO.

El derecho marítimo ha dado siempre á los beligerantes el derecho de interceptar las mercancías destinadas al

enemigo que le son directa y esencialmente necesarias para proseguir las hostilidades. El ejercicio de este derecho envuelve la captura de las mercancías neutrales cuando constituyen lo que se denomina contrabando de guerra. Los comerciantes neutrales no tienen obligación de abstenerse del tráfico de contrabando; pero si lo envían á un beligerante, corren el riesgo del apresamiento por el otro beligerante. Su propio gobierno no les debe protección y por otra parte, no está obligado á evitar su tráfico. Debe notarse que.:

- (1) La ofensa no consiste en la venta de la mercancía sinó en su transporte.
- (2) Para que exista la ofensa es esencial un destino beligerante; pero no es necesario que este sea inmediato. Si se interpone por mero pretexto un destino neutral y el término final y real del viaje es beligerante, la mercancía es condenada de acuerdo con la doctrina del viaje continuo.
- (3) La ofensa existe desde el momento en que el buque que conduce el contrabando sale del puerto para un destino beligerante, y termina en el momento en que arriba á su destino y entrega la mercancía.

B. REGLAS SOBRE EL CARÁCTER DE CONTRABANDO.

Para decidir lo que es contrabando nos apoyaremos en la antigua división, formulada por Grocio, de todas las mercancías en tres clases: la primera está constituida por aquellas que primaria y ordinariamente son útiles para propósitos de guerra: la segunda está formada por aquellas que primaria y ordinariamente son útiles para propósitos pacíficos; y la tercera incluye aquellas que indiferentemente son útiles para propósitos de guerra y de paz: son las que técnicamente se denominan artículos *ancipitis usus*. Está universalmente admitido que la primera clase es siempre contrabando y que la segunda nunca lo es. Hay gran divergencia de opinión sobre el carácter de contrabando de la tercera clase y también con respecto á la

cuestión de si ciertos artículos, tales como los materiales de construcción naval, deben incluirse en la primera clase, y ciertos otros artículos, como el carbón, deben serlo en la tercera. La práctica de los estados en esta materia se ha basado más que en los principios en el propio interés. Podemos distinguir dos corrientes de opinión, la británica y la continental. Las consideraremos separadamente.

(1). La opinión británica puede enunciarse brevemente en estas proposiciones:

(a). Algunas mercancías deben ser condenadas á su mera inspección, por ser de contrabando por su naturaleza, si se las encuentra en viaje con destino al enemigo. Entre estas están incluidas no solamente las armas y municiones de guerra sinó también los artículos navales y los caballos.

(b). Con respecto á muchos artículos *incipitis usus*, no es suficiente la mera inspección y deben examinarse más detenidamente, siendo ó nó condenadas de acuerdo con las circunstancias reveladas por la averiguación. A esto se llama la doctrina del contrabando ocasional; y las cortes al aplicarla consideraran principalmente el destino de la mercancía y también circunstancias tales como el lugar de su origen, las necesidades especiales del enemigo y si la mercancía es materia prima ó artículo manufacturado.

(2). La opinión continental puede enunciarse brevemente en estas proposiciones:

(a). Son contrabando por su naturaleza solamente las armas, municiones de guerra, buques de guerra, partes de armas y los materiales para la fabricación de pólvora y otros explosivos usados en la guerra.

(b). La doctrina del contrabando ocasional debe restringirse dentro de límites muy estrechos ó desecharse enteramente.

La doctrina británica se apoya más que la otra en la

razón y en la autoridad; pero nuestra lista de los artículos que son contrabando por su naturaleza contiene varios que parecen pertenecer más propiamente á la clase de artículos *ancipitis usus*. No hay esperanza de evitar las constantes controversias, salvo que todos los estados civilizados se pongan de acuerdo periódicamente acerca de una lista de artículos de contrabando que sería obligatoria hasta la siguiente revisión.

C. PENA PARA EL TRANSPORTE DE CONTRABANDO.

Hablando en general la pena para el transporte de contrabando es la confiscación de la mercancía de contrabando; pero también es condenado el buque:

- (1). Si él y la carga de contrabando pertenecen al mismo propietario.
- (2). Si está provisto de documentos falsos ó se descubre algún otro ardid fraudulento.
- (3). Si tiene abordo artículos considerados como contrabando por un tratado vigente entre el país del propietario y el del apresador beligerante.

Las mercancías inocentes encontradas á bordo de un buque cargado con contrabando son condenadas si pertenecen al mismo propietario del contrabando. Para evitar querellas con los neutrales respecto de artículos dudosos ó para usar de indulgencia con ciertas clases de mercaderías se acostumbra á exigir la venta de la mercancía por su justo precio, mitigando así los efectos del derecho estricto de captura. En ocasiones, los beligerantes han sometido á esa medida á mercancías que no eran contrabando; pero tal conducta es contraria al derecho internacional.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y los individuos neutrales. Servicio no neutral.

A. NATURALEZA DEL SERVICIO NO NEUTRAL.

A todo individuo neutral le está prohibido, bajo pena

de confiscación de su buque, hacer ciertos servicios á un beligerante. Los principales actos prohibidos son:

- (1). Trasmitir señales ó mensajes militares ó navales.
- (2). Conducir ciertas clases de personas al servicio de un beligerante, especialmente militares ó marinos; pero pueden conducirse los representantes diplomáticos acreditados por el enemigo ante las potencias neutrales.
- (3). Conducir para un beligerante, ciertas clases de despachos, especialmente militares ó navales; pero pueden conducirse despachos diplomáticos, entre el enemigo y los países neutrales.

Están absolutamente prohibidos todos los otros servicios de naturaleza tal que puedan ser de auxilio directo para las operaciones de guerra.

B. REGLAS SOBRE EL SERVICIO NO NEUTRAL.

Los actos de servicio no neutral no son de la misma índole que la conducción de contrabando, con el cual amenudo son confundidos. No son materias de tráfico ordinario; pero se ejecutan al servicio de un beligerante, aunque temporalmente y de una manera limitada. En muchos casos es difícil trazar la línea divisoria entre los actos inocentes y culpables. Se aplican dos reglas:

- (1). El carácter del contrato. Si el buque está actualmente al servicio de un beligerante y bajo su contralor, se le condena.
- (2). El conocimiento del capitán. Si á sabiendas, ó ignorándolo por no haberlo averiguado suficientemente, ejecuta ciertos actos que prestan un servicio á un beligerante en materias relacionadas con la guerra, su buque por ese hecho queda sujeto á condena y apresamiento, aunque no lo haya colocado por un tiempo bajo el contralor del beligerante por un contrato de préstamo ó arrendamiento.

C. PENA PARA EL SERVICIO NO NEUTRAL.

La distinción entre el servicio no neutral y la conduc-

ción de contrabando está mejor marcada en la naturaleza de la penalidad. En el caso de contrabando siempre es confiscada la mercancía pero raramente lo es el buque. En el caso de servicio no neutral el buque es confiscado invariablemente y también toda parte del cargamento que pertenezca á su propietario. Además su destino es inmaterial, mientras que la ofensa de conducir contrabando no puede existir sin un destino beligerante. En las guerras recientes se ha exceptuado de la visita beligerante á los paquetes de mala y á las balijas, bajo ciertas garantías de que no conducirían comunicaciones perjudiciales. Pero por más que esta inmunidad descansa más en la cortesía que en el derecho estricto, no hay razón para suponer que esa práctica será desechada en conflictos futuros.





SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

APENDICES



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA



Infojus

SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

APÉNDICE 1.

Documentos que llevan los buques mercantes de bandera nacional

Testimonio de la escritura de propiedad del buque.
Licencia de navegación.
Carta de mar ó pasaporte.
Rol de la tripulación.
Lista de los pasajeros.
Certificado de matrícula.
Certificado de arqueo.
Patente de sanidad.
Manifiesto de la carga.
Pólizas de fletamento.
Conocimientos.
Guías ó despachos de aduana.
Patente de seguridad (de máquinas y calderas).
Patente de privilegio de paquete.
Libro de cargamento.
Libro de cuenta y razón.
Diario de navegación.

APÉNDICE 2.

Documentos que llevan los buques mercantes de diversas naciones

ALEMANIA

Schiffs-Certifikat (certificado de nacionalidad).
Flaggen-Attest (íd. provisorio).

Messbrief (certificado de arqueo).
Beilbrief (certificado de construcción).
See-Pass (licencia para navegar).
Journal (diario de navegación).
Musterrolle (rol de equipaje).
Póliza de fletamento.

AUSTRIA

Patente sovrana (real licencia).
Scontrino ministeriale (certificado de registro).
Giornale di navigazione.
Scartafaccio (cuaderno de bitácora).
Ruolo dell' equipaggio.
Manifiesto de la carga y póliza de fletamento.

BELGICA

Lettre de mer.
Rôle d'équipages.
Régistre de certificat de jaugeage.
Diario de navegación.
Manifiesto de la carga.
Los conocimientos.
Acte de propriété.

BRASIL

Carta de registro.
Pase especial (pasaportes).
Rol de equipaje.
Manifiestos.
Póliza de fletamento.

Matrícula.

Patente de navegación.

Pasavante.



Rol de equipaje y nómina de pasajeros.
(En el bao mayor grabado el tonelaje de registro).

DINAMARCA

Registering certifikat (certificado de nacionalidad y registro).

Id. id. (provisorio).

(La inscripción D. E. (Dansk Eiendom) á fuego en la medianía del bao de popa de la escotilla mayor.)

Pasaporte real, en latín, con su traducción, válido solamente por el viaje para el cual se expide, salvo renovación.

Certificado de propiedad.

Id. de construcción.

Id. de arquéo.

Id. de tener el capitán derechos cívicos en alguna ciudad del reino.

Rol de equipaje.

ESPAÑA

Patente de navegación.

Rol de equipaje y lista de pasajeros.

Testimonio de la escritura de propiedad de la nave.

Contrato de fletamento.

Conocimientos, facturas y guías de la carga.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Registro permanente de buques dedicados al tráfico exterior.

Id. temporario.

Registro para buques costaneros.

Id. provisorio.

Licencia permanente ó provisoria para pesca.

Id. para yates.

Contrata.

Rol.

Certificado de propiedad.

Lista de pasajeros.

Manifiestos y pólizas.

Certificados de aduana.

Id. de sanidad.

Diario de navegación.

FRANCIA

Acte de francisation (certificado de nacionalidad).

Id. provisoire.

Congé (licencia para navegar).

Rôle d'équipage.

Acte de propriété du navire.

Connaissements et chartes-parties.

Procès-verbaux de visite.

Acquits de payement ou à caution.

Manifiestos é inventario del buque.

GRAN BRETAÑA

Certificate of registry; ó provisional expedido por un cónsul residente en país extranjero, válido por seis meses á contar de la fecha de su expedición. Un pase expedido antes del registro para que el buque pueda ir de un puerto británico á otro situado en los dominios británicos, vale también como certificado.

Official log book (diario de navegación).

Ship's log book (cuaderno de bitácora).

Shipping articles (contrata).

Muster roll (rol de equipaje).

Manifest of cargo.

Bills of lading (póliza de fletamento).

GRECIA

Certificado de nacionalidad.

Pasaporte.

Inventario.

Certificado de arquéo.

Rol de equipaje.

Descripción de las visitas á que ha sido sujeto el buque.

Diario de navegación.

Certificado de sanidad.

HOLANDA

Zeebrief (licencia para navegar).

Voorloopige Zeebrief (id. provisoria).

Buitengevone Zeebrief (id. extraordinaria).

Bijlbrief (certificado de propiedad).

Meetbrief (certificado de arquéo).

Journal (Diario de navegación).

Monster-rol (Rol de equipaje).

Manifiesto y pólizas.

ITALIA

Atto di nazionalità,

Giornale di navigazione.

Scartafaccio.

Ruolo dell' equipaggio.

Manifiestos y pólizas.

NORUEGA

Nationalitets breviis (certificado de nacionalidad).

Certificado provisorio expedido por un cónsul.

Bülbrev (certificado de construcción).

Maalebrev (id. de arquéo). Los buques comprados en puertos extranjeros no necesitan durante dos años tener bülbrev ni maalebrev.

Mandskabliste (rol de equipaje).

Journale (diario de navegación).

Manifiestos y pólizas.

PORTUGAL

Pasaporte de navegación.
Acta de propiedad del buque.
Rol.
Conocimientos.
Recibos de fletes y despacho.
Un ejemplar del Código de comercio.

RUSIA

Certificado de nacionalidad.
El hecho de ser rusos el capitán y la mitad de la tripulación.
Beilbrief (certificado del constructor).
Pasaporte de aduana.
Diario de navegación.
Rol.

SUECIA

Pasaporte.
Bilbrief (certificado del constructor).
Mätebref (certificado de arqueo).
Fribref (certificado de registro).
Journalen (diario de navegación).
Folkpass ó Sjömansrubla (rol de equipaje).

APÉNDICE 3.

Legislación nacional sobre presas

Art. 67, inc. 22, Const. Nacional. Corresponde al Congreso..... establecer reglamentos para las presas.

Art. 100, Const. Nacional. Corresponde á la Corte Suprema y á los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión..... de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima.

Ley de 14 de Septiembre de 1863. Art. 1º, inc. 7º. Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes..... Todas las causas á que dén lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra.

Nota. El Congreso aún no ha dictado los reglamentos de presas.

Jurisprudencia de la S. C. de J. N. S. II., t. 6, p. 137. En la demanda para la cual la ley no establece un procedimiento especial, debe seguirse el fijado para los juicios ordinarios. Los juicios de presas deben dirigirse contra el apresador ó poseedor, y no puede quedar definida la demanda sinó cuando se deslinda la persona y carácter del demandado.

Cód. de justicia militar. Art. 757. El individuo de la marina militar que ocultare, rompiere ó extraviare la patente, el rol ó los contratos de fletamento de las embarcaciones que se reconozcan, detengan ó apresen, los conocimientos ó pólizas de su carga, cartas ú otros documentos relativos á ellas, á su capitán ó patrón, será castigado, siendo jefe ú oficial, con la pena de suspensión del empleo, y no siéndolo, con recargo de servicio de cuatro meses á un año.

Art. 758. En las mismas penas del artículo anterior incurrirá respectivamente el que, en embarcación detenida ó apresada, y sin estar autorizado ó exigirlo la seguridad del buque, abriere las escotillas, pañoles ó cualquier otro sitio ó mueble cerrado.

APÉNDICE 4.

Artículos adicionales á la Convención de Ginebra para mejorar la condición de los enfermos y heridos

1. Las personas designadas en el art. 2 de la convención (médicos y personal de hospitales), después de la

ocupación del enemigo, pueden continuar llenando sus deberes con los enfermos y heridos, según sus necesidades, en la ambulancia ú hospital en que prestan sus servicios. Cuando soliciten retirarse, el comandante de las tropas de ocupación les fijará el tiempo de la partida, que sólo podrá diferir por breve tiempo en caso de necesidad militar.

2. Las potencias beligerantes harán convenios que aseguren á las personas neutralizadas que caigan en manos del enemigo el goce íntegro de su salario.

3. De acuerdo con las condiciones previstas en los arts. 1 y 4 de la Convención, la denominación "ambulancia" se aplica á los hospitales de campaña y otros establecimientos temporarios que acompañan á las tropas en el campo de batalla para recibir enfermos y heridos.

4. En conformidad con el art. 5 de la Convención y con las reservas contenidas en el protocolo de 1864, se entiende que para las cargas relativas al acuartelamiento de tropas y contribuciones de guerra deberá tomarse en cuenta de una manera equitativa el celo caritativo desplegado por los habitantes.

5. En adición al art. 6 de la Convención exceptuando á los oficiales cuya detención puede ser de importancia para la continuación de hostilidades, y dentro de los límites fijados por el segundo párrafo de aquel artículo, está estipulado que los heridos que caigan en manos del enemigo, deben ser enviados á su país, después de su curación ó antes si es posible, á condición, sin embargo, de no volver á tomar las armas durante la continuación de la guerra.

6. Los botes que á sus propios riesgos y peligros, durante y después de un combate, recojan los náufragos ó heridos, ó que habiéndolos recojido los conduzcan á bordo de un buque neutral ú hospital, gozarán del carácter de neutralidad durante el desempeño de su misión, hasta donde lo permitan las circunstancias del combate y la posición de los buques combatientes.

La apreciación de estas circunstancias queda librada á la humanidad de todo combatiente. Los náufragos y heridos así recojidos y salvados no podrán volver á servir durante la continuación de la guerra.

7. Se declaran neutrales al cuerpo castrense, al de sanidad y al personal de hospitales de cualquier buque apresado; y al abandonar el buque pueden llevar consigo los instrumentos quirúrgicos y demás artículos que sean de su propiedad privada.

8. El personal designado en el artículo precedente deberá continuar desempeñando sus funciones en el buque apresado y prestando su asistencia á los heridos trasladados por el vencedor. Entonces podrán regresar á su país, en conformidad con el segundo parágrafo del primer artículo adicional.

Las estipulaciones del segundo artículo adicional son aplicables al cuerpo de administración.

9. Los buques-hospitales militares quedan sometidos á la ley marcial en todo lo que concierne á sus provisiones; se hacen propiedad del apresador, pero este no podrá distraerlos de su destino especial durante la continuación de la guerra.

10. Todo buque mercante, cualquiera que sea su nacionalidad, que se dedique exclusivamente á la remoción de enfermos y heridos, está protegido por la neutralidad; pero el nuevo hecho, anotado en los libros del buque, de que este ha sido visitado por un crucero enemigo incapacita á los enfermos y heridos para servir durante la continuación de la guerra. Eventualmente el crucero tiene derecho para colocar á bordo un oficial que acompañe al convoy y verifique así la buena fe de la operación.

Si el buque mercante lleva también cargamento, le protegerá igualmente su neutralidad, siempre que dicho cargamento no sea de una naturaleza tal que pueda ser confiscado por los beligerantes.

11. Los marineros y soldados enfermos ó heridos, cualquiera que sea su nacionalidad, serán protegidos y cuidados por sus apresadores durante su embarque.

Su regreso á su propio país está sujeto á las prescripciones del art. 6 de la convención y del art. adicional 5.

12. El paellón distintivo que debe usarse con la bandera nacional para indicar cualquier buque ó embarcación que reclame los beneficios de la neutralidad, en virtud de los principios de esta Convención, es una bandera blanca con cruz roja. Los beligerantes pueden ejercitar á este respecto cualquier medio de verificación que estimen necesario.

Los buques-hospitales militares deberán distinguirse pintando sus costados exteriores de blanco con una faja verde.

13. Los buques-hospitales que son equipados á expensas de sociedades de beneficencia, reconocidos por los gobiernos signatarios de esta Convención, que tengan una comisión emanada del soberano, quien debe haberles autorizado expresamente para el desempeño de su misión, que tengan un certificado de la autoridad naval correspondiente de que han estado bajo su contralor durante su armamento y en su última salida, y que sean apropiados exclusivamente para el desempeño de su misión, se considerarán como neutrales lo mismo que todo su personal. Deberán ser reconocidos y protegidos por los beligerantes.

Deberán darse á conocer izando, junto con su paellón nacional, la bandera blanca con cruz roja. El signo distintivo de su personal mientras cumpla con sus deberes, será un brazal del mismo color. Estos buques-hospitales exteriormente deberán estar pintados de blanco con faja roja.

Estos buques deberán prestar ayuda y asistencia á los heridos y náufragos beligerantes, sin distinción de nacionalidad.

Deberán cuidar de no molestar en ninguna forma, los

movimientos de los combatientes. Durante la batalla y después de ella, deberán cumplir con su deber á su propio riesgo y peligro.

Los beligerantes tendrán el derecho de contralorearlos y visitarlos. Serán libres de rehusar su asistencia, ordenarles que se alejen, y detenerlos, si las exigencias del caso requieren tal medida.

Los heridos y náufragos recojidos por estos buques no pueden ser reclamados por los combatientes y se les requerirá que no presten servicios durante la continuación de la guerra.

14. En las guerras navales, cualquier fuerte presunción de que un beligerante saca ventajas de los beneficios de la neutralidad con otra mira que el interés de los heridos y enfermos, dá al otro beligerante, hasta obtener prueba contraria, el derecho de suspender la convención con respecto á tal beligerante.

Si esta presunción se convirtiera en certeza, se notificará á tal beligerante que la convención está suspendida con respecto á él durante toda la continuación de la guerra.

15. De la presente acta se sacará copia en original simple para ser depositada en los archivos de la Confederación Suiza.

La convención se firmó en Ginebra, Suiza, el 2 de Agosto de 1864, por los representantes de las siguientes potencias: Confederación Suiza, Baden, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hesse, Holanda, Italia, Portugal, Prusia y Wurttemberg. Las ratificaciones de las partes contratantes fueron canjeadas en Ginebra el 22 de Junio de 1865. De acuerdo con la invitación contenida en el art. 9 de la Convención, se adhirieron á ella las siguientes potencias: Suecia, 13 Diciembre 1864; Grecia; 5 — 17 Enero 1865; Gran Bretaña, 18 Febrero 1865, Mecklemburgo-Schwerin, 9 Marzo 1865; Turquía, 5 Julio

1865; Wurtemberg, 2 Junio 1866; Hesse, 22 Junio 1866; Baviera, 30 Junio 1866; Austria, 21 Julio 1866; Rusia, 10—22 Mayo 1867; Persia, 5 Diciembre 1874; Rumania, 18—30 Noviembre 1874; San Salvador, 30 Diciembre 1874; Montenegro, 17—29 Noviembre 1875; Servia, 24 Marzo 1876; Bolivia, Octubre 1879; Chile, 15 Noviembre 1879; República Argentina, 25 Noviembre 1879; Perú, 22 Abril 1880; Estados Unidos de Norte America, 1º Marzo 1882.

Los artículos adicionales fueron aceptados y firmados en Ginebra el 20 de Octubre de 1868 por los representantes debidamente acreditados de las siguientes potencias: Austria, Baden, Baviera, Bélgica, Confederación Alemana del Norte, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Turquía y Wurtemberg.

En el texto inglés publicado, de donde han sido tomados los artículos adicionales de esta versión, se encuentra después del art. 9 el párrafo que damos á continuación, el cual no está contenido en el texto francés original adoptado por la conferencia de Ginebra el 20 de Octubre de 1866:

“Los buques que en tiempo de paz no están equipados para combatir y cuyo destino oficialmente declarado por el gobierno sea el de servir como hospitales flotantes, gozarán de completa neutralidad durante la guerra tanto respecto á sus provisiones como á su personal, siempre que su equipo sea exclusivamente apropiado al servicio especial en que se les emplea.”

En las instrucciones enviadas por los Estados Unidos á su Ministro en Berna, el 2 de Enero de 1863, se reservó el derecho de omitir este párrafo del texto inglés e introducir cualesquiera otras correcciones necesarias, si en cualquier tiempo posterior los artículos adicionales debieran ser completados por el canje de ratificaciones entre las varias potencias signatarias y adherentes. El

Presidente de los Estados Unidos en su proclama anunciando su adhesión á la Convención de Ginebra, se reserva la promulgación de los artículos adicionales hasta que se haya efectuado el canje de ratificaciones entre los varios estados contratantes y los artículos adicionales mencionados hayan adquirido plena fuerza y efecto como tratado internacional.

APÉNDICE 5

Decreto de 12 de Junio de 1896 estableciendo reglas concernientes á la entrada y estadía, en tiempo de guerra, de los buques franceses y extranjeros en puertos y fondeaderos franceses

● I. En tiempo de guerra, desde la salida hasta la puesta del sol, ningún buque mercante francés ni extranjero, podrá aproximarse á menos de 3 millas de las costas francesas (Francia y posesiones francesas), si no ha obtenido autorización para ello. Desde la puesta hasta la salida del sol, la prohibición de aproximarse á menos de 3 millas es absoluta.

Desde la salida hasta la puesta del sol, todos los buques que estén á una distancia tal de tierra que pueda desde ella distinguirse su bandera, deberán mantener izado su pabellón nacional. Si desean entrar á las regiones prohibidas, deben así significarlo izando la señal de piloto; pero deberán permanecer por fuera del límite de las 3 millas hasta que hayan recibido al práctico ó hasta que les señale un semáforo que su pedido ha sido concedido.

Todos los buques deberán obedecer inmediatamente las órdenes que les sean señaladas por un semáforo ó que reciban de un buque de guerra, tanto verbalmente como por señales ó por el Código Internacional.

II. En tiempo de guerra, en caso de que un buque afectado por este decreto omita el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, el fuerte ó buque de guerra más próximo se lo prevendrá disparando un cañonazo con pólvora sola. Si esta primera advertencia no tuviera efecto, se le disparará dos minutos después un proyectil fuera de puntería, y finalmente, si después de otro intervalo de dos minutos el buque no se detiene ó no se aleja, se abrirá el fuego efectivo sobre él.

En caso de urgencia puede omitirse el tiro preliminar con pólvora sola. Todo buque que viola la orden relativa á la interdicción de los distritos prohibidos se expone á ser destruido.

III. En tiempo de guerra ninguna embarcación menor, fuera de las pertenecientes á los buques de guerra franceses, puede transitar en las radas y puertos fortificados sin autorización especial y sin haber recibido de las autoridades marítimas los medios de darse á conocer.

Tanto de dia como de noche, el tránsito de pequeños vapores, fuera de los que pertenezcan á los buques de guerra franceses, estará absolutamente prohibido. Los botes de remos, sin embargo, podrán transitar desde la salida hasta la puesta del sol, siempre que hayan recibido un permiso de las autoridades del puerto, pero con la reserva de que no deben pasar cerca de los buques de guerra, si así se hubiere ordenado, y de no comunicar con ellos en ningún caso sin haber antes solicitado y obtenido autorización para hacerlo.

El tránsito de las embarcaciones menores autorizadas, está sujeto en todas partes á las instrucciones locales impartidas por los prefectos, especialmente en lo que respecta á la prohibición de entrar á ciertas zonas de las radas ó de comunicar con otros lugares que los expresamente designados.

En los puertos comerciales se tomarán por la autoridad

superior medidas especiales de tal naturaleza que protejan los intereses del comercio, aunque imponiendo al tráfico de embarcaciones menores las restricciones que se juzgue necesarias.

IV. En tiempo de guerra, los buques autorizados para entrar á las radas y fondeaderos franceses tomarán el fondeadero que les asignen las autoridades locales y se conformarán á las instrucciones de toda clase impartidas por dichas autoridades.

La duración de su estadía está subordinada á las necesidades del comando militar, y cuando fuere necesario colocar á esas localidades en pié de guerra, si las circunstancias lo requieren, la autoridad superior puede hacerles salir al largo ó hacerles trasladar á otro punto.

Podrá siempre concederse un plazo á los buques cuya situación haga imposible el cumplimiento inmediato de las órdenes recibidas. Ningún buque se pondrá á pique, sea para cambiar de fondeadero ó para zarpar del puerto, antes de haber sido autorizado á hacerlo por las autoridades locales.

V. Las medidas prescriptas por los arts. III y IV pueden ponerse en vigencia durante el período de movilización.

NOTA. En Marzo de 1902, un nuevo decreto ha dispuesto que la prohibición absoluta de aproximarse á menos de 3 millas de la costa entre la puesta y la salida del sol no rige para los buques cuyas reducidas dimensiones y gran velocidad les permiten franquear impunemente la zona de acción de las baterías durante el intervalo de dos minutos que separa el último tiro de aviso del momento en que las piezas pueden romper efectivamente el fuego.

El nuevo decreto dispone que, de noche á menos de una milla, puede suprimirse el disparo preliminar de cañon.

Todo barco que fuerce la consigna de interdicción de las zonas prohibidas se expone á ser destruido; y si durante

la noche se aproxima á menos de una milla de la costa, expónese á ver romper inmediatamente el fuego contra él sin aviso prévio.

El nuevo decreto prevé la posibilidad de autorizar á las embarcaciones de vapor á circular durante el día en las mismas condiciones que las embarcaciones á remo, es decir, con un permiso especial y después de haber recibido de las autoridades marítimas el medio de hacerse reconocer.

APÉNDICE 6

Entrada de los buques neutrales de guerra á los puertos bloqueados

Este punto tiene importancia creciente. Sería una seria desventaja, si nó una positiva injuria, para un beligerante bloqueador tener un puerto bloqueado sujeto á las visitas frecuentes ó simpáticas de un buque neutral de guerra. La tendencia es la de favorecer una limitación de tales visitas cuyo uso solamente puede permitirse por cortesía. El buque de guerra que desée entrar á un puerto bloqueado, al solicitar la autorización, en caso necesario, deberá establecer su identidad ante los buques bloqueadores. Damos á continuación algunas opiniones de autoridades en la materia.

El capitán Ortolán, de la armada francesa, en su *Diplomatie de la Mer*, dice:

“En derecho, el acceso y la salida de ese lugar están prohibidos tanto á los buques de guerra como á los mercantes.”

“Muy ciertamente, dice Wheaton, el derecho de visita no puede ser ejercitado en un buque de guerra, pero no es menos cierto que tal buque no tiene derecho de entrar á un puerto bloqueado ni salir de él, á menos que se encontrare allí en la época en que comenzó el bloqueo. Sin embargo, la

potencia que mantiene el bloqueo amenudo exceptúa de la regla á los buques de guerra en razón del carácter de que están revestidos y de los privilegios de que gozan, y esta concesión que exigen los miramientos debidos á los gobiernos neutrales debe, como lo indica también Wheaton, dispensarse siempre que pueda conciliarse con el objeto de la guerra. Los Estados Unidos, desde el comienzo de su lucha actual contra los estados confederados, permiten la entrada y salida libres de los puertos que bloquean á los buques de guerra de los neutrales.”

“En el hecho, siendo el objeto principal de un bloqueo la interdicción de todo comercio por mar con el lugar bloqueado, el medio de llegar á ese resultado se obtiene íntegramente si la prohibición de entrar y salir no es aplicada sinó á los buques mercantes.”

Perels, profesor en la Academia Naval Imperial de Kiel, dice:

“La interdicción de la plaza bloqueada debe ser respetada por los buques de guerra y mercantes neutrales; sin embargo, no es raro que se exceptúe á los buques de guerra neutrales de la prohibición de entrar. Los miramientos á que tienen derecho las potencias neutrales justifican tanto más esta concesión cuanto que ella no hiere al fin esencial del bloqueo, que es la suspensión de las relaciones comerciales por mar. Así fué como durante el bloqueo por la flota de la Unión de las costas de los Estados Confederados se permitió el libre acceso á todos los buques de guerra neutrales. El gobierno francés, en 1838, había adoptado una regla contraria al bloquear con su flota las costas de la República Argentina. El Departamento de Negocios Extranjeros dictó el siguiente decreto: debe tambien invitarse á que se alejen á los buques de guerra neutrales que se presenten delante de un puerto bloqueado; si persisten, el comandante del bloqueo tiene derecho de oponerse por la fuerza á su entrada, y la responsabilidad de todo lo que pueda seguirse pesará sobre los violadores del bloqueo.”

El capitán Testa de la Armada Portuguesa, profesor de la Escuela Naval de Lisboa, dice:

“De acuerdo con los principios admitidos, el bloqueo establece el derecho de prohibir en los puntos bloqueados la entrada de los buques de guerra y de los buques de comercio. Sin embargo, las potencias que establecen el bloqueo, autorizan amenudo la entrada y salida libres de los buques de guerra neutrales por considerar que no es presumible, por su caracter, que vayan á ayudar al beligerante bloqueado; y por otra parte, siendo el fin principal del bloqueo la interdicción del comercio por mar, no le para perjuicio á ese propósito la entrada ó salida de los buques de guerra imparciales y no comerciantes.”

Calvo dice:

“En derecho, el acceso y salida de un puerto bloqueado están prohibidos tanto á los buques de guerra como á los buques de comercio.

“Un buque de guerra, dice Wheaton, no tiene el derecho de entrar en un puerto bloqueado ni de salir de él, á menos que estuviera allí en la época en que ha comenzado el bloqueo.

“Sin embargo, los beligerantes, en consideración tanto de los miramientos que deben á los otros gobiernos como al caracter de que están revestidos los buques de guerra y á los privilegios de que gozan, dejan amenudo entrar y salir libremente de los puertos bloqueados á los buques de guerra neutrales, siempre que esa concesión pueda conciliarse con el objeto de la guerra.”

J. H. Ferguson ex-oficial de la Armada Real Holandesa, dice:

“Durante la continuación del estado de bloqueo no se permite á ningún buque entrar ó salir de la plaza bloqueada sin licencia ó consentimiento especiales de la autoridad bloqueadora. Los buques de guerra de las potencias neutrales están sometidos á la misma obligación con respecto

al bloqueo. Cuando un buque de guerra de un estado neutral obtiene autorización para comunicar con una plaza bloqueada, su comandante está obligado á observar una neutralidad estricta y cumplir con las condiciones bajo las cuales ha sido concedido tal permiso para cruzar las líneas del beligerante bloqueador. La imparcialidad, que debe ser el carácter prevalente de un bloqueo efectivo prohíbe que, exceptuando á los buques de guerra, se conceda permiso para entrar á la plaza bloqueada salvo en casos extremos de positiva necesidad. A los agentes diplomáticos y consulares de un estado neutral se les permite todas las comunicaciones necesarias para llenar sus deberes oficiales."

Hall dice:

"El derecho poseído por un beligerante para excluir de una plaza bloqueada á los buques neutrales de guerra es á veces abandonado en la práctica por mera cortesía internacional; y por una razón análoga se le permite al Ministro de un estado neutral, residente en el país de los puertos bloqueados, que despache un buque exclusivamente empleado en repatriar á los marineros necesitados de su propia nación."

Walker, dice:

"El rigor de un bloqueo puede relajarse en dos casos peculiares. Después de la expiración del período señalado para la salida de los buques neutrales mercantes, y en cualquier tiempo durante la continuación del bloqueo, se permite comunmente por cortesía á los buques de guerra que arbolan pabellón de una potencia neutral que comuniquen con los puertos bloqueados y que mantengan la correspondencia pública de su propio gobierno ó de otros gobiernos neutrales con sus respectivos agentes diplomáticos ó consulares. Sin embargo, importa que los que obtengan tal autorización, no conviertan ese privilegio en pretexto para comunicaciones ilegítimas. En 1863, habiendo colocado el consul británico en Móbila á bordo del buque de S. M. B.

Vesuvius, para conducirla á la Habana, una fuerte suma de dinero perteneciente al Estado de Alabama y destinada á pagar en Londres el interés debido por aquel estado á los tenedores ingleses de títulos del empréstito, el ofensor Mr. Magee, fué prontamente exonerado del servicio británico, y Lord Lyons recibió instrucciones para dar satisfacción al gobierno de los Estados Unidos por la conducta de un empleado civil británico. que estaba “enteramente en disconformidad con los deberes de un agente de una potencia neutral.” En cualquier caso, la comunicación de los buques neutrales de guerra con una costa bloqueada es solo consensual y no de estricto derecho, como claramente lo intimó á los oficiales de su flota el Vicealmirante Milne en 1863.”

APENDICE 7

I

El derecho marítimo en la guerra hispano-americana por J. Bassett Moore

SITUACIÓN ANTERIOR Á LA GUERRA

Según el derecho internacional los buques enemigos constituyen una presa legal, pero sus cargamentos pueden ó no estar sujetos á confiscación. Además los barcos neutrales no constituyen por sí mismos buena presa, pero pueden llegar á serlo como resultado de una conducta no neutral, como la tentativa de forzar un bloqueo; y sus cargamentos, lo mismo que los de buques enemigos, pueden ó no estar sujetos á confiscación, según las circunstancias. En cuanto al cargamento, se han seguido las siguientes reglas:

- (1) La mercancía enemiga es apresable tanto en barco neutral como en buque enemigo.
- (2) La mercancía enemiga, excepto el contrabando de guerra, no es apresable á bordo de un buque neutral. Esta es la regla: “buque libre, mercancía libre”.
- (3) La mercancía participa del carácter del buque: es libre en un barco neutral y apresable en un buque enemigo.

Esta es la regla: “buque libre, mercancía libre; buque enemigo, mercancía enemiga”.

Como la última regla solo es obligatoria en caso de haberse estipulado por tratados, no nos ocuparemos de ella por el momento. La discusión ha versado sobre la primera y segunda reglas. En cierta época, el derecho común de la Europa estaba constituido por la primera, según la cual el carácter beligerante ó neutral de la mercancía se determina por el de su propietario, sin atender al hecho de ser el buque neutral ó enemigo. Prescripta por el *Consolato del Mare*, fué aceptada universalmente. Pero á mediados del siglo décimo-séptimo se introdujo una nueva regla, adoptada en varios tratados, según la cual la mercancía enemiga debe ser libre en un buque neutral. La regla fué incorporada á las ordenanzas de marina de Francia, vigorosamente defendida por Holanda y abrazada por la emperatriz de Rusia en su declaración de 1780, que fué la base de la primera neutralidad armada. La Gran Bretaña en general se adhirió á la regla antigua, y en todas las guerras marítimas del siglo décimo-octavo la nueva regla fué poco observada. Pero en ocasión de la guerra de Crimea, la Gran Bretaña se unió con Francia para proclamar que la propiedad enemiga á bordo de un buque neutral debía ser respetada. Al terminar la guerra sobrevino la famosa Declaración de París, de 16 de abril de 1856, por la cual las potencias signatarias (Francia, Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria, Cerdeña y la Puerta Otomana) con la mira de “establecer una regla uniforme en punto tan importante”, anunciaron su adhesión á la regla y se comprometieron á invitar á las demás potencias á adherirse á ella. La declaración contenía las cuatro reglas siguientes:

- (1) El corso está y queda abolido.
- (2) El pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, con excepción del contrabando de guerra.
- (3) La mercancía neutral, con excepción del contrabando

de guerra, no es apresable bajo el pabellón enemigo.

- (4) Los bloqueos para ser obligatorios deben ser efectivos, esto es, mantenidos por una fuerza realmente suficiente para impedir el acceso á la costa del enemigo.

Estas reglas, de acuerdo con la resolución del Congreso de París, fueron llevadas á conocimiento de las potencias para su íntegro rechazo ó aceptación, y fueron aceptadas por todos los estados germánicos, las Dos Sicilias, los estados pontificios y sucesivamente por las demás potencias, excepto España, México, los Estados Unidos y Venezuela. Los Estados Unidos, cuya objección se basaba en el hecho de que mientras se abolía el corso continuaba permitiéndose el apresamiento de los buques enemigos y de la mercancía enemiga que condujeran, ofrecieron adherirse á la declaración á condición de que ella se enmendara en el sentido de exceptuar de la captura á la propiedad enemiga en el mar, salvo el caso de contrabando ó violación de bloqueo. Este ofrecimiento, hecho en los últimos días de la administración del presidente Pierce, fué retirado por el presidente Buchanan antes de que se tomara ninguna resolución á su respecto. Al estallar la guerra civil de los Estados Unidos, éstos ofrecieron aceptar íntegramente la declaración; pero fracasó el ofrecimiento desde que se vió que entrañaba el reconocimiento del derecho de los Estados Unidos para ligar á la Confederación, que ya había autorizado la salida de corsarios.

Como los Estados Unidos no fueron parte en la Declaración de París, es importante determinar cual era su posición con respecto á las reglas citadas, antes de la guerra con España. En cuanto á la primera y cuarta reglas la respuesta es fácil. La regla de que los bloqueos para ser obligatorios deben ser efectivos, siempre fué sostenida por los Estados Unidos como un principio del derecho internacional. Por otra parte, aunque los Estados Unidos tentaron en varias ocasiones establecer la exención de la captura de la propie-

dad privada en el mar, habían mantenido mientras no se adoptara esa exención el derecho de emplear corsarios, por más que durante la guerra civil el gobierno no concediera patentes de corso. Pero en cuanto á la segunda y tercera reglas, la posición de los Estados Unidos amenudo ha sido imperfectamente comprendida. La regla de que la mercancía neutral, con excepción del contrabando de guerra, no es apresable bajo el pabellón enemigo, fué seguida siempre por los Estados Unidos, salvo el caso de estipulación contraria en tratados especiales; pero, respecto á la regla de que el buque libre hace á la mercancía libre, el caso es distinto. Seward, refiriéndose á esta regla, en cuanto estaba incorporada á la Declaración de París, en una ocasión dijo: "Siempre hemos practicado los principios de la declaración". (1). Análogas aunque inexactas expresiones se encuentran en las obras de los publicistas. Nuestros tribunales, excepto en el caso de que un tratado prescriba una regla diferente, han confiscado uniformemente la propiedad enemiga aún cuando haya sido apresada bajo un pabellón neutral. ¿Y qué diremos de nuestros tratados? En solo diez de ellos celebrados con siete potencias—Argel, 1816; Marruecos 1787 y 1836; Prusia, 1785 y 1828; España, 1795; Trípoli, 1796 y 1805; Túnez, 1797; y Venezuela 1860—se ha estipulado incondicionalmente la regla "buque libre, mercancía libre", exceptuando siempre al contrabando de guerra. En seis tratados—Rusia, 1854; Dos Sicilias, 1855; Perú, 1856; Bolivia, 1858; Haití, 1864; y Santo Domingo, 1867—fué reconocido como "permanente é inmutable" el principio "buque libre, mercancía libre", pero ciñéndose las partes contratantes á aplicarla solamente al comercio y á la navegación de las potencias que "consintieran en adoptarlo" como "permanente é inmutable". De esos tratados, los de Santo Domingo

(1) Instrucciones á Dayton, ministro en Francia, en 10 de septiembre de 1861.

y Dos Sicilias habían cesado de estar en vigencia y el del Perú había sido invalidado. En nuestro tratado de 1819 con España se había adoptado el principio “buque libre, mercancía libre”, pero solo en relación á la propiedad de enemigos cuyos gobiernos lo reconocieran. Análogas estipulaciones se encuentran en nuestros tratados con Italia en 1871 y con el Perú en 1887, y aún el primer tratado celebrado por los Estados Unidos, que fué el amistad y comercio con Francia, en 6 de febrero, de 1778. Pero en el tratado con Francia, iban unidas á otra estipulación restrictiva del comercio neutral, cual era la de que las mercancías de los ciudadanos de las partes contratantes serían apresables á bordo de los buques enemigos, á menos de que hubieran sido embarcadas antes de la declaración de guerra, ó dentro de cierto intervalo posterior é ignorando la declaración. Estas cláusulas mixtas se encuentran con más generalidad que otras en nuestros tratados referentes á los derechos neutrales, como puede verse por la siguiente lista: Brasil, 1828, Centro América, 1825; Chile, 1832; Colombia, 1824 y 1846; Ecuador, 1839, Francia, 1800; Guatemala, 1849; México, 1831; Holanda, 1782; Perú, 1851, Perú-Bolivia, 1836; Salvador, 1850 y 1870; Suecia, 1783; Suecia y Noruega, 1816 y 1827; y Venezuela, 1836. Pero al estallar la guerra con España todos estos tratados habían cesado de estar en vigor, excepto los de Colombia (1846), Salvador (1870), y Suecia y Noruega (1827). Con la Gran Bretaña no teníamos cláusula de esa naturaleza, excepto la englobada en el tratado de 1794, que seguía la regla del derecho común.

Tal era la situación en la víspera de la guerra con España.

II

Declaraciones de guerra

El 20 de abril de 1898, el presidente aprobó una resolución conjunta del congreso, por la cual se declaraba que “el

pueblo de Cuba es, y debe ser por derecho, libre é independiente; que era un deber de los Estados Unidos el pedir á España, y que por tanto los Estados Unidos debían pedir á España, que abdicara de una vez su autoridad y gobierno en Cuba y que retirara sus fuerzas de mar y tierra de la isla y de sus aguas; que el presidente quedaba autorizado para emplear las fuerzas terrestres y navales de los Estados Unidos y para convocar á servicio activo á la milicia, en la amplitud que fuera necesaria para llevar á efecto estas resoluciones; y que los Estados Unidos no abrigaban disposición ó intención de ejercer soberanía, jurisdicción ó contralor en la isla excepto para su pacificación, afirmando su determinación de abandonar el gobierno y el contralor de la isla á su población en cuanto aquella estuviera pacificada.

El mismo día el ministro español en Washington pidió y obtuvo sus pasaportes, y el texto de la resolución conjunta fué teleografiado por los Estados Unidos á su ministro en Madrid para que lo comunicara al gobierno español. Pero el 21 de Abril, antes de pasar esa comunicación al gobierno español, el ministro americano recibió de aquél una nota en la que se afirmaba que la resolución conjunta era considerada como una tácita declaración de guerra y que en consecuencia quedaban rotas todas las relaciones diplomáticas. El 22 de abril el presidente dió una proclama por la cual, refiriéndose á la resolución conjunta del congreso, declaró el bloqueo de los puertos de la costa norte de Cuba, desde Cárdenas hasta Bahía Honda y del puerto de Cienfuegos en la costa sud. El bloqueo quedó establecido el mismo día. Por una declaración del congreso, aprobada el 25 de abril de 1898, quedó establecido que la guerra existía desde el día 21 de abril inclusive y fué autorizado el presidente para emplear todas las fuerzas de mar y tierra de los Estados Unidos y convocar á servicio activo á la milicia, con el objeto de llevar á cabo las operaciones.

III

Adopción de los artículos adicionales de la Convención de Ginebra

Por la convención firmada en Ginebra el 22 de agosto de 1864, comunmente denominada Convención de la Cruz Roja, se adoptaron varias reglas humanitarias para mejorar la condición de los heridos en la guerra. En 1868 tuvo lugar una segunda conferencia en Ginebra y fueron propuestos quince artículos, llamados "artículos adicionales de 1868", de los cuales los artículos VI á XV se referían exclusivamente á la guerra naval. Durante la guerra franco-prusiana los beligerantes adoptaron los artículos adicionales como un *modus vivendi*. En Marzo 1° de 1882 fueron aceptados por los Estados Unidos, pero sometiendo dicha aceptación á un canje general de ratificaciones, que no llevaron á efecto las potencias. Sin embargo, por más que los artículos adicionales no fueron obligatorios internacionalmente, los Estados Unidos, al romperse las hostilidades, comisionaron al buque ambulancia *Solace* para acompañar á la escuadra del Atlántico en calidad de barco-hospital no combatiente y de acuerdo con el espíritu de esos artículos, para prestar servicios á los enfermos y heridos. En 23 de abril de 1898 el ministro suizo en Washington propuso la adopción formal de los artículos adicionales, con ciertas enmiendas ó aclaraciones, por los Estados Unidos y España como un *modus vivendi* durante las hostilidades. Esa propuesta fué aceptada por ambos gobiernos.

IV

Declaraciones de neutralidad

Al estallar la guerra, varias potencias hicieron anuncios de neutralidad. Estos anuncios en algunos casos fueron breves é informales y en otros asumieron el carácter de pro-

clamas y decretos, sentando diversas reglas de naturaleza más ó menos comprensiva. Antes del comienzo de las hostilidades los Estados Unidos compraron dos buques de guerra en construcción en Inglaterra—un torpedero y el crucero brasileiro *Almirante Abreu*. Cuando se anunció la guerra, el gobierno británico rápidamente prohibió la salida del torpedero, que estaba casi listo y se le había denominado *Somers*, é hizo detener la construcción del crucero. Este acto pareció hallarse en conformidad con las obligaciones de la neutralidad y fué acatado por los Estados Unidos. Los buques de guerra fueron comprados hacia mediados de marzo de 1898. El permiso para la salida del *Somers*, que había sido provisto en Falmouth, fué acordado á la conclusión práctica de las negociaciones de paz en París, habiendo asegurado antes los Estados Unidos al gobierno británico que no se emplearía ese buque en caso de renovarse las hostilidades con España.

Una cuestión interesante surgió en China á propósito del *Monocacy*. Según comunicaciones del tsungli-yamen al ministro norteamericano Denby en Pekín, de fecha 2 y 9 de mayo de 1898, el yamen había teleografiado á los vireyes gobernadores y taotais generales del Yangtze y de las provincias marítimas, disponiendo que se ordenase á sus subordinados la observancia de las leyes de la neutralidad. En la comunicación del 9 de mayo se decía que á fin de observar el derecho internacional “no se permitiría fondear en los puertos chinos” á los buques de guerra de los beligerantes. En la proclama del taotai de Shangai, de 22 de mayo de 1898, se declaraba con más precisión que dichos buques no podrían hacer uso de las aguas y puertos chinos para fondear, combatir ó recibir en ellos provisiones de guerra; y que si uno de esos buques entraba á un puerto chino no podría permanecer en él por más de veinticuatro horas, salvo caso de arribada forzosa por mal tiempo ó necesidad de alimentos ó reparaciones. Habiendo surgido

una cuestión acerca de la aplicabilidad de esas provisiones al *Monocacy*, antiguo buque de guerra de poco calado que á causa de su adaptación al servicio de ríos había permanecido durante varios años en las aguas de China para la protección de los ciudadanos americanos, el gobierno de los Estados Unidos declaró que en vista de que el prolongado servicio á que se le había destinado y su inaptitud para el mar demostraban que su presencia nada tenía que ver con la guerra, aquel no estaba comprendido en las reglas dictadas para evitar el uso de las aguas neutrales como base de operaciones, y que la existencia de la guerra entre los Estados Unidos y una tercera potencia no le privaba del derecho anterior de tomar las medidas acostumbradas para la protección de los ciudadanos residentes en China.

A fines de agosto de 1898, diez días después de la firma del protocolo preliminar de paz, el gobierno británico acordó licencia al almirante Dewey para entrar á dique, limpiar y pintar los fondos de los buques de su mando en Hong-Kong. Al hacer uso de ese permiso, los Estados Unidos observaron que tales operaciones no podían en las circunstancias actuales considerarse como conexas con las hostilidades, pues eran de la naturaleza de las reparaciones que requiere la conservación de los buques.

Un incidente ocurrido en los preliminares del conflicto demuestra la necesidad de ampliar la regla, por la cual se exige á un buque de guerra que zarpe de un puerto neutral á las veinticuatro horas de su llegada, salvo caso de mal tiempo ó necesidad de alimentos ó reparaciones. El 11 de mayo de 1898, el capitán Cotton, del crucero auxiliar *Harvard*, telegrafió desde St. Pierre, Martinica, al Ministro de Marina, que el destructor español *Furor* había tocado en la tarde en Fort de France, Martinica, zarpando después con destino ignorado; y que el gobernador le había ordenado á él que no saliera del puerto antes de transcurrir veinticuatro horas desde la salida del *Furor*. A mediodía del 12 de

mayo el capitán Cotton, fué informado por el capitán del puerto de St. Pierre, que el *Furor* había arribado nuevamente á las 8 a. m. á Fort de France y zarparía á mediodía, y que él debería zarpar á las 8 p. m. pero que de no hacerlo así tendría que notificar la fecha de su salida al capitán del puerto con veinticuatro horas de anticipación. El mismo día el capitán Cotton recibió informes que le indujeron á telegrafiar al Ministro de Marina que estaba estrechamente vigilado y bloqueado en St. Pierre por la escuadra española, y que el destructor español *Terror* se hallaba en Fort de France. Más tarde, el capitán Cotton telegrafió que el cónsul español había protestado contra su estadía en St. Pierre, y que él había solicitado licencia para permanecer durante una semana para efectuar reparaciones en las máquinas. En respuesta á esos informes, el Ministro de Marina telegrafió al capitán Cotton lo siguiente: "Proteste vigorosamente contra verse forzado á salir del puerto frente á una fuerza superior bloqueadora, especialmente habiendo sido detenido previamente en el puerto por las autoridades francesas á causa de haber zarpado de otros puertos buques de guerra españoles. Diga también que el gobierno de los Estados Unidos comunicará el asunto al gobierno francés. Urja al cónsul de los Estados Unidos para que proteste vigorosamente". Fué innecesario acudir á otras medidas. Se acordó al capitán Cotton el tiempo que había solicitado. El gobernador no mostró disposiciones para hacerle zarpar, requiriendo solamente el aviso anticipado de veinticuatro horas de su intención de salir del puerto; y pronto desaparecieron los peligros á que parecía estar expuesto el *Harvad*. Debe observarse, empero, que la imposición del límite de veinticuatro horas en tales circunstancias constituye una negación del derecho de asilo y que en principio no podría sostenerse esa medida en la situación mencionada.

El destructor español *Temerario*, del que se dijo que había sido enviado á las costas de Sud América para inter-

ceptar al *Oregon* en su viaje á Cuba por el cabo de Hornos, obtuvo permiso del gobierno paraguayo para permanecer en la Asunción durante la guerra, en condiciones de desarme que le inhabilitaban para el servicio.

Algunas proclamas de neutralidad contenían una cláusula limitativa de la provisión de carbón que podía obtener un buque beligerante, accediendo solo á la entrega de la cantidad suficiente para que el barco pudiera llegar al puerto más próximo de su propio país, ó en otras palabras, á su puerto nacional más próximo. En el decreto de Holanda se disponía que "la provisión de carbón solo se efectuará en la medida suficiente para que el buque pueda arribar al puerto más próximo del país á que pertenece ó al de uno de sus aliados en la guerra". Cuando la escuadra española, que más tarde fué destruída en Santiago, arribó á Curaçao el 14 de mayo de 1898, su jefe pidió permiso á las autoridades holandesas para obtener 5000 toneladas de carbón que se le habían enviado á aquel lugar. El permiso fué denegado así como la autorización para trasbordar ese carbón en cualquier momento en que llegase. Se denegó igualmente el permiso para que cada buque tomase 700 toneladas de combustible. Finalmente se accedió á la autorización solicitada para que entraran al puerto el *María Teresa* y el *Vizcaya* y tomara cada uno 200 toneladas, mientras los demás buques permanecían anclados en la rada. Se dijo entonces que las 400 toneladas así obtenidas eran de "muy mala calidad".

Cuando á fines de mayo de 1898 corrió el rumor de que la escuadra acorazada española había zarpado ó estaba próxima á zarpar para los Estados Unidos y que haría escala en las Azores para tomar carbón, el ministro de los Estados Unidos en Lisboa recibió instrucciones para protestar contra esa provisión de carbón en aquellas islas fundándose en que quedaban enteramente fuera de la ruta de España á las Antillas españolas y en que tal acto convertiría al territorio portugués en base de operaciones hos-

tiles contra los Estados Unidos. La escuadra no se dirigió en realidad hacia el Oeste, sinó que más tarde por la vía del Este llegó hasta el canal de Suez, regresando después á España.

Antes de la ruptura de hostilidades el gobierno mejicano permitió á la compañía Pacific Mail Steamship que proveyera de carbón á los buques norte-americanos que se encontraban en Acapulco. Durante la guerra el gobierno mejicano puso limitaciones á la provisión de carbón en sus puertos á los buques beligerantes, y no hizo excepción en cuanto á los buques de los Estados Unidos que llegaran á Acapulco. El gobierno de los Estados Unidos se abstuvo de entablar reclamaciones á este respecto fundándose en que “en ocasiones recientes y numerosas había pedido al de Méjico la ejecución estricta de sus deberes neutrales” y porque “no estaba dispuesto, basándose en la fuerza de un convenio celebrado antes de la guerra entre la compañía Pacific Mail Steamship y el gobierno mejicano, á insistir en que los buques públicos de los Estados Unidos pudieran tomar combustible sin ninguna limitación en un puerto mejicano”.

Por ley del congreso de 22 de Abril de 1898, el presidente estaba “autorizado discrecionalmente, y con las limitaciones y excepciones que estimara convenientes, á prohibir la exportación desde cualquier puerto de mar de los Estados Unidos de carbón ó de cualquier otra mercancía empleada en la guerra, salvo orden contraria” expedida por él ó por el congreso. Con el objeto de dar más fuerza á las disposiciones de esa ley, así como para reglamentar el género de exportaciones que se permitiría durante la guerra, el ministerio de hacienda publicó una circular en 27 de Abril de 1898, estableciendo que las personas interesadas debían solicitar permiso á los jefes de aduana para el embarque de carbón, declarando quienes eran los cargadores y los consignatarios, afirmando que el carbón no se destinaba directa ó indirectamente á los enemigos de los Estados Uni-

dos y contrayendo la obligación de comunicar telegráficamente al ministerio de hacienda la llegada del carbón á su destino inmediatamente de tener noticia de ello. El ministerio de hacienda se reservó el derecho de exigir fianza al cargador por el transporte de ese carbón hasta que llegara al puerto de su destino ó se diera cuenta satisfactoria de él. Esta exigencia tenía por objeto evitar apresamientos en complicidad y solo se dispensaba de ella á quien presentaba suficientes garantías. En esta y en otras cuestiones la conducta de tesorería se regulaba por las circunstancias de cada caso. Además se impusieron restricciones naturales á la exportación de carbón por el temor de que hubiera escasez de ese artículo en los lugares en que debían proveerse los norteamericanos. En Vera Cruz, donde hay considerable demanda de combustible para los ferrocarriles, se ofreció á fines de mayo el doble del precio por cargamentos de carbón.

V

Declaraciones del derecho marítimo

El 22 de abril de 1898, el Departamento de Estado en una circular telegráfica á los representantes diplomáticos de los Estados Unidos declaró entre otras cosas que en caso de sobrevenir hostilidades con España no autorizaría el corso. El gobierno español, por real decreto de 23 de abril de 1898 sobre las reglas que se proponía observar durante la guerra, se reservó el derecho de expedir patentes de corso. De esta reserva España no sacó después ventaja. El mismo decreto declaraba también que para fines de crucero el gobierno organizaría un servicio de "cruceros auxiliares de la armada" compuesto de "buques de la marina mercante española" y "sometidos á los reglamentos y jurisdicción de la armada".

Los Estados Unidos organizaron una fuerza auxiliar, á las órdenes de oficiales de la escuadra. Las condiciones

en que se estableció este servicio se ven en el caso de *The Rita*, en relación á la distribución de la presa entre los oficiales y tripulación del crucero auxiliar *Yale*, antiguo *City of París* de la Compañía Internacional de Navegación, comunmente denominada Línea Americana.

El *City of París* era uno de los vapores que, por la ley de subsidios á las malas de 3 de marzo de 1891, estaba sometido á ser tomado por los Estados Unidos para servirse de él en calidad de crucero ó transporte, previo pago de su valor actual. Por un acuerdo posterior de 30 de abril de 1898, entre la compañía y el Ministerio de Marina, la posesión del buque fué transferida al gobierno y aquel fué armado poderosamente y convertido en crucero auxiliar. El convenio disponía que el buque sería "tripulado y provisto por el gobierno", quien pagaría además todos los gastos y devolvería el buque á su antiguo dueño cuando ya no lo necesitara, entregándolo en buen estado, salvo los deterioros ordinarios ocasionados por el transcurso del tiempo. Añadía el convenio que el buque sería "tripulado por su dotación normal de oficiales y tripulación y llevaría además dos oficiales de guerra, uno de infantería de marina y una guardia de treinta marinos, debiendo tener á bordo dos meses de provisiones y unas cuatro mil toneladas de carbón: todo lo que sería reembolsado por el gobierno á la presentación de los recibos firmados por el oficial más antiguo que estuviese presente á bordo". Otras estipulaciones protegían al propietario contra gastos y riesgos y colocaban al buque "bajo el contralor completo del oficial más antiguo que estuviera embarcado á bordo". De acuerdo con estas convenciones el gobierno de los Estados Unidos embarcó á bordo del buque á un capitán, un teniente de la armada y veinticinco marineros. Había también á bordo otras 269 personas, no comisionadas por los Estados Unidos ni enroladas en el servicio, pero pertenecientes á la compañía naviera, incluídas en el rol y que prestaban sus servicios á bordo. En una cuestión que surgió acerca de la distribución

de una presa, se sostuvo que el *Yale* no era "buque de la escuadra", ni corsario, pero que estaba comprendido en la clase de barcos que "sin ser de la escuadra, se hallaban bajo el contralor del Poder Ejecutivo" pues era "un barco armado al servicio de los Estados Unidos y como á cualquier otro buque de la escuadra podía adjudicársele una presa".

En el telegrama antes citado, de 22 de abril, al anunciar el gobierno de los Estados Unidos que no autorizaría el corso, declaró que se adheriría á la segunda, tercera y cuarta reglas de la Declaración de París, por ser "reglas reconocidas de derecho internacional".

El 26 de abril, el presidente dió una proclama que definía más completamente la posición del gobierno en las cuestiones de derecho marítimo. Por esta proclama se repetía que los Estados Unidos no autorizarían el corso, y poco después siguió á esto la promulgación de seis reglas que debían observar los oficiales de los Estados Unidos durante el conflicto. Estas reglas, por tres de las cuales se incorporan las reglas segunda, tercera y cuarta de la Declaración de París, fueron las siguientes:

- (1) El pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, excepto el contrabando de guerra.
- (2) La mercancía neutral, que no es contrabando de guerra, no está sujeta á captura bajo el pabellón enemigo.
- (3) Para ser obligatorios, los bloqueos deben ser efectivos.
- (4) Los barcos mercantes españoles, que estén en cualesquiera puertos ó lugares de los Estados Unidos tendrán autorización hasta el 21 de mayo de 1898 inclusive, para recibir sus cargamentos y zarpar de dichos puertos ó lugares; y dichos buques mercantes españoles, en caso de ser encontrados en el mar por cualquier buque de los Estados Unidos, podrán continuar viaje si del exámen de los papeles resulta que sus cargamentos fueron embarcados antes de la

expiración del plazo anterior. Nada de esto se aplicará á los buques españoles que tengan á bordo un oficial de servicio militar ó naval del enemigo, ó carbón (salvo el necesario para su viaje), ú otro artículo prohibido, ó contrabando de guerra, ó mensajes del gobierno español ó destinados al mismo.

- (5) Todo buque mercante español que antes del 21 de abril de 1898 haya zarpado de cualquier puerto extranjero con destino á un puerto ó lugar de los Estados Unidos, podrá entrar á dicho puerto ó lugar y descargar su cargamento; y si el mencionado buque es encontrado en el mar por cualquier barco de los Estados Unidos, se le permitirá continuar viaje para cualquier puerto no bloqueado.
- (6) El derecho de visita se ejercitará con estricta observancia de los derechos de los neutrales, y los viajes de paquetes de mala no serán perturbados salvo sospechas muy fundadas de una violación del derecho concerniente al contrabando ó al bloqueo".

Las reglas que observaría el gobierno español fueron englobadas en el real decreto de 23 de abril de 1898.

Este solo concede cinco días, á contar de la fecha de su publicación, para la salida de buques americanos de los puertos españoles. No prohíbe expresamente el apresamiento de tales buques después de su salida, dispone sobre la entrada y descarga de buques americanos que hubieran zarpado antes de la guerra para puertos españoles.

Como España no hizo presas, no llegó el caso de interpretación judicial de las reglas que el gobierno había adoptado para guiar su conducta. Con respecto á algunas capturas hechas por los Estados Unidos, se originaron interesantes cuestiones que fueron objeto de decisiones judiciales.



VI

Buques en puerto antes ó despues del comienzo de la guerra

Se hizo una importante aplicación de la regla cuarta de la proclama del 26 de abril en el caso del *Buena Ventura*. Este era un vapor mercante español que fué apresado por el vapor de los Estados Unidos *Nashville*, á ocho ó nueve millas de la costa de la Florida. El 27 de Mayo fué condeñado como propiedad enemiga por la corte de distrito de la sección sur de la Florida. Esta sentencia fué revocada por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Resultó que el *Buena Ventura* en el momento de su apresamiento estaba en viaje de Ship Island, estado de Mississipí, á Rotterdam, por la vía de Norfolk, Virginia, con un cargamento de maderas. Llegó á Ship Island el 31 de mayo de 1898 y zarpó para Rotterdam el 19 de Abril con un permiso de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos para hacer escala en Norfolk para proveerse de combustible. Fué apresado en la mañana del 22 de abril. No hizo resistencia, no tenía á su bordo ningún oficial militar ó naval y no conducía armas ni municiones de guerra. No hubo discusión acerca del hecho de que navegaba en demanda de Norfolk cuando fué apresado y sus papeles estaban en debida forma. La sentencia de la Suprema Corte siguió la opinión del juez Peckham. La cuestión versaba sobre si debía estar comprendido en la excepción de la cuarta regla de la proclama de 26 de abril como "buque mercante español, en puerto ó lugar de los Estados Unidos". Al fundar su voto el juez Peckham, observó que el buque en cuestión, como barco mercante del enemigo dedicado á un tráfico comercial inocente en el momento de comenzar las hostilidades, pertenecía á una clase que los Estados Unidos siempre desearon tratar con gran liberalidad, y que en el hecho así los trataban las naciones civilizadas. Por consiguiente, la proclama del Presidente

debía recibir “la interpretación más liberal y amplia” de que era susceptible y allí donde cupieran dos ó más interpretaciones debía adoptarse la más favorable al beligerante en cuyo provecho se había dado la proclama. La disposición según la cual “los buques mercantes españoles que se hallaran en puertos ó lugares de los Estados Unidos tendrán autorización hasta el 21 de Mayo de 1898 inclusive para tomar su cargamento y zarpar” incluía según el citado juez solo á los buques que estaban en puerto el día en que se dió la proclama, esto es, el 26 de abril, ó aquellos que se hallaban en puerto el 21 de abril, día en que comenzó la guerra según declaración del Congreso, ó no sólo los que estaban en puertos sino también aquellos que habían salido antes del 21 de mayo y antes ó después de comenzar la guerra ó de darse la proclama. La corte adoptó esta última interpretación. Aunque la proclama no incluía expresamente á los buques que habían salido de los Estados Unidos antes del comienzo de la guerra, estos, decía el juez Peckham, se hallaban comprendidos dentro de las disposiciones de aquella, interpretándola liberalmente. Sin embargo, en vista del hecho de que en el instante de la captura no había aparecido aún la proclama de 26 de abril, sin la cual el barco hubiera sido buena presa, la restitución acordada no debía comprender daños ni costas.

El efecto de la cuarta regla de la proclama de 26 de abril fué nuevamente considerada en el caso del vapor español *Panamá*. Este buque fué condenado como propiedad enemiga por la corte de jurisdicción ordinaria y la sentencia fué confirmada por la Suprema Corte. El *Panamá*, vapor de 1432 toneladas de registro, de la Compañía Transatlántica, corporación española de Barcelona, España, que llevaba bandera española, salió el 20 de abril de 1898 de Nueva York para la Habana, Cuba, y ciertos puertos mejicanos, con carga general, pasajeros y mala. El 25 de abril, encontrándose á 25 millas de la Habana, fué apresado por un buque de guerra de los Estados Unidos. El *Panamá* tenía

patente de vapor correo otorgada por el gobierno español, llevaba una tripulación de 71 hombres que en diversas ocasiones habían sido embarcados en la Habana, y conducía 29 pasajeros, españoles todos con excepción de uno que era francés. El juez Gray, cuya opinión adoptó la Suprema Corte, dijo que el caso del *Buena Ventura* sería decisivo de el del *Panamá* si no fuera por la mala y las armas que conducía este último buque y el contrato bajo el cual navegaba. Según dicho contrato, que se puso en vigor en 1886, el gobierno español tenía derecho de tomar posesión del vapor en caso de guerra; y en el mismo se disponía que los buques que pertenecieran á la compañía serían especialmente adecuados para su empleo en la guerra, y que todo vapor de mala llevaría un cierto armamento "para su propia defensa". Los oficiales y tripulación, y los maquinistas, en cuanto ello fuera posible, debían ser españoles. Cuando fué apresado el *Panamá*, llevaba dos cañones Hontoria de retrocarga de 9 c. m. de calibre, uno por banda; un cañón Maxim de tiro rápido en el puente; 20 fusiles remington y 10 mauser, con municiones para todos los cañones y fusiles; y 30 ó 40 sables de abordaje. Los cañones habían sido instalados á bordo tres años antes y el armamento menor y municiones un año antes; y todo su armamento correspondía al estipulado en el contrato de mala, excepto el cañón Maxim y los fusiles mauser. Debe pensarse, dijo la Corte, que el primer objetivo del armamento del vapor, y en tiempo de paz, su único objetivo era el de su defensa. Sin embargo, el armamento en sí mismo no era considerable y después del apresamiento del buque, sus armas y municiones fueron entregadas á la escuadra de los Estados Unidos. Por consiguiente, el buque era propiedad enemiga, iba destinado á un puerto enemigo, llevaba un armamento susceptible de emplearse con propósitos hostiles y él mismo, á su llegada á puerto, podría ser tomado por el enemigo para esos propósitos. La intención de la proclama, continuaba la corte, era la de eximir de la captura

por un tiempo á los buques pacíficos comerciales, y no la de ayudar al enemigo á obtener armas de guerra; y no constituiría una interpretación racional la exención del apresamiento á “un buque español de propiedad de un súbdito del enemigo; que tenía un armamento adecuado para fines hostiles; que en caso de guerra debía ser empleado como buque de guerra; destinado á un puerto del enemigo; y á su llegada allí, sujeto á ser tomado por el enemigo y empleado como crucero auxiliar por la escuadra enemiga”.

VII

Buques en navegación hacia un puerto enemigo antes de la guerra

La aplicación propia de la quinta regla de la proclama de 26 de abril fué considerada por la Suprema Corte en el caso del vapor mercante español *Pedro*, que fué condenado por la corte inferior como propiedad enemiga. El *Pedro* que había sido un buque construido en Inglaterra y que durante varios años había navegado con matrícula británica, fué transferido en 1887 á una corporación española de Bilbao, España, y debidamente registrado como buque español. Navegó después bajo la bandera española y con tripulación española, aunque estaba empleado en el transporte de mercaderías á flete bajo la administración de una firma de Liverpool. Su tráfico usual era el de tomar cargamento en Europa para los puertos cubanos, descargar en éstos y dirigirse á los Estados Unidos á tomar carga para Europa, empleando unos tres meses en el viaje completo. El 18 de marzo de 1898, mientras se encontraba cargando en Amberes para Cuba, fué fletado por una firma americana para dirigirse á Pensacola, Florida, ó Ship Island, Mississippi, y tomar un cargamento de maderas para Rotterdam ó

Amberes. Poco despues salió de Amberes con más de 2000 toneladas de mercaderías de varias clases para la Habana y Cienfuegos. Llegó á la Habana el 17 de abril, descargó la mayor parte de la mercadería y zarpó el 22 para Santiago, Cuba, con una pequeña cantidad de mercaderías generales embarcadas en la Habana. El mismo día fué apresado á pocas millas de la Habana por un crucero norteamericano de la escuadra bloqueadora. Al apelar, la defensa sostuvo que no debía ser condenado porque su verdadero destino era un puerto de los Estados Unidos, de modo que caía bajo la exención contenida en la regla quinta. La corte, siguiendo la opinión de su presidente Fuller, no adoptó esa interpretación. El juez Fuller observó que el *Pedro* había permanecido en la Habana desde el 17 hasta el 22 de abril y había zarpado este último día, que era el siguiente al del comienzo de la guerra; que en ese momento no tenía carga para ningún puerto de los Estados Unidos, sinó solamente para Santiago y Cienfuegos. No había abandonado un puerto extranjero ignorando la peligrosa condición de los asuntos, antes bien debia juzgarse que había sido notificado de la inminencia de las hostilidades; y que tampoco llevaba un cargamento á los Estados Unidos, para el incremento de sus recursos y la conveniencia de sus ciudadanos. Al contrario, había sido apresado mientras navegaba de un puerto enemigo á otro, siendo el mismo buque enemigo. En estas circunstancias, el hecho de que por su último contrato debía dirigirse á un puerto de los Estados Unidos á tomar cargamento para Europa, decía el presidente de la corte, no le incluía en la exención de la regla quinta; y declaró que la doctrina del viaje continuo tal como lo había sentado la corte en varias ocasiones, no era aplicable al caso. Por esto, la corte confirmó la sentencia.

El juez White se manifestó en disidencia junto con los jueces Brewer, Shiras y Peckham. Arguyó que el viaje principal del buque era de Amberes á los Estados Unidos, siendo meramente incidental la escala en puertos cubanos, que por

más que el Congreso declarara posteriormente que la guerra debía considerarse como existente desde el 21 de abril, ni se concebía ni era sabido que el estado de guerra existía cuando zarpó de la Habana el día 22 de que precisamente antes de su salida de la Habana se había permitido á un buque americano que saliera del puerto, é igual hecho había ocurrido con otro poco después de su salida; y que la referencia de que el *Pedro* no tenía cargamento para los Estados Unidos desconocía los propósitos de la proclama y especialmente las provisiones de la regla cuarta, la cual permitía á los buques enemigos no solo salir de los Estados Unidos sino también tomar y conducir carga para puertos neutrales ó para puertos no bloqueados del enemigo.

VIII.

Propiedad enemiga en el mar

En tres casos, dos de ellos relativos á buques y el tercero á cargamento, surgió la cuestión de saber cuando tenían legalmente el carácter de propiedad enemiga los apresamientos hechos en el mar. El primer caso fué el del *Pedro*, del que ya nos ocupamos. Después de tomarse la prueba preparatoria, el capitán, en representación de los propietarios, pidió ampliación de prueba fundándose en que si bien la mayoría de los condóminos de la corporación española, á la cual ostensiblemente pertenecía el buque, eran súbditos españoles y solo una minoría súbditos británicos, uno de estos últimos era dueño de todas las acciones y en consecuencia era único beneficiario del vapor; que la transferencia del registro británico al español se hizo solo en mira de facilitar el tráfico con las colonias españolas; que los accionistas británicos tenían la intención de reincorporarlo al registro y bandera británicos en cualquier caso en que el tráfico pu-

diera ser perturbado; y que el vapor estaba asegurado en compañías británicas quienes soportarían la pena en caso de que fuera aquél condenado. La corte inferior se negó á admitir la prueba pedida y el procedimiento fué confirmado por la Suprema Corte. El buque, dijo la Suprema Corte, pertenecía á una corporación española, estaba inscripto en el registro español, navegaba bajo la bandera española, con licencia española y tripulado por oficiales y marineros españoles. Estaba perfectamente establecido que en esas circunstancias debía ser considerado como buque español y tratado como tal. Cuando los accionistas decidieron acogerse á los beneficios de las leyes españolas de navegación, decidieron también ampararse bajo la protección de la bandera española. La intención alegada de reintegrar el buque al registro británico, si la guerra hiciera deseable dicho cambio, no debía tomarse en consideración desde que no había tenido efecto cuando aquel fué apresado. Terminaba la corte diciendo que era un pretexto fútil el hecho de ser súbditos británicos los accionistas y el de recaer la pérdida en definitiva sobre aseguradores británicos.

En el caso del *Benito Estenger* se examinó la cuestión de la validéz de la transferencia de un buque hecha durante la guerra, por un súbdito español á un neutral. El *Benito Estenger* fué capturado por el vapor norteamericano *Hornet* el 27 de Junio de 1898 frente al cabo Cruz, al sur de la isla de Cuba. El 7 de Diciembre de 1898 fué condenado como propiedad enemiga por la corte de distrito de la sección sud de Florida. Se apeló fundándose en que era un buque mercante británico debidamente documentado y bajo el amparo del pabellón británico, legalmente poseído y registrado por un súbdito británico domiciliado en la Gran Bretaña y empeñado en un viaje por cuenta de la junta local cubana de Kingston, Jamaica, aliada de los Estados Unidos, y que por consiguiente había sido capturado estando al servicio de los Estados Unidos y desempeñando comisiones amistosas para las fuerzas de los Estados Unidos.

Quedó demostrado que hasta el 9 de junio de 1898 el buque pertenecía á Enrique de Messa, súbdito español residente en Cuba, y que en aquél día de Messa había otorgado boleto de venta al reclamante, Beattie, súbdito británico, registrándose al buque en Kingston como buque británico, de acuerdo con las disposiciones de las leyes británicas. Había estado dedicado al tráfico con la isla de Cuba, y más particularmente entre los puertos de Kingston y Montego, Jamaica y el puerto de Manzanillo, Cuba. Salió de Kingston el 23 de junio con un cargamento de harina, arroz y café para Manzanillo, donde se efectuó la descarga. Zarpó de Manzanillo el 27 de junio para Montego y Kingston, siendo apresado el mismo día á la altura del cabo Cruz.

La opinión de la corte, que adoptó la del presidente Fuller, contiene varias observaciones sobre el caracter de enemigo, el tráfico ilegal con el enemigo, el bloqueo y otras materias; pero debe decirse que las únicas cuestiones pertinentes al caso fueron: 1º si de Messa, aunque era súbdito español, debía ser tratado como enemigo; y 2º si la transferencia del buque hecha por él á Beattie era un acto ejecutado de buena fé.

En cuanto al primer punto, la corte decía que había “la evidencia tendente á demostrar que Messa simpatizaba con los insurrectos cubanos, pero que no había prueba de que él mismo fuera rebelde cubano ó de que hubiera renunciado á su vínculo de obediencia á España”. El cargamento del buque al ser apresado consistía principalmente en harina, y existía la evidencia de que esta harina, después de ser desembarcada en Manzanillo, fué inmediatamente transferida á la aduana del gobierno español. La corte consideró á Manzanillo como un “baluarte español”, y observó que la entrega de provisiones al gobierno español constituía un tráfico ilícito con el enemigo, según las leyes de la guerra. Sin embargo, se alegó que Messa había prestado servicios importantes

á los Estados Unidos, que era amigo y no enemigo de los Estados Unidos, y que había un convenio entre él y el cónsul de los Estados Unidos para proteger al buque contra el apresamiento. Se probó que Messa había tratado de cultivar relaciones amistosa con el cónsul de los Estados Unidos en Kingston y que le había dado un antiguo plano gubernativo de la provincia de Santiago y una carta especialmente preparada del puerto, á cambio de lo cual había tratado de obtener del cónsul una carta de protección para el viaje que estaba por emprender. El cónsul declinó la entrega de la carta pedida, pero el 23 de junio escribió al almirante Sampson que Messa ofrecía dar ciertos informes útiles y proponía estar á la altura del cabo Cruz el 30 de junio, añadiendo: Vd. comprende que al tratar con esta gente, uno está más ó menos sujeto á imposiciones. Por consiguiente no recomiendo á Vd. á Messa". El reclamante afirmaba y el cónsul negaba que la protección por ese viaje se le había dado por esa carta. Con referencia á este punto, la corte dijo que nada probaba que el viaje se hubiera emprendido en virtud de la carta, ó que ésta en cualquier forma hubiera contribuído al apresamiento; ni que el almirante entendiera aprovecharse de lo que se le sugería en ella, "pero, decía la corte, no iremos más lejos en ese asunto, porque pensamos que en esa ocasión ni hubo compromiso con los Estados Unidos ni se prestó á estos ningún servicio particular, y se vé que el buque fué apresado en el curso ordinario de un crucero en momentos y circunstancias en que no podía negarse que estaba sujeto á captura. Más aún, un cónsul de los Estados Unidos no tiene autoridad en virtud de sus funciones oficiales para expedir ninguna licencia ó permitir la exención de captura y confiscación de un buque del enemigo." Refiriéndose al mismo asunto en otro lugar la corte decía: "el estatuto de Messa era el de un enemigo, como ya se ha establecido, y esto debe de tenerse por cierto apesar de actos individuales de amistad, desde que no exis-

tía abierta adhesión á la causa cubana y desde que podía cambiar el vínculo de obediencia con los accidentes de la guerra.”

En cuanto á la cuestión de la validéz de la venta la corte dijo que Messa sostenía haberse visto obligado á vender el vapor para obtener dinero, que el precio había sido de 40.000 \$, por cuyo total ó por una gran parte del cual se había abierto crédito á la firma de que era miembro Beattie, y que éste le había empleado para ir en el buque como representante y administrador suyo. Beattie en su testimonio dijo que la venta era bonafide, pero declinó en declarar en que materia había efectuado el pago. El cónsul de los Estados Unidos en Kingston atestiguó que Beattie en conversaciones, aunque insistiendo en que la transferencia era absoluta, admitió que ella se había llevado á efecto con objeto de proteger al buque. Aparentemente no hubo entrega de dinero. El capitán y tripulantes españoles conservaron sus puestos. Messa durante el viaje ocupaba el puesto de sobrecargo; y en el memorial del abogado del reclamante se declaraba que la transferencia se había hecho para proteger al vapor contra el apresamiento por los españoles, admitiéndose que Messa “aún retenía parte de los beneficios después de esa venta y transferencia de bandera”. Establecidos así los hechos la corte observó que “las transferencias de buques *flagrante bello* se consideraban nulas antiguamente”, pero que la regla había sido “modificada”. La corte creyendo que era la verdadera regla de derecho, tomó del *Derecho Internacional* de Hall, cuarta edición pag. 525, el siguiente pasaje: “en Inglaterra y en los Estados Unidos, al contrario, el derecho de comprar barcos es admitido en principio, puesto que en sí mismos aquellos son lejitimos objetos de comercio tan plenamente como cualquier otra clase de mercadería; pero siendo grandes las oportunidades para el fraude, se investigan escrupulosamente las circunstancias que rodean á la venta y no se tiene por buena la transfe-

rencia si está sujeta á cualquier condición ó aún tácitamente se reserva el vendedor algún interés en el buque ó en su producto, ó un contralor sobre él, ó un poder de revocación, ó un derecho de retroventa á la conclusión de la guerra". La prueba incumbe al reclamante, decía la corte. En conclusión, la corte sostuvo que la prueba no satisfacía á las exigencias del derecho de presas y que la condena era justa.

En el caso del *Cárlos F. Roses*, en que se pidió la condena del cargamento como propiedad enemiga, surgió la cuestión sobre el efecto del endoso de las pólizas de cargamento á los neutrales. El buque mismo, que era una barca española, fué condenado como propiedad enemiga. El cargamento fué reclamado por Kleinwort, Sons y Cia. comerciantes británicos de Londres. Consistía en tasajo y ajo, embarcado en Montevideo en marzo de 1898 por Gibernau y Cia., mercaderes de esa plaza pero ciudadanos de la República Argentina. Las facturas establecían que la mercancía era embarcada "por cuenta y riesgo y á la orden de las partes abajo expresadas". En la factura de tasajo figuraban como consignatarios "la expedición ó viaje del *Cárlos F. Roses*" y "el señor Pedro Pagés de la Habana", súbditos españoles todos; los consignatarios del ajo eran "el señor Pedro Pagés" y "los abajo firmados", Gibernau y Cia. El capitán había expedido tres pólizas de fletamento á Gibernau y Cia., una por aquella parte del cargamento de tasajo hecho por cuenta del buque, otra por aquella parte hecha por cuenta de Pagés y la tercera por el ajo que iba por cuenta de Pagés y Gibernau y Cia., conjuntamente. Todas las pólizas establecían que las mercaderías iban por cuenta y riesgo de aquellos á quienes concernían. En el manifiesto del buque el destino del cargamento estaba establecido así: "Embarcado por Plá Gibernau y Cia. A la orden". La visación del cónsul español decía: "Destinado á la Habana, con cargamento de tasajo y ajo". En presencia de los papeles

la corte determinó que al ser entregadas al buque las mercaderías, estas se convirtieron en propiedad de los consignatarios mencionados en las facturas y que, como Gibernau y Cia. no habían comparecido ni presentado reclamo, todo el cargamento que los reclamantes de hecho admitían estar “destinados en último término á don Pedro Pagés, de la Habana”, debía ser condenado como propiedad enemiga, salvo prueba contraria. Kleinwort y compañía trataron de presentar esa prueba fundándose en que después del embarque de la carga habían hecho adelantos hasta 30.000 \$, por cuya suma las pólizas de fletamiento endosadas en blanco por Gibernau y Cia. les habían sido entregadas para que recibieran el cargamento á la llegada de éste á su destino, con el derecho de disponer de él y reembolsarse con el producido de su venta. Sostuvieron que por ese medio habían llegado á ser lejitimos propietarios de las pólizas y del cargamento. Sin embargo, los justificativos de la entrega de dinero hecha por Kleinwort y Cia. no contenían ninguna referencia al cargamento y uno de ellos que comprendía la mayor parte del tasajo solo les fué entregado mucho tiempo después del préstamo. Por estas y otras circunstancias la corte sostuvo que el cargamento nunca había pasado *bona fide* á Kleinwort y Cia., sino que había continuado siendo propiedad de súbditos españoles y estaba sujeto á captura.

Debemos referir también que el presidente otorgó salvo conductos al *Alicante* y á otros vapores españoles, por todo el tiempo empleado en dirigirse á Santiago de Cuba; contratado por el gobierno de los Estados Unidos, é ir de allí á España, conduciendo prisioneros de guerra españoles que se habían rendido en Cuba al ejército de los Estados Unidos.



IX

Barcos pescadores

Del punto de vista del desarrollo del derecho la opinión más importante manifestada por la Suprema Corte en la cuestión de la sujeción á apresamiento de la propiedad enemiga fué la motivada por el caso de los barcos pescadores españoles *Paquete*, *Habana* y *Lola*. El punto particular decidido fué el de que "los barcos pescadores costaneros, con sus accesorios y provisiones, cargamento y tripulación, desarmados y honestamente dedicados á su tráfico pacífico de cojer y conducir pescado fresco, están excentos de ser capturados como presa de guerra". Al sentar esta conclusión, la corte adoptando la opinión del juez Gray anunció y aplicó un principio que, apesar de ser frecuentemente reconocido por los publicistas, nunca quizás anteriormente había sido tan clara y precisamente enunciado por un tribunal, cuales es, el principio del desenvolvimiento progresivo del derecho internacional. En relación á una decisión de lord Stowell, en la cual se decía que la exención de los buques de esa categoría era "solo una regla de comitas y no una regla de decisión legal", el juez Gray expresó así:

"La palabra "comitas" parece haber sido empleada por el lord Stowell como sinónima de cortesía ó buena voluntad. Pero el periodo de cien años trascurrido desde entonces es ámpliamente suficiente para convertir en regla establecida del derecho internacional por el concurso general de las naciones civilizadas, lo que se había admitido por la costumbre ó la comitas, la cortesía ó la concesión. Como lo ha dicho muy bien sir James Mackintosh, "en el presente siglo se ha introducido en la práctica de la guerra una mitigación lenta y silenciosa pero muy sustancial; y á medida que esa práctica mitigadora ha recibido la sanción del tiempo, ha ascendido del rango de mero uso á formar parte del derecho de las naciones".

Debe esperarse que esta brillante declaración conducirá á nuestras cortes á abandonar la repetición de la infortunada *dicta* en el caso Brown v. Estados Unidos, basada en la teoría de que era prerrogativa peculiar desde época remota el decidir por sus costumbres, por rudas y bárbaras que puedan ser; de modo que podían descartarse á voluntad las costumbres de los tiempos modernos que solos eran “comitas” ó “cortesía”.

X.

Bloqueos

El primer acto hostil de los Estados Unidos en el comienzo de la guerra fué el bloqueo de los puertos de la costa norte de Cuba desde Cárdenas hasta Bahía Honda inclusive, y del puerto de Cienfuegos en la costa sud. En consecuencia, el gobierno proclamó el bloqueo de todos los puertos de la costa sud de la isla, desde el Cabo Francés hasta Cabo Cruz inclusive, y del Puerto de San Juan de Puerto Rico. Se mantuvieron igualmente varios bloqueos *de facto*. Teniendo el bloqueo por objeto la intercepción de todo tráfico comercial entre los habitantes de la plaza bloqueada y el mundo exterior, es regla general la de no permitir despachar cargamentos después de establecerse el bloqueo, salvo durante un plazo, que es comunmente de 15 días, en que se permite salir á los buques en lastre ó con cargamento adquirido y embarcado antes del comienzo del bloqueo. En la primera proclamación de bloqueo por los Estados Unidos, publicadas el 22 de abril, se concedía un periodo de 30 días á los buques neutrales para que salieran de los puertos bloqueados, pero nada se decía con respecto al cargamento. Por consiguiente, debía inferirse naturalmente que no podía

tomarse carga después de haber sido establecido el bloqueo. Pero al aplicar la proclamación á los casos que ocurrieron, los Estados Unidos interpretaron que podía tomarse carga durante los 30 días; y al darse la segunda proclama se estatuyó expresamente que se acordaba á los buques neutrales, que estaban en cualesquiera de los puertos á que se extendía el bloqueo, un plazo de 30 días para hacerse á la mar con sus cargamentos. Las mismas reglas se aplicaron en los casos de los bloqueos *de facto* establecidos por el almirante Dewey en Filipinas. Estas y otras reglas fueron consignadas en las "Instrucciones para buques bloqueadores y cruceros" que aparecieron el 20 de junio de 1898 por intermedio del Departamento de Marina y con la cooperación del Departamento de Estado, para información y guía del servicio naval.

En varias ocasiones, por razones y para objetos especiales, se permitió á los buques entrar á los lugares bloqueados. Después de la primera proclamación de bloqueo, se permitió la entrada en el puerto de la Habana al vapor correo francés *Lafayette*, para desembarcar correspondencia y pasajeros. Esta concesión fué acordada á pedido de la embajada francesa, la cual informó que el buque había salido de St. Nazaire, Francia, para la Habana, después de haber aparecido la proclamación. Análogo privilegio se hizo extensivo al vapor alemán *Polaria* á pedido de la embajada alemana, á condición de que antes obtuviera un permiso formal del jefe naval de los Estados Unidos en Cayo Oeste, debiendo limitarse en la Habana al desembarco de los pasajeros y correspondencia que llevaba de Hamburgo, abstenerse de desembarcar ningún género de mercaderías, ni embarcarlos, con excepción de ciertos artículos destinados al emperador, y pudiendo tomar á bordo "pasajeros americanos ó neutrales que quisieran salir de allí, pero nó á otras personas".

A principios de la guerra se dieron permisos especiales á ciertos buques neutrales para entrar á los puertos bloquea-

dos de Cuba con objeto de embarcar á los americanos y neutrales que quisieran salir de ellos. El consul de los Estados Unidos en Kingston, Jamaica, recibió orden de otorgar certificados á los buques mencionados para pasar por las líneas de bloqueo.

Igualmente se dió permiso, á pedido de los respectivos diplomáticos, al vapor inglés *Myrtledene* y al noruego *Folsjo* para volver á entrar al puerto de Cárdenas: ambos buques habían salido de ese puerto al notificárseles el establecimiento del bloqueo. En cada caso quedó demostrado que el vapor no solo había sido notificado del bloqueo, sino también que se le había ordenado retirarse. Uno de ellos por lo menos negó despues que se le hubiera ordenado retirarse; pero conviene notar que al recibir la notificación del bloqueo, los buques no estaban informados de las disposiciones de la proclama del Presidente, que acordaba un plazo de 30 días á los buques neutrales que estuvieran en los puertos bloqueados, y que en caso de no ordenárseles expresamente la salida no tenían porque interpretar la notificación como una orden de alejarse. El *Folsjo* tenía á bordo parte de su cargamento, y en ambos casos quedó evidenciado que la carga que había abandonado pertenecía á ciudadanos de los Estados Unidos. Bajo estas circunstancias, se dictaron órdenes para permitir á los buques en cuestión que volvieran á entrar al puerto y tomaran á bordo, á la brevedad posible, los cargamentos de azúcar que habían abandonado; bien entendido que el permiso se concedía sujeto á las exigencias de cualesquiera operaciones militares activas, que ambos buques debían observar estrictamente los deberes de neutralidad y especialmente no conducir más hombres ó provisiones que los necesarios para el viaje. Posteriormente, ante la declaración del ministro de Suecia y Noruega de que el *Folsjo*, despues de varios días de estadía en Cayo Oeste, había llegado á Nueva York, y que de acuerdo con una póliza de fletamento anterior debía regresar á Europa, se permiti

tió que ocupara su lugar el vapor noruego *Uto*, con la condición adicional de que antes de ir á Cárdenas debía recalar en Cayo Oeste, y obtener una carta formal de permiso del comandante de la estación naval de los Estados Unidos.

Casi al final de las hostilidades se intentó establecer un bloqueo *de facto* en el puerto de Sagua la Grande, en la costa norte de Cuba; pero se abandonó la empresa por órdenes emanadas de Washington, y se puso en libertad á ciertos barcos que habían sido apresados ostensiblemente por causa de aquel bloqueo. Se supuso que estaba comprendido en esta categoría el vapor francés *Manoubia*, pero en realidad fué capturado nó por violación de bloqueo sinó por sospechas de que "se ocupaba en el interés del enemigo". El 10 de agosto de 1898, el Ministerio de Marina telegrafió que por unos días se consideraba mejor no extender el bloqueo más allá de lo que había sido proclamado añadiendo: "Fuera de esos límites tengan mucho cuidado en no apresar buques, á menos de que sean españoles ó conduzcan contrabando de guerra, pues los neutrales tienen derecho de traficar con los puertos cuyo bloqueo no ha sido proclamado".

El 15 de julio de 1898, el Departamento de Estado dirigió á todos los representantes extranjeros en Washington una circular relacionada con la entrada de los buques de guerra neutrales á los puertos bloqueados. En esta circular se decía que aunque el gobierno no estaba dispuesto á "restringir el permiso cortés hasta ahora acordado á los buques de guerra neutrales para entrar á los puertos bloqueados, es de desear que se evite todo riesgo de error ó de desgracia por la debida atención á las reglas prescriptas tanto por la prudencia como por la cortesía. A este fin todo buque de guerra neutral que desee entrar á un puerto bloqueado ó salir de él, deberá comunicarlo al oficial más antiguo de la fuerza bloqueadora.

En cuanto al puerto de la Habana, se decía que “conven-
dría que los buques de guerra neutrales.....al mismo tiempo
que observaran las indicaciones anteriores, se acercaran al
puerto por rumbos comprendidos entre el N 1¼ O y el
N 1¼ E, siguiendo la misma derrota general á la salida”,
por la razón de que hallándose estacionado el oficial coman-
dante al norte del Morro, “ese rumbo facilitaría á los bu-
ques la rápida comunicación con él, atendiéndose no sólo
á un punto del ceremonial marítimo sinó también á evitar
el peligro de confundir á un buque de guerra neutral con uno
enemigo en tiempo oscuro ó brumoso”.

Los diferentes miembros del cuerpo diplomático acusa-
ron recibo á esa circular y en ningún caso, ni entonces,
ni después, se hizo objeción á su contenido. Al contra-
rio, el gobierno alemán presentó ciertas observaciones que
fueron aceptadas por los Estados Unidos como bases de
un arreglo para lo futuro. Las reglas aceptadas fueron
estas:

1º El consentimiento del gobierno bloqueador, obtenido
por la vía diplomática común, salvo caso de urgencia ex-
cepcional, debe ser un requisito previo para la entrada de
un buque de guerra neutral á un puerto bloqueado.

2º La aproximación á un puerto bloqueado debe hacer-
se de manera que el oficial más antiguo de la escuadra
bloqueadora pueda con certeza identificar al buque neutral,
al aparecer en las aguas bloqueadas, como el buque de
cuya venida ha sido notificado.

3º En casos excepcionales, que impidan obtener el per-
miso previo por la vía diplomática usual, decidirá el oficial
más antiguo de la escuadra bloqueadora que se halle
presente.

4º Al salir de un puerto bloqueado no se requerirán
más formalidades especiales que las necesarias para iden-
tificar al neutral que sale, debiendo acordarse tales for-
malidades por su comandante y el oficial encargado del
bloqueo.

Tres casos referentes al derecho de bloqueo fueron juzgados por la Suprema Corte. El primero fué el caso del vapor francés *Olinde Rodríguez*, de la Compagnie Générale Transatlantique. Zarpó del Havre el 16 de junio de 1898, en su carrera habitual de paquete-correo, para los puertos antillanos de St. Thomas, San Juan (Puerto Rico), Puerto Plata, Cabo Haitiano, St. Marque, Port au Prince, Gonaves, y regreso, con escala en los mismos puertos. La proclama que declaraba bloqueado á San Juan se dió el 27 de junio de 1898. El *Olinde Rodríguez* llegó á St. Thomas el 3 de julio, y el 4 de julio entró en el puerto de San Juan. El vapor de los Estados Unidos *Josemite*, que estaba vigilando el bloqueo á 3 millas al S. O. del puerto, dió caza, pero no pudo alcanzar al vapor antes de que se pusiera bajo la protección de las baterías de costa. Cuando salió á la mañana siguiente, el comandante del *Josemite* aceptando la declaración del capitán de que ignoraba que el puerto estaba bloqueado, asentó una notificación en su diario de navegación y le permitió que siguiera viaje. Había completado su itinerario, y en viaje de regreso acababa de salir de Puerto Plata, cuando el 17 de julio fué capturado por el vapor de los Estados Unidos *New Orleans* á la altura de San Juan, acusado de querer entrar al puerto. Las cuestiones que surgieron versaron sobre la existencia de la intentona de entrada y sobre la existencia de un bloqueo legal. La corte inferior puso en duda la validéz del bloqueo, á causa de estar mantenido por un solo crucero. La Suprema Corte observó que lo que había que examinar era si el bloqueo, era “prácticamente efectivo”; apesar de ser mixta esta cuestión, ella era más de hecho que de derecho: que por la Orden General No 492, “para que un bloqueo sea efectivo y obligatorio debe ser mantenido por una fuerza suficiente para hacer peligrosa la entrada al puerto ó la salida de él”; que apesar de no poderse definir prácticamente cuál debía ser ese grado de peligro, bastaba que él fuera

“real y visible”; y que la cuestión de la efectividad no estaba contraloreada por el número de las fuerzas bloqueadoras. No puede sostenerse, decía la corte, que un crucero moderno aunque suficiente en el hecho, no lo sea en derecho; ni puede un buque discutir la eficiencia de dicha fuerza cuando ha sido apresado al intentar entrar al puerto bloqueado, después de una notificación asentada en su diario en la boca de ese puerto por un crucero sólo unos cuantos días antes. Por consiguiente el bloqueo era efectivo y obligatorio. Por otra parte, la corte decidió que la intentona de violar el bloqueo no estaba suficientemente probada; pero, que en vista de las circunstancias sospechosas, se ordenaba que la restitución debería efectuarse sin daños ni perjuicios y que, á excepción de los honorarios del abogado, los gastos de su custodia y conservación y las costas debían imponerse al buque.

El vapor inglés *Newfoundland* fué apresado en las costas de Cuba el 19 de julio de 1898 por un crucero de los Estados Unidos, acusado de haber intentado violar el bloqueo de la Habana. Después del testimonio preparatorio se citó á prueba, condenándose más tarde al buque y á su cargamento. Esta sentencia fué revocada por la Suprema Corte. En este caso se trataba principalmente de una cuestión de hecho. Se alegó que el buque estaba haciendo tiempo con la intención de aprovechar una oportunidad para entrar á la Habana, que no llevaba luces de navegación y que estaba fuera de su derrota. Estas afirmaciones fueron discutidas y la corte vacilaba en declarar que había habido trasgresión fundada sólo en la concurrencia de cierto número de “circunstancias sospechosas” cada una de la cuales “aisladamente” podía ser “explicada”. Al discutir la prueba de que el buque estaba haciendo tiempo, la corte inferior observó que “distaba muy poco” de ser la misma que había servido en otros casos para condenar á ciertos buques de vela; pero que apesar

de no haber prueba plena y precisa debía aceptar como tal la producida porque se trataba de buques de vapor, á causa de su mayor movilidad. "Indudablemente hay una diferencia", dijo la Suprema Corte, "pero si el vapor ha aumentado el poder de los forzadores de bloqueos, aquél unido al alcance de la artillería moderna ha aumentado en mayor grado el poder de los bloqueadores. Recientemente hemos tenido ocasión de considerar este poder y hemos decidido que un simple crucero moderno podía hacer un bloqueo efectivo". Se ordenó la restitución del buque y del cargamento, pero sin costas ni perjuicios.

El 29 de junio de 1898, el vapor *Adula*, de 372 toneladas, perteneciente á la compañía británica "Atlas", fué apresado por el vapor de los Estados Unidos *Marblehead*, acusado de intentona de violación de bloqueo establecido en la bahía de Guantánamo, Cuba. En el momento de su captura estaba contratado en Kingston, Jamaica, por un tal Solis, súbdito español, para conducir á Kingston pasajeros de los puertos cubanos de Manzanillo, Santiago y Guantánamo. Acompañaba al contrato una carta con instrucciones para el capitán, firmada por el agente de la compañía en Kingston, por la cual se le comunicaba al capitán que á su llegada á Guantánamo, á donde debía dirigirse directamente, sin duda encontraría buques de guerra americanos fuera del puerto; y se le ordenaba que al ver señales se detuviera inmediatamente é informara del viaje al oficial comandante, en cuyo caso, decían las instrucciones; el oficial no se opondría á que penetrara en el puerto. El vapor fué condenado y la sentencia fué confirmada por la Suprema Corte, que adoptó el dictamen del juez Brown.

Las cuestiones que debían examinarse eran la existencia de un bloqueo legal en Guantánamo, el conocimiento del bloqueo por los que estaban á cargo del buque y su intención al emprender viaje desde Kingston. El presidente nunca había proclamado el bloqueo de Guantánamo, des-

de que ese lugar está al este de la línea establecida por la proclama de 27 de junio. Pero se probó que los bloqueos de Santiago y Guantánamo habían sido establecidos de hecho por el almirante Sampson, á principios de junio y mantenidos hasta pocos días después del apresamiento del *Adula*; y en vista de las operaciones emprendidas entonces para destruir ó capturar á la escuadra española y obtener la rendición de Santiago, la corte declaró que dichos bloqueos habían sido legalmente instituidos, como parte de tales operaciones. Sin embargo se opuso que al tiempo de la captura el puerto de Guantánamo estaba en posesión y bajo el contralor de los Estados Unidos y que por esa razón el bloqueo había terminado. La ciudad de Guantánamo queda á 18 millas de la boca de la bahía del mismo nombre. El puerto estaba en poder de oficiales de marina de los Estados Unidos y una fuerza de desembarco ocupaba la cresta de una colina de la banda izquierda de la rada, cerca de su entrada; pero la ciudad al fondo de la bahía, así como otras varias posiciones próximas estaban todavía ocupadas por fuerzas españolas; la campaña en las cercanías era teatro de un activo movimiento y frecuentemente ocurrían encuentros entre las tropas americanas y españolas. Bajo estas circunstancias la corte sostuvo que "el bloqueo existía todavía contra los buques destinados á la ciudad, de Guantánamo". La ocupación de una ciudad, continuaba la corte, "termina un bloqueo por la toma de aquella y solo por esa causa; y la ocupación de la boca del puerto no hace terminar necesariamente el bloqueo para los buques destinados á un puerto ó un lugar que está todavía ocupado por el enemigo."

Siendo legal el bloqueo, la corte encontró que resultaba de los hechos que los que estaban á cargo del buque conocían la existencia de aquél y que, por consiguiente, era injustificable su destino á aquél puerto, cuyo acto sometía el buque á condena.

XI.

Contrabando

Durante la guerra con España, la cuestión del contrabando no dió lugar á controversias judiciales. El punto estaba reglamentado por la Orden General N° 492, según la cual “el contrabando de guerra comprende solo los artículos que tienen un destino beligerante, como para un puerto ó escuadra enemigos”. Según la orden algunos artículos eran considerados como “contrabando en absoluto” y otros como “contrabando condicional”. Los primeros eran:

“Artilería, ametralladoras y sus montajes y accesorios; planchas de blindaje y todo lo relativo al armamento ofensivo y defensivo de los buques de guerra; armas é instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre ó cualquier otro material, siempre que tales armas, ó instrumentos fueran especialmente adecuados para su empleo en la guerra por mar ó por tierra; torpedos y sus accesorios; envueltas para minas, de cualquier material; materiales de máquinas y de transporte, tales como cureñas, armones, cajas de munición, forjas de campaña, caramañolas, pontones; pertrechos de guerra; telémetros portátiles; banderas de señales; municiones y explosivos de todo género; maquinaria para la manufactura de armas y municiones de guerra; salitre; avíos y equipos militares de toda clases; caballos”.

“Eran contrabando condicional”:

“El carbón, cuando era destinado á una estación naval, á un apostadero, ó á un buque ó buques del enemigo; los materiales para la construcción de ferro-carriles y telégrafos y el dinero, cuando tales materiales ó dinero eran destinados á las fuerzas del enemigo; las provisiones destinadas á un buque ó buques del enemigo ó á una plaza sitiada.”

Por el real decreto español de 23 de abril de 1898 se definía el contrabando como sigue:

“Cañones, ametralladoras, morteros, fusiles, toda clase de armas blancas y de fuego, balas, bombas, granadas, espoletas, cartuchos, mechas, pólvora, azufre, salitre, dinamita y toda clase de explosivos; artículos de equipo como uniformes, correas, sillas de montar y arneses de artillería y caballería; máquinas para buques y sus accesorios, ejes, hélices, calderas y otros artículos empleados en la construcción, reparación y armamento de los buques de guerra; y en general todos los instrumentos adecuados á la guerra, utensilios, planchas y otros artículos, y todo lo que en lo futuro pueda ser determinado como contrabando”.

Pero por la última cláusula, que parecía ser capaz de hacer frustránea la anterior enumeración específica, éste parágrafo daba lugar á pocas objeciones. Poco después de su promulgación el decreto fué restringido á pedido del gobierno italiano por una dispensa especial á favor del azufre, que se obtiene de Sicilia principalmente.

XII.

Relaciones comerciales

Por las leyes estrictas de la guerra está prohibido todo tráfico entre los enemigos. El 27 de abril de 1898, el ministerio de hacienda impartió á los jefes de aduana ciertas instrucciones que habían sido preparadas de acuerdo con el Departamento de Estado. Estas instrucciones prohibían el despacho de un buque americano para un puerto español, pero la única restricción á que sometía el despacho de cualquier otro buque para tal puerto era la de que el buque no condujera cargamento de contrabando de guerra ó de carbón. Así estaba permitido el despacho para un puerto español de un buque neutral con carga perteneciente á un

americano, y con esta extensión se toleró el tráfico entre los enemigos.

Aquí debemos mencionar dos cuestiones que son operaciones beligerantes y afectan á las relaciones comerciales. La primera es el hecho de cortar un biligerante los cables submarinos de propiedad de los nautrales; con el objeto de evitar que el adversario haga uso de ellos en adelante con designios hostiles. La protección de los cables submarinos fuera de las aguas territoriales está reglamentada por la convención internacional firmada en París el 14 de marzo de 1874. Esta convención, en la que son parte los Estados Unidos, dispone expresamente que sus estipulaciones "de ningún modo afectan á la libertad de acción de los beligerantes." Como la comunicación por cables es relativamente moderna, no eran numerosos los precedentes anteriores á la guerra con España. Al principio de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos consideró "la ventaja de declarar neutrales á los cables telegráficos". y á este fin ordenó á las fuerzas navales de las aguas cubanas que no tocaran á los cables hasta nueva orden. Pronto fué revocada esta prohibición. A principio de mayo de 1898, tres cables fueron cortados dos cerca de Cienfuegos, con la mira de interrumpir las comunicaciones con la Habana. El 16 de mayo, se hizo un esfuerzo infructuoso para cortar los cables de Santiago de Cuba-Jamaica; y dos dias después uno de ellos fué pescado á 13 cables del Castillo del Morro. El 20 de mayo, el cable que unía á Cuba con Haití fué cortado á la altura del muelle de San Nicolás. El 11 de julio, se cortó el cable que unía á Santa Cruz del Sur, Trinidad, Cienfuegos y la Habana con Manzanillo y el este de Cuba; y cinco días después se hizo lo mismo con la línea que unía á Santa Cruz y Júcaro. Todos ó casi todos los cables pertenecían á neutrales. El cable neutral(británico) de Bolinao, Filipinas, á Hong-Kong, fué

cortado por el almirante Dewey. (1) En todos estos casos el objeto de la interrupción era el de confundir y frustrar las operaciones militares, tanto ofensivas como defensivas, del enemigo. (2)

La segunda cuestión se refiere á las malas encontradas á bordo de los buques apresados. Las instrucciones del ministerio de marina de 18 de agosto de 1862 á los oficiales de la armada de los Estados Unidos, contenían á este respecto el siguiente párrafo:

“Cuarto. Para evitar dificultades y errores con respecto á los papeles que estrictamente pertenecen al buque apresado, y las malas que este conduce, ó paquetes con sellos oficiales, procederá Vd. en cumplimiento de las prescripciones legales á conservar todos los papeles y escritos que encuentre á bordo y á remitir todos los originales sin mutilación al juez del distrito en que se debe ser adjudicada la presa; pero los sellos oficiales, candados ó ligaduras de autoridades extranjeras, en ningún caso y bajo ningún pretexto, deberán ser rotos, ni leídos por ninguna autoridad

(1) Cuando el almirante Dewey se apoderó del extremo del cable en las Filipinas, debido á las estipulaciones contenidas en la concesión española para la construcción del cable, aquél se encontró inhabilitado para disponer del extremo de Hong-Kong y para emplear el cable en su uso exclusivo. Los Estados Unidos pidieron entonces permiso para implantar en Hong-Kong un nuevo cable desde las Filipinas, el cual pensaba construir una compañía americana. El gobierno británico, después de consultar á los asesores de la Corona, decidió que debía denegarse el permiso solicitado porque su concesión en aquellas circunstancias constituiría una violación de la neutralidad.

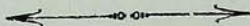
(2) Presentaron reclamos por daños y perjuicios las compañías cuyos cables habían sido cortados y que fueron las siguientes: la Eastern Extension Telegraph, la Cuba Submarine Telegraph y la French Trans-Atlantic Cables. Los Estados Unidos en relación á estos reclamos sentaron como proposición general y como materia de derecho que los cables telegráficos neutrales están expuestos en tiempo de guerra á las mismas vicisitudes de cualquier otra propiedad neutral; que este parecer estaba confirmado por el art. XV del tratado de París de 14 de marzo de 1874 para la protección de los cables submarinos, el cual estipulaba que no debía entenderse que la convención afectaba á la libertad de acción de los beligerantes; pero que era preferible considerar las reclamaciones del punto de vista de la equidad. Por esa razón el presidente envió dichos reclamos al Congreso con un mensaje en que recomendaba que, como asunto de equidad, se le prestara atención favorable hasta el monto del daño efectivamente sufrido.

naval los paquetes que aquellos encierran; antes bien las bolsas y demás envolturas que cubren á dichos paquetes, debidamente asegurados por autoridades extranjeras, serán entregadas, según lo juzgue más conveniente el oficial de los Estados Unidos á cuyas manos lleguen, al cónsul, jefe de estación naval ó legación del gobierno extranjero, para su apertura; en la inteligencia de que todo lo que es contrabando ó puede probar el carácter del buque apresado debe ser remitido al tribunal de presas, ó al Secretario de Estado en Washington; y á éste departamento, los sacos y paquetes sellados, á fin de que puedan recibirlos sin retardo las autoridades respectivas de los gobiernos extranjeros”.

Durante la guerra con España no surgió ninguna discusión internacional relativa á la disposición de las malas. Por la convención Postal Universal de Viena, art. 4. sec 1, que estaba entonces en vigor, “el derecho de tránsito” estaba garantizado á “través de todo el territorio” de los países que forman la Unión Postal Universal, de la cual eran miembros los Estados Unidos y España. Esta estipulación se estableció para asegurar el tránsito seguro de las balijas cerradas que pasan de uno á otro país de la Unión Postal; pero sin considerar para nada “á las balijas que pasan de una á otra oficina de correos de un mismo país”

Por el protocolo firmado en Washington el 12 de agosto de 1898, se tomaron disposiciones para la inmediata suspensión de las hostilidades, como preliminar de la conclusión de la paz. Se levantaron inmediatamente los bloqueos, y el 17 de agosto de 1898 el Departamento de Estado, en respuesta á una pregunta del gobierno español, declaró que no se pondría obstáculo alguno al restablecimiento del servicio postal con vapores españoles entre España, por una parte, y Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, por la otra; que no se haría objeción á la importación de mercaderías en buques españoles á Cuba y Filipinas,

pero que se había decidido reservar á los buques americanos la importación de mercaderías de los Estados Unidos á Puerto Rico; y que se permitiría á un vapor español, fletado por comerciantes franceses y que entonces se hallaba en el Havre, que fuera á Filadelfia y cargaría petróleo para fines industriales, con tal de que no fuera transportado á Puerto Rico. Se añadía que estas respuestas se daban en la inteligencia de que para ese tiempo ya no se excluyera de los puertos españoles á los barcos americanos; que si las hostilidades recomenzaban, se concedería á los buques americanos que pudiera encontrarse en puertos españoles un plazo de 30 días para cargar y salir con carga que no fuera de contrabando; que á todo buque americano que hubiera zarpado para un puerto español antes de la renovación de las hostilidades se le permitiría entrar á su puerto de destino, descargar su cargamento y zarpar después sin molestia alguna; y que en caso de ser encontrado en el mar ese buque por un buque español se le permitiría continuar viaje para un puerto no bloqueado. Estas condiciones fueron aceptadas por el gobierno español y el tráfico comercial quedó restablecido.





Reg	1619 21/8
Cat	24
Clas.	25/08

21 AGO. 2003



INFORMACIÓN JURÍDICA



SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA